

AÑO II • NÚMERO 7 • ENERO-FEBRERO DE 1993

# CRÓNICA LEGISLATIVA

ÓRGANO DE INFORMACIÓN DE LA LV LEGISLATURA • H. CÁMARA DE DIPUTADOS • PODER LEGISLATIVO FEDERAL

**EDUCACIÓN: REFORMAS  
AL ARTÍCULO TERCERO**

**LOS PARLAMENTOS  
INTERNACIONALES**



**EL PRIMER PERIODO  
ORDINARIO**





Dip. Fernando Ortiz Arana  
*Presidente de la Gran Comisión*

Dip. César A. Santiago Ramírez  
*Secretario de la Gran Comisión*

Dip. José A. González Fernández  
*Secretario de la Gran Comisión*

Lic. Mario A. Navarro Manrique  
*Oficial Mayor*

C.P. Benjamín Hedding Galeana  
*Tesorero*

Lic. Aquiles López Sosa  
*Oficial Mayor de la Gran Comisión*

Sr. Héctor González Pérez  
*Director de Comunicación Social*

## CRÓNICA LEGISLATIVA

Año I número 7 enero-febrero de 1993

*Director:* Dip. Luis A. Beauregard R.

*Subdirectores:* Dip. Oscar Pimentel González, Dip. Martín Tavera Urióstegui, Dip. Francisco J. Paoli Bolio, Dip. Yolanda Elizondo Maltos, Dip. René Bejarano Martínez, Dip. Luisa Álvarez Cervantes.

*Consejo Editorial:* Dip. Julieta Guevara Bautista, Dip. Juan Antonio Nemi Dib, Dip. Alfredo Ling Altamirano, Dip. Arturo Nájera Fuentes, Dip. Cuauhtémoc López Sánchez, Dip. Fernando Lerdo de Tejada, Dip. José Antonio González Fernández, Dip. Amador Rodríguez Lozano, Sr. Héctor de Antuñano.

*Coordinación Editorial:* Dip. José Manuel Correa Ceceña.

*Administración:* Leoncio Lorenzo Gómez.

*Producción Editorial:* Bertha Trejo Delarbre.

*Redacción:* Luisa Béjar, Jenaro Villamil, Alejandra Arroyo.

*Diseño:* Grupo Editorial Eón, S.A. de C.V.

*Distribución:* Jesús Bringas, Amílcar Villalobos.

*Servicios de Apoyo:* Sistema de Información y Documentación Legislativa, Comité de Biblioteca y Dirección General de Comunicación Social.

*Corrección de galeras:* Francisco Hernández A.

*Crónica Legislativa*, órgano de información de la LV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aparece ocho veces al año en los meses de enero, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre, y se distribuye en forma gratuita. Domicilio: Av. Congreso de la Unión s/n, edificio H., Palacio Legislativo de San Lázaro, Col. del Parque, 15969 México, D. F. Tels.: 542-5319 y 522-9875. Certificado de Licitud de Título de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas y Certificado de Licitud de Contenido, en trámite. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite en la Dirección General del Derecho de Autor. Registro como publicación periódica expedido por la Dirección General de Correos, en trámite. Impresa en Grupo Editorial Eón, S.A. de C.V., Av. México-Coyoacán 421, Col. General Anaya, México 03330, D.F. Tels.: 604-1204 y 688-9112. Portada: Fachada del exrecinto de la Cámara de Diputados en la calle de Donceles, actualmente sede de la Asamblea de Representantes del D.F.; foto: Andrés Garay.

# Sumario

## RESPUESTA A LA GLOBALIZACIÓN

- 32** Por la senda de los parlamentos supranacionales  
**39** Nuevos pasos para la integración latinoamericana  
**42** Hacia una diplomacia parlamentaria

## OCHO LEYES Y 16 DECRETOS

- 3** La Cámara en diciembre  
**12** El legislativo ante la política económica

## REFORMAS AL ARTÍCULO 3º

- 53** La educación a debate  
**59** FIJANDO POSICIONES  
**63** Cuadro comparativo

## LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

- 20** Contra las prácticas monopólicas  
**24** Los mecanismos antimonopolio

## SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

- 49** Resumen del primer periodo ordinario



- 2** PUNTO DE ACUERDO  
**13** BAJO LA LUPA  
**14** EL ORDEN DE LOS DÍAS  
**16** PARA HECHOS: Luis Dantón Rodríguez  
**19** VENTANA PARLAMENTARIA

- 26** Avances en la protección al consumidor  
**28** Cambios en la Ley de Energía Eléctrica  
**44** Los recintos legislativos  
**46** Actualización legal en el Congreso  
**67** REGISTRO  
**68** PERFILES PARLAMENTARIOS  
**72** ÍNDICE LEGISLATIVO  
**80** DE LOS CLÁSICOS



La educación ha sido desde siempre un principio fundamental del pueblo de México. La defensa de sus valores, su ampliación y profundización es una tarea irrenunciable tanto del Estado como de la sociedad en su conjunto. Es en la educación, y a través de ella, como nos reconocemos en nuestra calidad de nación libre, independiente y soberana. Una nación es lo que es su educación. Por eso, la iniciativa de reformas al artículo tercero de la Constitución fue, tal vez, el mayor acontecimiento legislativo del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LV Legislatura, que concluyó el pasado mes de diciembre.

La iniciativa, enviada por el Presidente de la República, fue motivo de un intenso trabajo de análisis, discusión y concertación, puesto que junto a ella también hubieron de dictaminarse otras siete propuestas de reformas al mismo texto constitucional, que habían presentado en diferentes oportunidades varios de los partidos políticos representados en la Cámara. De aquí que las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, formaran grupos de trabajo, primero para encontrar las coincidencias entre las diversas propuestas, y después para recoger los puntos de acuerdo con respecto al proyecto del titular del Ejecutivo Federal, y reservando para la discusión ante el pleno aquellos temas y posiciones que no pudieron ser materia de consenso.

Como se esperaba, el debate de la iniciativa fue un interesante y vigoroso ejercicio de oratoria parlamentaria en el que los representantes de las fuerzas políticas nacionales expresaron sus concepciones sobre lo que debe ser la educación nacional, la que por sí sola abarca una extensa gama de tópicos. Ninguno de ellos dejó de tocarse en el recio debate que se prolongó por más de 12 horas, al cabo de las cuales fueron finalmente aprobadas, por más de 400 votos, las reformas a los artículos tercero y 31 de la Constitución.

El nuevo texto del artículo tercero, al establecer de manera clara y contundente el derecho de todos los individuos a recibir educación, así como la obligación del Estado de proporcionarla de manera gratuita en su nivel básico —que ahora comprende la primaria y la secundaria—, mantiene inalterable el principio de laicidad y gratuidad de la educación pública. Además, la garantía constitucional del derecho a la educación es ahora más amplia y más profunda, de modo que revitaliza el principio democrático que ve en la educación un medio insustituible de justicia social.

En el mes de diciembre la Cámara también conoció otras importantes iniciativas que establecen nuevas normas para el desarrollo de diversas actividades del acontecer nacional.

Así, se discutieron y aprobaron la Ley de Competencia Económica, que busca establecer un marco legal que impida la formación de monopolios, procurando la competen-

## PUNTO de Acuerdo

Fernando Ortiz Arana

cia económica equitativa; las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, mediante las que los particulares podrán producir energía pero sólo para abastecer a la Comisión Federal de Electricidad, empresa que mantiene la facultad exclusiva de generar, conducir y distribuir energía para el servicio público.

A su vez, la Ley Federal de Protección al Consumidor busca darle mayor eficacia jurídica a esa importante instancia entre el productor, el comerciante y el público, que es la Procuraduría Federal del Consumidor. Por su parte, la Ley de Cinematografía y la Ley de Turismo, fueron objeto de reformas que procuran la liberalización de la tutela gubernamental de esas actividades, además de establecer condiciones legales que las hagan atractivas en términos de inversión económica.

La Ley Orgánica del Congreso de la Unión mereció una amplia, imaginativa y profunda reforma que busca modernizar el marco legal del trabajo parlamentario, en especial de la Cámara de Diputados. La propuesta de reformas fue un trabajo de conciliación con las realidades jurídica y política de la Cámara, y de concertación con las fuerzas que representan esas realidades en el ámbito parlamentario. En todo caso, el marco de referencia fue, como en todo nuestro quehacer legislativo, la norma superior que es la Constitución de la República.

En el mes de noviembre, el presidente Salinas de Gortari expresó ante el Congreso de la Unión —al cual acudió para rendir su informe de gobierno— la necesidad de perfeccionar la legislación electoral para mejorar y ampliar la competencia entre partidos y así ensanchar, modernizándola, la vida democrática del país. Se dejó a los partidos la tarea de presentar un proyecto de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), en especial con respecto a los temas relacionados con el financiamiento de los partidos, los costos de campañas electorales y la procuración de una mejor y más adecuada relación entre partidos y medios de difusión.

En respuesta a esa convocatoria del titular del Ejecutivo Federal, el pleno de la Cámara aprobó la creación de una comisión pluripartidista para la consolidación de la reforma electoral. Esta nueva instancia cameral tiene como propósito estudiar, discutir, elaborar y, en su caso, proponer para su debate y eventual aprobación las reformas, modificaciones y adiciones que perfeccionen las condiciones para la contienda electoral.

Con toda seguridad, el trabajo de dicha Comisión será realizado con responsabilidad y compromiso, y desde luego con vigor y pasión. Ingredientes precisos para que finalmente los diputados mexicanos propongan una reforma electoral congruente con las necesidades políticas y sociales del México inmerso en el cambio y la modernización de finales del siglo veinte.

# Educación, presupuesto y otra docena de asuntos durante diciembre

**N**umerosas y exhaustivas fueron las sesiones de diciembre en la Cámara de Diputados. Periodo intenso y productivo en el que se aprobaron ocho leyes y 16 decretos. Siete de esos ordenamientos legales corresponden a la política presupuestal que cada año se revisa en el Congreso y cuya cámara de origen es siempre la de Diputados. De los 17 decretos y leyes restantes, la Cámara Baja recibió nueve directamente del Ejecutivo y fungió como revisora de los otros ocho. Con este trabajo legislativo finalizó el primer periodo de sesiones del segundo año de la LV Legislatura, en el que se aprobaron a lo largo de noviembre y diciembre, un total de 10 leyes y 17 decretos.

La actividad comenzó con el primer día del mes, en el que el pleno camarl aprobó por 364 votos las reformas a la Ley Monetaria que señalan las características de las monedas de 20 nuevos pesos. También se aprobó el decreto que reforma el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional, a efecto de autorizar al Ejecutivo Federal para que realice una suscripción adicional de acciones de dicho organismo por conducto del Banco de México.

La discusión del paquete financiero que se analiza cada diciembre, se inició el miércoles 2 con el examen del decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1991, que fue aprobado por 285 votos del PRI, con la oposición de todos los demás partidos. El dictamen suscitó ocho horas de debate, cuyo inicio fue



el rechazo a la propuesta del panista Juan de Dios Castro que pedía se fincaran responsabilidades a diversas dependencias del gobierno que registraron discrepancias entre el presupuesto aprobado por la propia Cámara y lo erogado por el Ejecutivo.

Fue al día siguiente cuando se efectuó la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1991, ocasión en que también fue desechada una moción suspensiva para posponer el debate, presentada por el PAN, el PRD y el PARM, que argumentaban faltas y omisiones en el documento. Luego de cinco horas, la Cuenta Pública del DDF fue aprobada por 271 votos.

En ambos debates asistió como espectador el contador Mayor de Hacienda, quien entrevistado en los pasillos durante las discusiones en el pleno, explicó que debido a las modificaciones que los propios legisladores efectuaron a la ley de Responsabilidades Públicas, por primera vez los diputados, senadores y asambleístas, deberían rendir su declaración patrimonial en el mes de marzo, a riesgo de quedar desaforados si incumplen.

Con el fin de dar tiempo para que las comisiones se ocuparan del estudio y dictamen de las diversas iniciativas, la siguiente sesión plenaria no se realizó sino hasta el martes 8 de diciembre. En ella se debatió la Ley de Ingresos de la Federación para 1993,



que le asegura una captación total de 293 691.5 millones de nuevos pesos a la Federación y cuyo dictamen recibió 291 votos de diputados priistas.

### Modernización en casa

Durante los trabajos del 9 de diciembre, legisladores de todas las fracciones parlamentarias se pronunciaron a fa-

vor en lo general de la nueva Ley Orgánica del Congreso, que actualiza las normas para el funcionamiento interno del Poder Legislativo. Una de las principales aportaciones de esta iniciativa, que quedó pendiente de estudio por el Senado, es que le otorga rango de ley a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, que ya venía funcionando en la práctica como órgano de gobierno de la Cámara. Otro aspecto relevante de la nueva Ley Orgánica es que su artículo octavo cancela la posibilidad de interpellar al Presidente de la República durante su informe anual de gobierno.

Una de las bases para el consenso a favor de este ordenamiento jurídico, fue la disposición que se introdujo en el mismo artículo octavo, que estipula la posibilidad de que los titulares de las secretarías de Desarrollo Social, Relaciones Exteriores, Hacienda y Gobernación comparezcan ante la Cámara de Diputados para ampliar la información sobre la política social, externa, presupuestal e interna que presente en su informe el titular del Ejecutivo.

Paralelas a los trabajos del pleno, las reuniones de las comisiones continuaron sin descanso a lo largo de ese mes, muchas de ellas con el objeto de analizar iniciativas y elaborar dictámenes que recogieran las coincidencias de los diferentes grupos parlamentarios. A la vez, las juntas de trabajo con funcionarios de las diversas dependencias se multiplicaron. Ese día 9, la coordinación campesina se reunió con el doctor Arturo Warman, titular de la Procuraduría Agraria, quien realizó un balance sobre la situación en el campo a partir de la entrada en vigor de las reformas al artículo 27 constitucional, y reseñó

*Mediante las reformas a la Ley de Hacienda del DDF se autorizó un nuevo impuesto del uno por ciento en la compra-venta de vehículos usados*

las actividades que realiza la dependencia a su cargo.

Por su lado, los integrantes de la Comisión de Bienes de Consumo y Servicio sostuvieron pláticas con el titular de la Procuraduría del Consumidor, Alfredo Baranda, con vistas a enriquecer el dictamen de la Ley de Protección al Consumidor, que habría de debatirse y aprobarse días después.

En tanto, las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal harían lo propio con el procurador de Justicia del Distrito Federal, Diego Valadés, para recibir información sobre las investigaciones en torno al asesinato del periodista quintanarroense Ignacio Mendoza Castillo.

Fue en la sesión del jueves 10 de diciembre que la Cámara de Diputados autorizó, mediante las reformas a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal -aprobadas por 282 votos de los representantes del PRI y el PFCRN-, que en 1993 se aplique un impuesto del uno por ciento en la compra-venta de vehículos usados, así como tres nuevos derechos especiales referentes a recolección de basura, descarga de residuos a la red de drenaje y servicios privados de se-

### Mesa directiva del segundo mes del primer periodo ordinario de sesiones

#### SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

#### Presidente:

Guillermo Pacheco Pulido (PRI)

#### Vicepresidentes:

Salvador Abascal Carranza (PAN)

Elpidio Tovar de la Cruz (PRD)

José Ramos González (PFCRN)

Servando Hernández Camacho (PARM)

Juan Cárdenas García (PPS)

#### Secretarios:

Layda Elena Sansores San Román (PRI)

Luis Pérez Díaz (PRI)

Mra. Guadalupe Salinas Águila (PAN)

Salvador Juárez García (PRD)

#### Prosecretarios:

Mauricio W. Clark y Ovadia (PRI)

José de Jesús Berrospé Díaz (PFCRN)

Javier Colorado Pulido (PARM)

Héctor Morquecho Rivera (PPS)



## Buenas noticias para los cinéfilos

La nueva Ley Federal de Cinematografía, que sustituye a la Ley de la Industria Cinematográfica aprobada en 1949 y sus sucesivas reformas, crea una doble competencia administrativa para su aplicación. Permanecen en el ámbito de la Secretaría de Gobernación los aspectos normativos, mientras que las cuestiones sustantivas son ahora facultades de la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Las atribuciones de la Secretaría de Gobernación quedan circunscritas a la autorización de la exhibición de películas en territorio mexicano, la administración de la Cineteca Nacional y la aplicación de las sanciones a los ordenamientos en materia cinematográfica. Mientras tanto, las facultades de la Secretaría de Educación Pública van encaminadas a fomentar y promover la producción, distribución y exhibición de películas, objetivo prioritario de esta normatividad.

Una innovación de esta nueva ley es el respeto irrestricto a la concep-

ción y realización de las obras cinematográficas. Las películas extranjeras deberán ser exhibidas en su versión original, subtituladas en español. Sólo las que se dirijan al público infantil y los documentales educativos podrán ser doblados al español.

Otra novedad es la prohibición expresa a la mutilación, censura o corte de cualquier producción cinematográfica por parte del exhibidor. En todo caso, para realizar cualquiera de esos actos, deberá contar con autorización previa del titular de los derechos.

Los precios por la exhibición pública de películas serán fijados libremente. Asimismo, la nueva legislación determina que desde la entrada en vigor de la Ley, hasta el 31 de diciembre de 1993, existe obligación de exhibir películas nacionales en un 30 por ciento de las funciones. Esta proporción irá disminuyendo en un cinco por ciento anual, hasta quedar fija en un diez por ciento en 1997.

guridad. En torno al mismo tema, previamente se había revisado y aprobado con 273 votos el dictamen correspondiente a la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1993.

### Por los jubilados

La tarea legislativa del día 10 no se agotó con el tema de los ingresos para el gobierno de la capital. Otros asuntos también ocuparon la atención de los legisladores. Considerada por el PRI

como un medio para racionalizar el sistema de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y por el PRD y el PPS como un golpe a los jubilados del país, fue aprobada por las fracciones del PRI y del PARM con 238 votos, la iniciativa presidencial de reformas y adiciones a la Ley del ISSSTE. El principal objetivo de las adecuaciones es elevar a rango de ley el Sistema de Ahorro para el Retiro e incorporar a los trabajadores al Servicio del Estado para que al igual que

todos los demás trabajadores del país gocen de los beneficios que otorga este mecanismo de ahorro.

Además, esta ley busca mejorar el régimen social de los trabajadores al servicio del Estado mediante tres vías: reasignando mayores recursos a los montos destinados a los distintos seguros, servicios y prestaciones a cargo del ISSSTE; estableciendo recargos para los retrasos en los pagos de las dependencias obligadas e impulsando el ahorro interno de los trabajadores.

Los principales cuestionamientos de los legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Popular Socialista se debieron al texto del artículo 57, donde se establece que la cuantía de las pensiones se incrementará en función del aumento al salario mínimo del Distrito Federal. Para la oposición, esta reforma es en la práctica una reducción de dichas pensiones, pues deja de lado el sobre-

*El 9 de  
diciembre, 312  
legisladores de  
todas las fracciones  
se pronunciaron a  
favor de la nueva  
Ley Orgánica del  
Congreso*



# *El principal objetivo de las reformas a la Ley del ISSSTE es elevar a rango de ley el Sistema de Ahorro para el Retiro*

suelo y las compensaciones. Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, en cambio, defendieron el proyecto por considerar que además de poner orden y racionalizar el sistema de pensiones del ISSSTE, establece mecanismos administrativos modernos para tutelar a la población derechohabiente.

## **Competencia y consumidores**

La discusión de las leyes federales de Protección al Consumidor y de Competencia Económica se efectuó el lunes 14 de diciembre. Mientras se debatía el dictamen de la Ley de Competencia, un creciente bullicio externo al salón de sesiones distrajo la atención de diputados y observadores: en la explanada del recinto legislativo, integrantes de la Asamblea de Barrios instalaban un plantón para solicitar modificaciones al Presupuesto de Egresos del Distrito Federal -que habría de revisarse el día 17-, con el fin de incrementar la partida para el fomento a la vivienda en la ciudad capital.

En la discusión de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que rescata para el Estado esta función protectora contra los abusos e irregularidades derivadas de la compra venta, los grupos

parlamentarios de PRI, PAN, PPS, PARM y PFCRN se manifestaron a favor de la propuesta. Argumentaron las ventajas de la incorporación de una serie de principios en las relaciones de consumo: a) la protección de la salud contra los productos considerados nocivos, b) una divulgación que garantice la libertad para escoger y la igualdad en las contrataciones, y c) la prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, asegurando la protec-

ción jurídica, administrativa y técnica a los consumidores.

El dictamen fue rechazado sólo por el PRD, que consideró que en sus términos la Profeco adquiere un carácter arbitral entre consumidores y proveedores, lo que le hace perder su papel tutelar de los derechos e intereses de los primeros. El debate, que se extendió por cinco horas y llevó a 22 oradores a tribuna, culminó con la aprobación por 327 votos de la nueva

## **Comisión Permanente**

Integrada, como es habitual, por 19 diputados y 18 senadores, la Comisión Permanente nombrada el 21 de diciembre para ejercer su labor durante el receso que culminará en abril, está conformada por los siguientes 37 legisladores, enlistados por cámara y en orden alfabético:

### **Senadores**

Manuel Aguilera Gómez (PRI)  
Orlando Arvizu Lara (PRI)  
Oscar Cantón Zetina (PRI)  
Ma. Elena Chapa Hernández (PRI)  
Artemio Iglesias Miramontes (PRI)  
Humberto Lugo Gil (PRI)  
Ernesto Luque Feregrino (PRI)  
Rogelio Montemayor Seguy (PRI)  
César Moreno Martínez de Escobar (PRI)  
Roberto Robles Garnica (PRD)  
Carlos Sales Gutiérrez (PRI)  
Gustavo Salinas Iñiguez (PRI)  
Ramón Serrano Ahumada (PRI)  
Germán Sierra Sánchez (PRI)  
Carlos Sobrino Sierra (PRI)  
Héctor Terán Terán (PAN)  
Jorge A. Vega Camacho (PRI)  
Ángel Ventura Valle (PRI)

### **Diputados**

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (PPS)  
Rodolfo Becerril Straffon (PRI)  
Juan Luis Calderón Hinojosa (PAN)  
Jorge Alfonso Calderón Salazar (PRD)  
Carlos Enrique Cantú Rosas (PARM)  
Alberto Carrillo Armenta (PFCRN)  
Juan de Dios Castro Lozano (PAN)  
Manuel Díaz Infante (PRI)  
Blanca Ruth Esponda Espinosa (PRI)  
Diego Fernández de Cevallos (PAN)  
José Antonio González Fernández (PRI)  
Miguel Ángel León Corrales (PRD)  
Jorge Leobardo Lepe García (PRI)  
Fernando Lerdo de Tejada (PRI)  
Rigoberto Ochoa Zaragoza (PRI)  
Victor Martín Orduña Muñoz (PAN)  
Fernando Ortiz Arana (PRI)  
Amador Rodríguez Lozano (PRI)  
Efraín Zúñiga Galeana (PRI)



Sobre educación, el debate más prolongado del periodo.

Ley Federal de Protección al Consumidor, que fusiona al Instituto Nacional del Consumidor (INCO) con la Profe-co.

Por su parte, la Ley Federal de Competencia Económica, que tiene por objeto crear instrumentos de intervención del Estado más precisos para controlar las prácticas monopólicas y permitir un adecuado funcionamiento de las reglas para la libre competencia económica, obtuvo 317 votos.

En esa misma sesión, con motivo de la liberación de Humberto Álvarez Machain por parte del gobierno estadounidense, las diversas fracciones parlamentarias exigieron una profunda investigación sobre la presunta relación del médico mexicano con el narcotráfico.

### El debate esperado

Continuando con las leyes presupuestales, en la jornada del 15 de diciembre las fracciones del PRI y el PFCRN aprobaron con 283 votos y luego de un debate de más de diez horas, el

*El dictamen  
que más horas  
consumió en tribuna  
y mayor votación  
alcanzó, fue el que  
modifica el artículo  
3o. constitucional*

dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1993.

Al día siguiente, miércoles 16, el pleno debatió uno de los dictámenes que más expectativas había despertado, más horas consumió en tribuna y mayor votación alcanzó a lo largo de ese periodo: las modificaciones a los artículos 3o. y 131 constitucionales, que entre otros relevantes aspectos contemplan la inclusión de la secun-

daria dentro del ciclo básico de educación obligatoria.

Previamente, durante el estudio de la iniciativa, las comisiones de Educación y de Gobernación y Puntos Constitucionales dictaminaron también otras siete iniciativas que sobre la materia habían presentado en diferentes momentos los grupos parlamentarios del PAN, el PRD y el PPS. Después de una discusión de 14 horas, durante las que la concepción de cada partido sobre la educación fue expuesta reiteradas veces en tribuna, el dictamen logró 427 votos a favor -la votación más alta del periodo- y fue rechazado sólo por los 12 legisladores pepesistas.

Las razones del PPS en contra del dictamen fueron expuesta en diversas ocasiones a lo largo del debate y se referían en especial a la nueva normatividad en relación con las escuelas particulares. "De aprobarse la minuta en sus términos -argumentó el Popular Socialista- se dejará al Estado en situación de indefensión, ya que pierde la facultad de negar o revocar la autorización para el funcionamiento de los colegios privados".

Una sesión de consensos fue la de ese día 16, ya que en forma previa a la aprobación de las reformas constitucionales, otra iniciativa, la del decreto que reforma y adiciona el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y la ley de Normas Mínimas de Readaptación Social de los Sentenciados, había logrado la aprobación unánime de 387 legisladores de todas las fracciones. Mediante esta normatividad penal se establece que no podrán gozar de libertad condicional quienes incurran en delitos de narcotráfico, violación, plagio o secuestro y robo con violencia en casa habitación.



# *Una de las iniciativas más polémicas fue la referente a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica*

## **Asuntos de vivienda**

El jueves 17 de diciembre, día de la firma del Tratado de Libre Comercio por cada uno de los titulares del Poder Ejecutivo de los tres países involucrados, los trabajos camarales se iniciaron con el rechazo a una propuesta pepestista que buscaba un periodo extraordinario de sesiones para estudiar los alcances del TLC.

Después vino el debate sobre la iniciativa del PARM para terminar con el régimen de rentas congeladas. El argumento del dictamen sostenía que ese sistema de protección al inquilino había provocado abandono de la vivienda en arrendamiento y falta de inversión en este rubro. Trescientos setenta y cinco votos respaldaron el dictamen, que sólo recibió el rechazo del perredista Carlos González Durán.

En esa jornada, 289 diputados del PRI y el PFCRN votaron a favor del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal. A pesar de que la oposición logró que en el pleno el dictamen fuera modificado en varios rubros, el PAN, el PRD, el PARM y el PPS consideraron que los cambios no

## **Turismo para el desarrollo**

Aprobada el 18 de diciembre de 1992 y publicada en el Diario Oficial el día último del año, la nueva Ley Federal de Turismo busca adecuar las nuevas circunstancias del país para el apoyo de la descentralización de la industria turística.

La nueva normatividad involucra a los prestadores de servicios en la toma de decisiones que afectan al sector, haciéndolos coparticipes y corresponsables de su desarrollo. Asimismo, enfatiza la importancia de fortalecer la coordinación entre las dependencias afines de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios.

Una de sus principales características de esta Ley es que desregula el marco jurídico de la actividad turística, con objeto de facilitar y promover la inversión -nacional y extranjera- en instalaciones turísticas y coadyuvar así al desarrollo regional y nacional.

Entre sus características está también la de fortalecer el turismo social.

Para el efecto, se prevé que las dependencias y entidades de la administración pública federal coordinen y promuevan sus esfuerzos para el desarrollo ordenado del esparcimiento turístico de personas con escasos recursos económicos.

Se crea una Comisión Ejecutiva de Turismo, que busca alcanzar niveles de eficiencia y eficacia en el sector y se prevé la elaboración de un Catálogo Nacional Turístico como medio de orientación y promoción.

Otra aportación de la nueva Ley Federal de Turismo, es que estipula que en la prestación de los servicios turísticos no habrá discriminación por razones de raza, edad, sexo, credo político o religioso, nacionalidad y condición social.

En cuanto al turismo extranjero, se indica que las denuncias por incumplimiento del servicio ante al Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, podrán presentarse en México o en el extranjero, mediante correo certificado.

eran suficientes y le negaron su voto aprobatorio. Una de las modificaciones fue el aumento en el presupuesto para el fomento a la vivienda, con lo cual se puso fin al plantón que miembros de la Asamblea de Barrios mantenían a las puertas del recinto legislativo desde el lunes 14.

Al término de la sesión plenaria, los integrantes de la Comisión de Justicia se reunieron con el subprocurador de

Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, para conocer los resultados de las pesquisas en torno a las explosiones del 22 de abril de 1992 en la ciudad de Guadalajara.

## **A propósito de la energía**

Una de las iniciativas que despertó mayor polémica fue la que se discutió



por la tarde del viernes 18 de diciembre. Las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que establece la posibilidad de que los particulares generen energía eléctrica, fue aprobada por las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional y Frente Cardenista por 251 votos, con la tenaz oposición de los legisladores del PAN, el PRD, el PPS y el PARM.

La argumentación priísta de apoyo al dictamen se sustentó en que éste buscaba precisar la participación de los particulares en la generación de la energía para usos privados y "puntuar la aplicación irrestricta del mandamiento constitucional en la facultad del Estado para el servicio público de energía".

Los legisladores del PAN, el PRD, el PARM y el PPS consideraron que los términos de la iniciativa eran contrarios a lo dispuesto por los artículos

27 y 28 constitucionales, que reservan en exclusiva al Estado la generación, transformación, conducción y abastecimiento de energía eléctrica. Los parmistas y algunos panistas votaron en contra, mientras que la mayoría de los legisladores del PAN y todos los del PPS se negaron a votar, argumentando que "la Constitución no se vota". En tanto, los diputados del PRD, inconformes con el dictamen y el curso de la discusión, abandonaron el salón de sesiones después de tres horas de debate.

Horas antes de esa enconada controversia, en un debate con mayores coincidencias que duró alrededor de cinco horas, se aprobó la Ley Federal de Turismo con 302 votos a favor de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana y Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y la mayoría de

*Se aprobaron  
las propuestas para  
que los nombres de  
José Servando  
Teresa de Mier e  
Ignacio Manuel  
Altamirano sean  
inscritos con letras  
de oro en los muros  
del recinto  
legislativo*



La nueva Ley de Turismo busca promover la inversión nacional y extranjera.

los perredistas; la abstención de 11 miembros del PRD y el voto en contra de la bancada del PPS. El proyecto del Ejecutivo, que tuvo al Senado como cámara de origen, busca promover y facilitar la inversión nacional y extranjera en proyectos turísticos que contribuyan al desarrollo económico del país y al equilibrio regional.

#### De próceres y corredores

En lo que se refiere a asuntos de la vida parlamentaria en la Cámara, los días 18 y 21 de diciembre fueron aprobadas las respectivas propuestas del priísta Agustín Basave y el pepesista Martín Távira para que los nombres del neoleonés José Servando Teresa de Mier y el guerrerense Ignacio Manuel Altamirano fueran inscritos con letras de



## Puntos de Acuerdo

### Puntos de acuerdo para la consolidación de la democracia electoral

**Primero.** Se crea una Comisión plural que se encargue de precisar temario, metodología y procedimientos, buscar e integrar los consensos y formular, en su caso, la propuesta legislativa que de ellos se derive, para consolidar nuestras instituciones políticas electorales y sistemas de partidos.

**Segundo.** Dicha Comisión estará integrada por 21 miembros propietarios y 21 suplentes, de la siguiente manera: ocho del PRI, cuatro del PAN, tres del PRD, dos del PARM, dos del PPS y dos del PFCRN.

**Tercero.** La Comisión, para alcanzar los consensos, deberá considerar los temas señalados en este documento y aquellos propios de las iniciativas de los distintos partidos políticos que obran en poder de esta Cámara, buscando mejorar las condiciones de competencia política y de certeza electoral.

**Cuarto.** La Comisión deberá concluir sus trabajos durante el próximo periodo ordinario de sesiones.

**Quinto.** La Comisión buscará los mejores procedimientos para mantener adecuadamente informada a la ciudadanía de sus trabajos.

Aprobados por unanimidad el 21 de diciembre de 1992.

oro en los muros del recinto legislativo. Los decretos, que recibieron 321 y 284 votos a favor respectivamente, sólo fueron rechazados por los legisladores del PAN, quienes señalaron: "no creemos que estas estelas de cantera sean realmente la historia de la patria, sino la crónica del oportunismo". A nombre de la diputación blanquiazul, el sinaloense Esteban Zamora abundó: "aquí se han traído personajes muchas veces sin mayor examen, de acuerdo con las condiciones políticas del momento, de la misma manera que a lo largo de la historia se han mandado retirar los nombres de quienes ya habían logrado un lugar en las estelas de cantera".

El sábado 19 de diciembre la sesión fue breve. Tres horas bastaron para discutir en lo general y en lo particular la nueva Ley Federal de Correduría Pública, cuyo fin principal es asignar al corredor público nuevas funciones, en congruencia con las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles aprobadas en el anterior periodo de sesiones. Así, el corredor público estará en posibilidad de actuar como fedatario en todos los actos y hechos de las sociedades mercantiles. La minuta proveniente del Senado fue aprobada por 323 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones.

#### Séptimo día

El domingo 20 no hubo descanso para los diputados de la LV Legislatura. En una sesión que se extendería por diez horas, dedicaron cuatro de ellas a debatir el informe que días antes recibiría la Comisión de Justicia sobre las investigaciones en relación con el siniestro de abril de 1992 en Guadalajara.

Todos los partidos coincidieron en considerar insuficiente la información de la Procuraduría General de la República. Por ello, y con vistas a continuar la investigación, el perredista Emilio Becerra propuso que se nombrara un fiscal especial que ahondara las indagaciones sobre este asunto. Por su parte, el priista Juan José Castillo Mota se pronunció por formar un grupo especial con miembros de las comisiones de Justicia, Asentamientos Humanos y Ecología, que analizara la documentación recibida. Ambas propuestas fueron turnadas a comisiones.

El trabajo dominical no acabó ahí. Por 322 votos y con la oposición de los diputados del PPS, se aprobó ese día el dictamen sobre la minuta proveniente del Senado para una nueva Ley Federal de Cinematografía. El objetivo de este ordenamiento jurídico es desregular la actividad cinematográfica, eliminando la excesiva intervención estatal, y adecuar la legislación a la realidad determinada por los modernos adelantos audiovisuales. El rechazo del Popular Socialista al dictamen se debió a su inconformidad con que se transfirieran a la Secretaría de Educación Pública algunas de las facultades que antes tenía en este rubro la Secretaría de Gobernación, pues con ello se priva a esta secretaría de la posibilidad de intervenir directamente en la producción de películas.

#### Hacia la reforma política

La última sesión se realizó el 21 de diciembre y en ella se aprobaron por 288 votos las modificaciones a la Ley de Sociedades de Inversión. La iniciativa presidencial que había sido ya aprobada por el Senado, pretende dar



## Integrantes de la comisión plural para la consolidación de la democracia electoral

### PROPIETARIOS

#### Partido Revolucionario Institucional

Fernando Ortiz Arana  
César Augusto Santiago Ramírez  
José Antonio González Fernández  
Amador Rodríguez Lozano  
Rigoberto Ochoa Zaragoza  
Hugo Andrés Araujo de la Torre  
Paloma Villaseñor Vargas  
Salvador Valencia Carmona

#### Partido Acción Nacional

Diego Fernández de Cevallos  
Jorge Zermeno Infante  
Felipe Calderón Hinojosa  
Francisco Gárate Chapa

#### Partido de la Revolución Democrática

Rosa Albina Garavito Elías  
Gilberto Rincón Gallardo  
Ricardo Valero Becerra

#### Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional

Alberto Carrillo Armenta  
Manuel Terrazas Guerrero

#### Partido Auténtico de la Revolución Mexicana

Adolfo Künz Bolaños  
Cecilia Soto González

#### Partido Popular Socialista

Guauhtémoc Amezcua Dromundo  
Juan Campos Vega

### SUPLENTE

Cesáreo Morales García  
Francisco Arroyo Vieyra  
Alejandro Nieto Enríquez  
José Antonio Nemi Dib  
Porfirio Camarena Castro  
José Guadarrama Márquez  
Layda Sansores San Román  
José Manuel Correa Ceceña

Diego Zavala Pérez  
César Jáuregui Robles  
Humberto Aguilar Coronado  
Diego Velázquez Duarte

Francisco Saucedo Pérez  
Raymundo Cárdenas Hernández  
Jorge Moscoso Pedrero

José de Jesús Berrospe Díaz  
Israel González Arreguín

Yolanda Elizondo Maltos  
Servando Hernández Camacho

Jorge Tovar Montañez  
Héctor Morquecho Rivera

***P**or acuerdo  
unánime se  
conformó una  
comisión plural para  
elaborar un  
proyecto de  
reforma electoral*

seguridad al pequeño y mediano inversionista, al dejar en libertad a las sociedades de inversión en cuanto al destino de sus recursos. Las fracciones del PRD y el PPS se opusieron al dictamen por considerar que se aumenta la discrecionalidad de la Comisión Nacional de Valores en detrimento del Poder Legislativo.

Para cerrar el periodo de sesiones, por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios se conformó una comisión plural para estudiar y elaborar un proyecto de reforma electoral que habrá de presentarse en el segundo periodo de sesiones, que dará inicio el 15 de abril. El Acuerdo para la Consolidación de la Reforma Electoral, fue el último punto de la agenda en este fructífero primer periodo de sesiones del segundo año de la LV Legislatura en la Cámara de Diputados, que concluyó con una sesión de Congreso General el 22 de diciembre. Ahí fueron electos los 37 legisladores miembros de la Comisión Permanente para el receso que culminará el próximo abril.

LV



# El legislativo ante la política económica

Una parte importante de las leyes y decretos discutidos durante diciembre, correspondió al llamado paquete fiscal que cada año se revisa en la Cámara de Diputados. Este incluyó las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos tanto de la Federación como del Departamento del Distrito Federal (DDF) para 1993, así como las revisiones a las cuentas de las haciendas públicas Federal y del Departamento del Distrito Federal (DDF) correspondientes a 1991. En el rubro fiscal, en el último mes de 1992 también se debatieron reformas a la Ley de Hacienda del DDF.

Fueron los partidos Revolucionario Institucional y del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quienes apoyaron la iniciativa de Ingresos de la Federación que le otorgó 293 mil 691.5 millones de nuevos pesos de presupuesto para 1993. El argumento para los 291 votos aprobatorios de estos legisladores fue que las medidas previstas garantizan el fortalecimiento del ahorro, la estabilización de precios y los niveles de crecimiento económico.

Legisladores del PAN, el PRD, el PARM y el PPS se opusieron a ese dictamen y al relativo a la iniciativa de Ingresos para el DDF. Para ellos, los criterios eran complejos e inequitativos.

Los seis partidos políticos calificaron de positivo que en el presupuesto para el Distrito Federal, que le otorga 14 millones 535.9 nuevos pesos al gobierno capitalino, los recursos fiscales propios con que contará el DDF aumenten en un 15.7 por ciento con respecto a 1992. También hubo convergencia de la oposición en la necesidad de buscar formas alternativas de obtener recursos para la capital con cargo a quienes perciben altos ingresos.

Tanto PAN y PRD como PPS y PARM se opusieron a las modificaciones a la Ley

de Hacienda del DDF que disponen el cobro del uno por ciento de impuesto por la compra-venta de autos usados, por estimar que se trata de una medida destinada a sacar de circulación los autos viejos más que a proteger el entorno ecológico. Este gravamen fue aprobado junto con otras tres nuevas disposiciones fiscales por 282 votos.

## El gasto social, prioritario

Los presupuestos de egresos de la Federación y del Distrito Federal comparten una característica: ambos incluyen los más altos montos destinados al gasto social en los cuatro años que han transcurrido de la actual administración. Con el presupuesto federal de egresos, que asciende a 275 mil 532.2 millones de nuevos pesos para 1993, se prevé un superávit con respecto a los ingresos. En el caso del Distrito Federal también hay una diferencia a favor de los ingresos, por un total de 14 mil 535 millones de nuevos pesos.

El destino del superávit de más de 18 mil millones de nuevos pesos del presupuesto federal suscitó uno de los debates más enconados entre los legisladores del PRI y de los demás partidos. El mayoritario sostuvo que la distribución de este excedente provocaría inflación y tasas de interés más elevadas, e iría en detrimento de la población por la vía de los precios. Por su parte, los demás grupos parlamentarios afirmaron que, al negarse a disponer de ese ingreso, el PRI y el Ejecutivo pretenden crear una imagen de sanidad en las finanzas. La propuesta de estos partidos era destinar el presupuesto superavitario a combatir las necesidades más apremiantes de la población.

El presupuesto federal de egresos, que finalmente fue aprobado por 289 votos, asigna 106 mil 500 millones de nuevos

pesos al gasto social, cifra superior en un 13.4 por ciento a la correspondiente a 1992.

Por su parte, la iniciativa de Presupuestos de Egresos del Departamento del Distrito Federal fue la que sufrió los mayores cambios durante la discusión en el pleno. El rubro más beneficiado con ellas fue el de vivienda. La iniciativa original también fue modificada para privilegiar los presupuestos destinados a la capacitación de la policía, la reconstrucción del hospital Rubén Leñero y los recursos destinados al Centro Histórico de la ciudad de México.

A pesar de los cambios logrados, los diputados de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Auténtico de la Revolución Mexicana y Popular Socialista votaron en contra del dictamen por considerar que no resuelve las necesidades de los habitantes de la capital del país en rubros como transporte, contaminación y servicios urbanos.

En lo que se refiere a las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 1991, cinco partidos coincidieron en cuestionar la discrecionalidad con que el Ejecutivo ejerció los presupuestos, pues modificó la asignación aprobada por la propia Cámara.

Los argumentos vertidos ya en favor, ya en contra de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, se retomaron en el análisis de la cuenta correspondiente al DDF. En general, la oposición sostuvo que es necesario hacer más estrictos los controles del gasto público y que se carece de elementos para evaluar los objetivos, programas y desviaciones del presupuesto. Por su parte, legisladores del PRI argumentaron que los datos necesarios no se encontraban en el dictamen, por ser un adelanto del informe previo; pero señalaron que en el documento de resultados se establecerían las conclusiones finales.



## BAJO LA LUPA *en cifras* la Cámara

### PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LV LEGISLATURA



**27** Leyes y decretos aprobados

Durante noviembre: **3**

Durante diciembre: **24**

Iniciativa del Ejecutivo: **23**

Iniciativa de los grupos parlamentarios: **4**

**32** Iniciativas presentadas a la Cámara de Diputados

Por el Ejecutivo: **19**

Por los grupos parlamentarios: **13**

Por el PRI: **3**

Por el PAN: **5**

Por el PRD: **2**

Por el PPS: **2**

Conjuntas: **1**

**10** Iniciativas presentadas durante este periodo, que permanecen en comisiones

Del PRI: **2**

Del PAN: **5**

Del PRD: **2**

Del PPS: **1**

**882** Oradores en tribuna

Del PRI: **275**

Del PAN: **152**

Del PRD: **219**

Del PFCRN: **71**

Del PARM: **67**

Del PPS: **73**

Independientes: **25**



Sesiones plenarias: **26**

Horas de sesión: **212**

Denuncias ante el pleno: **25**

Pronunciamientos ante el pleno: **8**

Puntos de acuerdo: **22**

Reuniones en comisiones y comités: **230**

Comisión que realizó más reuniones: Régimen Interno y Concertación Política: **28**

Asuntos turnados por el pleno a comisiones y comités: **94**





# EL ORDEN DE LOS DÍAS

## *Zuehaceres de las comisiones*

### Distrito Federal

## Seguridad y vivienda, temas centrales

Durante el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LV Legislatura de la Cámara, esta Comisión efectuó diez sesiones plenarias de trabajo con diferentes funcionarios del Departamento del Distrito Federal, responsables de las áreas económico administrativa, de desarrollo social, procuración de justicia, protección civil, turismo y vivienda. Ahí los legisladores participantes tuvieron acceso a información y documentación necesaria para un mejor estudio de la problemática de esta megápolis.

Sobre el espinoso asunto de la delincuencia y la seguridad ciudadanas, la Comisión del Distrito Federal, presidida por el diputado Fernando Lerdo de Tejada, se ha propuesto, en colaboración con la Asamblea de Representantes y algunas autoridades, continuar con los trabajos de análisis y elaboración del proyecto de Ley de Seguridad Pública para el Distrito Federal. Para fines de 1992 se habían celebrado 15 reuniones con diversas autoridades en la materia. A

la vez, se efectuaron dos visitas a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con el mismo objetivo.

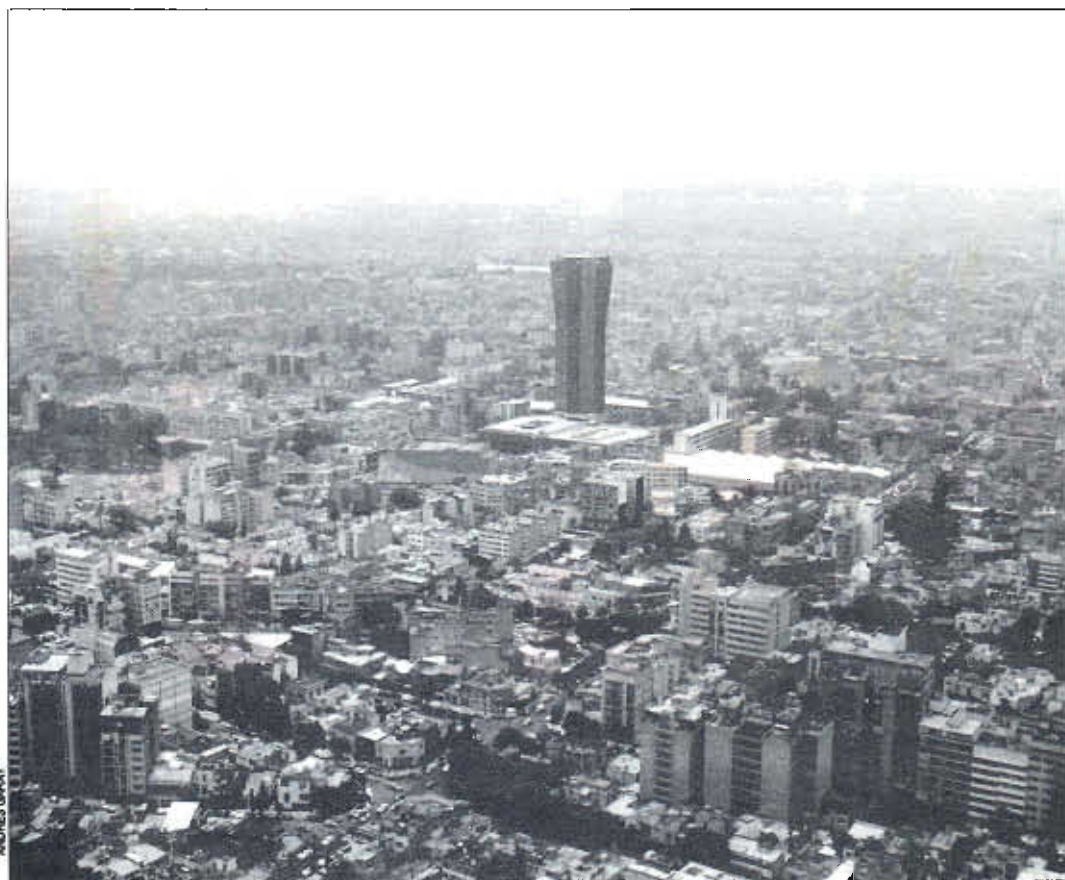
Otro asunto complejo, el de la vivienda en esta capital, provocó que se trabajara en el dictamen, los juicios y las observaciones respecto del régimen de propiedad en condominio para el Distrito Federal, con el fin de acabar con los múltiples problemas derivados de la administración y el trato cotidiano de los condóminos.

La Comisión continúa con el estudio y análisis de la iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal.

El órgano legislativo también se ocupó del estudio y dictamen de la iniciativa para el paulatino "descongelamiento" de rentas en el Distrito Federal, propuesta por el grupo parlamentario del PARM y aprobada en diciembre pasado.

Reuniones de trabajo con

funcionarios del Departamento del Distrito Federal y de la Secretaría de Desarrollo Social para evaluar los avances del Programa Contra la Contaminación Ambiental (PICCA), son algunas de las actividades que para el periodo de receso de enero a abril preveía realizar esta Comisión, cuyos secretarios son el panista Gonzalo Altamirano Dimas, el perredista Gilberto Rincón Gallardo y los priistas Benjamín González Roaro y Amado Treviño Abatte.





## Salud

### Foros internacionales

Presidida por el bajacaliforniano José Ramírez Román, esta Comisión ha realizado numerosos recorridos por centros hospitalarios, así como diversas entrevistas con el secretario de Salud, Jesús Kumate Rodríguez, con la finalidad de ampliar el conocimiento de los legisladores sobre el sistema de salud en el país, así como acerca del desarrollo y el control de los principales padecimientos.

Los 36 miembros de esta Comisión, que tiene como secretarios a Roberto Soto Prieto, Guillermo Flores Velasco, Antonio García Sánchez y Luis Alberto Fuentes Mena, han hecho contacto con diversos organismos internacionales de salud con el propósito de estar al tanto de los avances científicos y técnicos en el tratamiento de diversas enfermedades, así como para familiarizarse con los distintos sistemas de salud operantes en el mundo.

Son siete las subcomisiones en que está dividida esta Comisión para distribuir y hacer eficaz su trabajo. Estas son las subcomisiones de información y estadística, análisis, fundamentación y proposición, difusión y promoción, gestoría institucional, asuntos especiales y organismos internacionales. Además, en diciembre de 1992 se autorizó la creación de un Comité de Asuntos Editoriales en su seno.

En 1993, la Comisión organizará tres foros internacionales con el propósito de aumentar el intercambio de experiencias en materia de salud. Estos son: el Foro Internacional Frontera Sur, que se efectuó ya en Tapachula, Chiapas los días 18 y 19 de febrero; el Foro Regional Cuenca del Pacífico que se realizará en agosto en la capital de Jalisco, y el Foro Regional Cuenca del Golfo, a celebrarse a fines de noviembre en Jalapa, Veracruz. Con el mismo afán se realizarán visitas a países sudamericanos y a organismos internacionales, así como a diversos centros hospitalarios nacionales.

A fines de febrero se llevó a cabo el Foro Internacional de Salud Frontera Sur, con la participación de 20 legisladores federales y la representación de cuatro países centroamericanos: Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, además de la presencia de legisladores de seis estados del sureste de la república: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Los principales temas tratados fueron la situación de la salud en cada uno de los países participantes, las enfermedades infecciosas y parasitarias, la salud ambiental, el crecimiento demográfico, los flujos migratorios y las condiciones de salud, y la situación los grupos indígenas. Los oradores que intervinieron en este Foro sumaron 91 y hubo además seis conferencias magistrales. Estuvieron presentes el secretario de Salud, los gobernadores de Chiapas y Campeche así como la doctora Telma Duarte, viceministra de Salud de Guatemala y el doctor Julio Gamero, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública de El Salvador.

## Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicio

### Un próximo libro y una flamante ley

La nueva Ley Federal de Protección al Consumidor, que finalmente habría de aprobarse el 14 de diciembre, mantuvo la atención de los miembros de esta Comisión encabezada por el perredista Francisco Javier Saucedo Pérez. Con el fin de adentrarse en el tema, se reunieron con el procurador del Consumidor, Alfredo Baranda, a mediados de octubre. Pero no acabó ahí su actividad; además tuvieron entrevistas con el director de la Central de Abasto, Javier Culebro Siles y efectuaron una sesión de análisis con el tema "Situación y perspectivas de la alimentación en México", con la presencia de destacados investigadores en el ramo. Entre tan variadas actividades, tuvieron oportunidad



de celebrar una ceremonia para firmar con la UNAM el contrato de coedición del libro *El abasto de alimentos en México*.

LV



Luis Dantón Rodríguez

## Por una cabal carrera parlamentaria

**H**ijo y nieto de parlamentarios, legislador "por vocación", Luis Dantón Rodríguez Jaime considera que la prohibición constitucional para la reelección inmediata y directa de los diputados federales ha debilitado al Poder Legislativo y ha resultado especialmente nociva para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El actual presidente de la Comisión de Cultura de la LV Legislatura lamenta que "por un prejuicio", el Senado de la República haya congelado hace 25 años la reforma aprobada por la Cámara de Diputados para permitir la reelección absoluta de los legisladores.

Ello ocurrió, recuerda, durante la XLVI Legislatura, la primera pluripartidista, que encabezaba Alfonso Martínez Domínguez. Fue en ella donde el propio Luis Dantón Rodríguez participó por primera vez como diputado, hace casi 30 años.

La Cámara en ese entonces estaba integrada por 198 legisladores. Todos ellos se conocían, refiere el diputado guanajuatense, viajaban juntos, discutían, conversaban, de tal manera que "el debate estaba sustentado por un espíritu de superación que cada parte le imprimía a sus fundamentos: los panistas acentuaban la juridicidad, los pepesistas el carácter ideológico y los oradores del PRI moderaban entre los problemas de carácter téc-

nico-económico y técnico-jurídico, para ir dando cierto orden al debate".

La propuesta para permitir la reelección de los representantes populares fue hecha por el entonces coordinador de la fracción parlamentaria del PPS, Vicente Lombardo Toledano, y logró la aprobación de las bancadas de los cuatro partidos entonces representados en la Cámara: PRI, PAN, PPS y PARM. Sin embargo, fue detenida en el Senado, por lo que "es un tema que sigue siendo parte de la agenda de la reforma política en México".

La reforma, dice Luis Dantón Rodríguez, no buscaba otra cosa que regresar a los términos originales de la Constitución de 1917, que sí permitía la reelección inmediata de los legisladores. En su congelamiento por parte del Se-

nado "hubo un prejuicio de los grupos que rodeaban a las figuras de los expresidentes, que interpretaron la reforma como un intento de Gustavo Díaz Ordaz para buscar su propia reelección".

Refiere que la reelección inmediata de los diputados se suprimió en 1932, cuando Pascual Ortiz Rubio ocupaba la Presidencia de la República. Se adujo entonces que era necesario hacerlo para que hubiera congruencia con la situación de los gobernadores de los estados y del Presidente de la República y para adecuarse al lema de la Revolución Mexicana de "Sufragio efectivo, no reelección".

"En el fondo se buscó una mayor movilidad en los puestos, cosa que se logró sólo en el PRI, no en los partidos minoritarios que repiten sus cuadros legislativos", dice.

A la larga, explica, esto ha afectado a su partido, el Revolucionario Institucional. "Luego de 25 años, la oposición ha logrado tener cuadros políticos de dirección muy experimentados, tanto en las legislaturas de los estados como en el Congreso de la Unión, mientras que el partido mayoritario, en razón del número, va perdiendo calidades y sus cuadros tienen sólo experiencias parciales en el Poder Legislativo".

Rodríguez Jaime, exembajador de México en la India, se refiere en espe-



CÁMARA DE DIPUTADOS



ANDRÉ GUAY

cial al PAN y al PPS como los partidos cuyos legisladores han logrado acumular una mayor experiencia parlamentaria. Esto, dice, no sólo porque sus miembros tienen dos o tres experiencias como diputados, sino también porque en los periodos en que opera para ellos la prohibición constitucional, asisten a la Cámara como asesores o auxiliares y están en el debate aunque no tengan voz ni voto.

### **Desigualdad entre poderes**

Tras de hacer una comparación entre los tres poderes, Luis Dantón Rodríguez opina que sólo en el Legislativo "se improvisa", pues en el Ejecutivo y en el Judicial se valora a los funcionarios en función de su experiencia en diferentes cargos públicos, en el caso del primero, y de su experiencia profesional, en el del segundo.

La improvisación —completa— no sólo alcanza a los legisladores, sino también a los oficiales mayores, a los directores y en general a los funcionarios de la Cámara.

—¿El impedimento constitucional para la reelección inmediata de los diputados ha contribuido a un debilitamiento del Poder Legislativo?

—Definitivamente sí. Últimamente se ha intentado flexibilizar las leyes electorales. Ahora un diputado puede ser representante a la Asamblea del Distrito Federal o ser diputado local en el congreso de su estado, y luego regresar a una curul federal o al Senado; pero eso es un paliativo. Si se quiere hacer un parlamento fuerte, lleno de experiencias y capacidades, se debe actuar con los mismos principios que en los otros dos poderes. No pido ni más ni menos, sólo igualdad.

—Si en estas condiciones es difícil para los priistas una carrera parlamentaria, ¿cómo se explica la suya?

—Creo que mi carrera dentro del Poder Legislativo es derivada de una vocación. Soy hijo de un parlamentario y nieto de otro parlamentario. Llevo el nombre del más grande parlamentario de Francia. Mis primeros estudios fueron sobre los parlamentos. Mis libros son acerca de los diarios de los

debates de la Asamblea Francesa y, por vocación y estudio, me he dedicado a analizar todos los congresos del país.

Diputado federal por cuarta vez, Rodríguez Jaime considera que "en México no hay condiciones para cambiar el sistema presidencialista por el parlamentarismo".

—¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre uno y otro sistema?

—En el sistema parlamentario —responde— el partido que tiene la mayor fuerza electoral nombra al primer ministro, generalmente un diputado en funciones. Así, el primer ministro es responsable frente al Congreso que lo nombró. En cambio, en el sistema presidencial, como el nuestro, el Presidente, que es elegido por voto popular, nombra a sus secretarios sin que intervenga ningún otro poder. El secretario es así responsable sólo ante el Presidente, no ante el Congreso.

Las consecuencias del presidencialismo, agrega, son evidentes. "En este

*H*ace falta  
mayor participación  
en el debate  
y disciplina  
en la investigación,  
la consulta y el  
trabajo colectivo



sistema, el Congreso sólo puede exigir la presencia de un secretario en los casos establecidos por la Constitución, mientras que el sistema parlamentario permite al Congreso cuestionar y responsabilizar a los ministros. Naturalmente que el sistema parlamentario tiene una mayor garantía de los derechos y una mayor legitimidad del ejercicio del poder que el sistema presidencial”.

Considera “absurdo” que en la normatividad mexicana el Congreso apruebe los nombramientos de los jefes militares, cónsules y embajadores y no apruebe a los secretarios de estado. “Estas y otras incongruencias tendrán que corregirse”.

### Para parlamentarios, los de antes

Otro efecto negativo que ha tenido el sistema presidencial es, dice el legislador, que “ha impedido que se desarrolle una cultura política”.

Observa al respecto que en nuestro país el núcleo familiar obedece a un patrón unilateral que viene desde arriba y que en la escuela, con pocas modificaciones, se siguen aún patrones positivistas del *magister dixit*, donde quien habla, pregunta y da respuestas es el maestro, al que no se puede siquiera interrumpir.

“México formó mejores parlamentarios hace un siglo, cuando el Poder Legislativo tenía una mayor importancia relativa en las decisiones del poder público”, dice. “Antes, la cultura política daba mucha atención a la retórica”.

Aporta con buen humor algunos datos curiosos sobre el quehacer parlamentario en México:

Un legislador con experiencia es aquel que tiene diez mil horas de discurso escuchadas, mientras que ape-



CÁMARA DE DIPUTADOS

nas el uno por ciento de esas horas son expuestas por él. Durante el pasado periodo de sesiones, para hablar 15 minutos en tribuna se tuvieron que escuchar 825 discursos. “Esto no da experiencia parlamentaria, sino de auditorio, que lo mismo la adquiere un diputado que una edecán”, comenta.

Precisa que, por el contrario, una experiencia parlamentaria “es aquella que permite modificar una opinión con otra contraria que pruebe una mayor validez, en una relación dialéctica de opiniones que logra una síntesis”.

Para lograr ser un verdadero parlamentario, dice, hace falta mayor participación en el debate y una disciplina en la investigación, la consulta, la comunicación y el trabajo colectivo. La carencia de esa disciplina, precisamente, “provoca que los debates se dispersen y ha llevado a que en tribuna cada quien hable de lo que se le ocurra”.

En el mismo tono crítico, Rodríguez Jaime menciona que muchas veces la directiva ha contribuido a que el debate se disperse. Por eso, considera un riesgo la práctica instaurada por la actual legislatura de permitir la rotación en la presidencia de la mesa direc-

tiva. “Hay otras formas de aprender a manejar una asamblea”, opina. “Una de ellas es observar cómo lo hacen los que saben hacerlo”.

Y enfatiza: “hacen falta verdaderos parlamentarios”.

Refiere que en el sistema inglés, por ejemplo, que funciona a base de precedentes del *Common law*, sin reglamentos escritos, cada sesión está asesorada por un experto que indica a la directiva cuál es el procedimiento a seguir en cada proceso legislativo.

En el sistema legislativo mexicano, en cambio, la carga de la dirección recae en los líderes de las fracciones, principalmente en el líder de la Cámara. Esto provoca frecuentemente que los trámites se entorpezcan.

Dice el legislador por Guanajuato que en la Cámara de Diputados, integrada por 500 legisladores, “los únicos expertos son el señor Azcoitia y su hijo”, por lo que propone que haya un experto en cada comisión. “No se tienen funcionarios parlamentarios y se tienen que formar”, reitera.

A modo de resumen, expone que la cultura política es un objetivo común que tiene la sociedad en su conjunto para mejorar prácticas y cuadros y aumentar la capacidad en la comprensión de los problemas, para resolverlos en un marco de civilidad. En este sentido, considera que el ejercicio legislativo en México está “en una etapa intermedia”.

Un ejercicio legislativo cabal, dice Luis Dantón Rodríguez, puede hacer importantes aportes a la cultura política en nuestro país: “menos quejas, menos estridencias, menos elocuencia inconsistente, menos anécdotas, menos agresiones; más sustancia y más lógica”.



## El proceso legislativo en Estados Unidos

**E**l mecanismo regular para poner en marcha el carro legislativo en cualquier país del mundo es la expedición de iniciativas de ley. En este aspecto, como en muchos otros, el Congreso de los Estados Unidos a veces sigue caminos poco usuales.

Aunque las propuestas legislativas pueden tener muy diversos orígenes, éstas sólo pueden ser introducidas ante el cuerpo representativo por uno de sus miembros. Ello significa que han de encontrar un legislador que acepte su tutela.

De las miles de iniciativas que reciben los congresistas, la mayoría jamás llega a ser considerada. En el bienio que cubre la 96a. Legislatura (1979-1980), por sólo ilustrar un caso, de las 14 mil 594 iniciativas turnadas a integrantes de sus dos cámaras, los comités encargados de su estudio sólo dieron cuenta de dos mil 924, y de ellas únicamente 613 lograron finalmente alcanzar la condición de ley.

Nuestro vecino del norte cuenta con abundantes fuentes de legislación. Entre ellas por supuesto hay que destacar a los propios legisladores que en forma particular o colectiva dan vida a gran cantidad de iniciativas.

Otro centro de generación de anteproyectos son los grupos con intereses especiales, mejor conocidos como grupos de presión. Tal es el caso de los empresarios, las organizaciones de obreros, agricultores, activistas,

consumidores, y otras asociaciones de carácter civil.

También los electores, de manera individual o en grupo, buscan proponer la expedición de nueva legislación en muy distintos campos. En tales circunstancias, no es poco frecuente que un miembro del Congreso presente estas iniciativas "a petición", aun en el supuesto de que él mismo no apoye el contenido de las propuestas.

Gran parte de la legislación actual, sin embargo, tiene como origen al Ejecutivo. Una vez elaborado su programa administrativo, sus secretarías y dependencias transmiten a las cámaras de Representantes y de Senadores los proyectos legislativos que en su opinión se requieren para ponerlo en marcha.

Por lo general, estas iniciativas son presentadas al pleno por el presidente del comité o subcomité con jurisdicción en el ramo en cuestión, o por el miembro de más alta jerarquía de la minoría, cuando el titular del Ejecutivo pertenece a un partido diferente.

Toda iniciativa puede presentarse indistintamente en cualquier cámara, a excepción de aquellas cuyo fin sea obtener ingresos, que por mandato constitucional deben originarse en la Cámara de Representantes. Pero no es extraño que aquellas de mayor importancia se presenten de manera simultánea en ambas, bajo el formato de iniciativas compañeras (idénticas).

LV



# Contra las prácticas monopólicas

**D**e acuerdo con el estudio previo realizado por la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados, esta nueva ley "propone la adopción de una política de competencia y no sólo de una política antimonopolio, pues el objetivo es proteger al proceso competitivo en forma integral".

Bajo este criterio se distinguen dos grandes tipos de prácticas anticompetitivas o monopólicas: las absolutas y las relativas.

Se propone una acción enérgica y sin excepciones contra las prácticas anticompetitivas, como son los acuerdos monopólicos, de cartel, absolutos de división de mercados y manipulación de subastas.

Por el lado de las prácticas monopólicas relativas, la ley tipifica como tales a la división vertical de los mercados, las restricciones de precio de reventa o de venta del producto final, la obligación de trato exclusivo, la denegación de trato, el boicot vertical y, en general, "todo acto que indebidamente disminuya, dañe o impida el proceso de competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios". La clasificación de las prácticas monopólicas relativas es una de las aportaciones más importantes de la nueva norma.

En el caso de las fusiones y adquisiciones, se opta por un punto de vista pragmático acorde con el objetivo preventivo de la ley. Para determinar si las fusiones o adquisiciones devienen en prácticas monopólicas, se propone distinguir las consecuencias de las fusiones que se darán directamente sobre un mercado, de las que se darán por encadenamiento de eslabones de un

**C**on importantes modificaciones al proyecto original, la Cámara de Diputados aprobó el 14 de diciembre la Ley Federal de Competencia, que tiene como objetivos promover la eficiencia económica así como prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas, sancionando con multas de hasta cinco millones 325 mil nuevos pesos a quienes incurran en estas actividades.

proceso productivo. Por ejemplo, si se fusiona una editorial con un taller no hay inconveniente, pero la fusión de una empresa que ya cuenta con talle-

res, con otro taller más, sí implica una práctica monopólica. La ley en este sentido incorpora el criterio de "preaseguramiento del mercado", que cataloga como práctica monopólica el que una fusión vertical tienda a reducir el número de clientes o proveedores disponibles al resto de los participantes.

La nueva ley dispone también la creación de la Comisión Federal de Competencia, organismo descentralizado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que tendrá, entre otras funciones, las de investigar la existencia de monopolios y prácticas anticompetitivas, coordinar el combate y la prevención de monopolios, opinar sobre los ajustes a los programas y políticas de la administración y, cuando lo considere pertinente, emitir opinión en materia de competencia y libre concurrencia. Dicha comisión tendrá cinco miembros que trabajarán en forma colegiada. Estos integrantes, que deberán tener una experiencia en la materia de por lo menos diez años, serán nombrados por el Ejecutivo Federal.

## Marco antiproteccionista

Según expresa la iniciativa presidencial enviada al Congreso, esta nueva ley transforma radicalmente la orientación proteccionista -con un mercado regulado internamente- que se consagró en sus dos principales antecedentes legales: la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, publicada el 30 de diciembre de 1950, y la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional en Materia de Monopolios, del 31 de agosto de 1934.

La primera tuvo como uno de sus principales mecanismos la aplicación



de controles a los precios y a la producción, que fueron eficaces durante el periodo de la política de desarrollo estabilizador y sustitución de importaciones. En situación similar estaba la ley antimonopolios, vigente desde hacía casi 60 años.

De acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, "actualmente se acepta la conveniencia de comerciar con el exterior en una forma más libre que en el pasado. Se otorga importancia a un desarrollo industrial eficiente y a la promoción de las exportaciones; pero, aprovechando nuestra experiencia y la de otros países, se reconoce que las ganancias en eficiencia económica deben reflejarse en mejores productos a menores precios".

Por ello, la nueva ley busca alentar la competencia para hacer eficaz la planta industrial nacional. Según la iniciativa, los objetivos centrales de la ley son "promover la eficiencia económica y evitar las prácticas monopolí-

## *La nueva ley busca alentar la competencia para hacer eficaz la planta industrial nacional*

cas". Además, busca "aprovechar los efectos de la apertura comercial y, al mismo tiempo, evitar que las prácticas anticompetitivas originadas en el extranjero tengan un efecto adverso sobre el mercado nacional".

Estos objetivos fueron expuestos por el titular de Comercio y Fomento In-

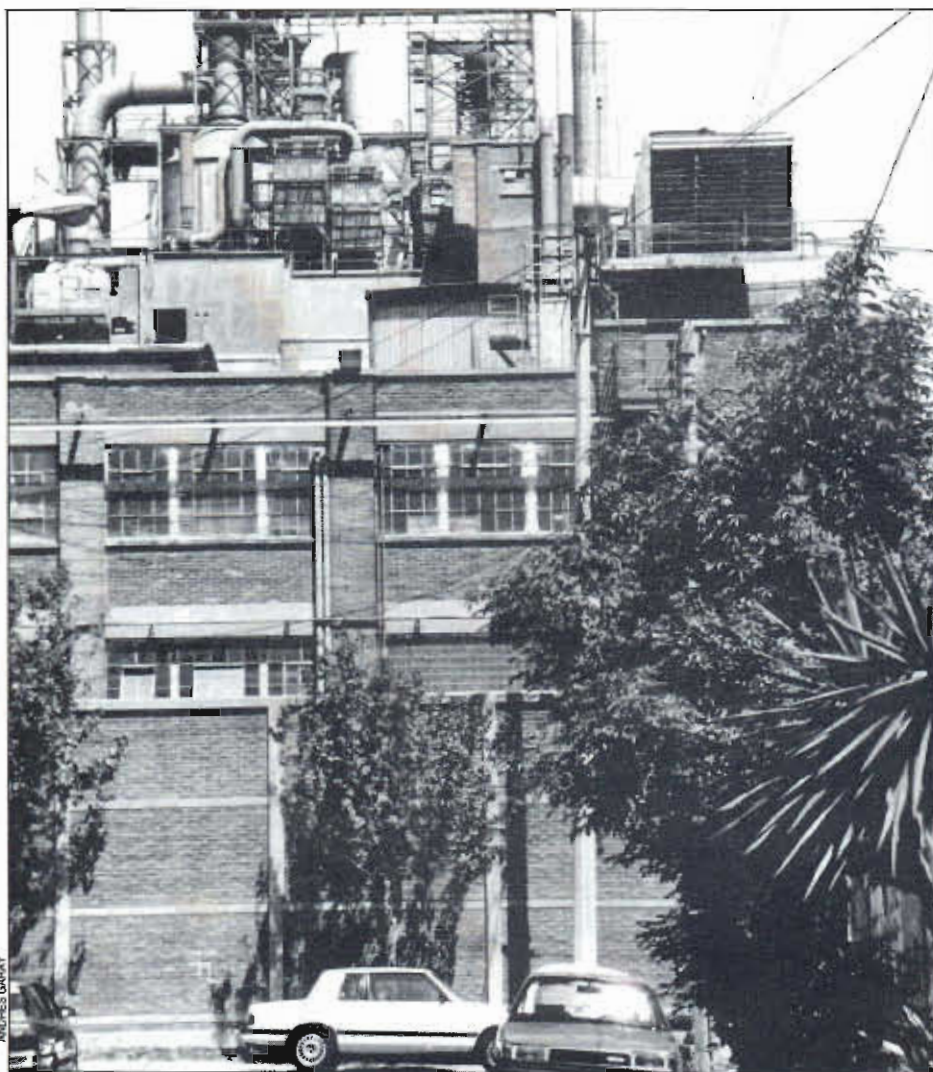
dustrial, Jaime Serra Puche, en su comparecencia ante los miembros de las comisiones de Comercio y de Fomento Industrial el 8 de diciembre de 1992. Durante más de ocho horas los legisladores debatieron con Serra sus dudas sobre la Ley de Competencia, así como sus inquietudes acerca de la nueva Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya iniciativa había sido enviada por el Ejecutivo a la Cámara el 26 de noviembre junto con la correspondiente a la Ley de Competencia.

Serra rechazó que esta nueva ley tienda a crear monopolios o que responda únicamente al marco del TLC, como afirmaron varios diputados de PAN, PRD, PARM y PFCRN. En tres rondas de preguntas y respuestas, se manifestaron dudas y severas críticas. Entre ellas, que no existiera una definición clara del término *monopolio* en la iniciativa.

El diputado priista Fernando Lerdo de Tejada cuestionó a Serra sobre la posible incongruencia entre las políticas de apertura y liberalización y la nueva iniciativa, y señaló que en su partido existía inquietud porque la ley "establece un sistema más flexible, menos rígido de precios, que podría provocar aumentos continuos de los productos de la canasta básica". Serra, tajante, respondió: "Si su preocupación es que en esta transición se llegue al relajamiento de precios, le puedo asegurar que no habrá tal".

Tres legisladores del PARM: Cecilia Soto, Gonzalo Cedillo y Servando Camacho, así como Héctor Ramírez Cuéllar y Juan Campos Vega, del PPS, consideraron que la iniciativa llegaba tarde, dado el alto proceso de monopolización de la economía. A su vez, los panistas Felipe Calderón Hinojosa





y Adrián Arenal indicaron que compartían “las intenciones declaradas de la iniciativa”, pero expresaron su temor de que la nueva ley le otorgue mayor poder al Ejecutivo. En respuesta, Serra rechazó que exista interés en acrecentar los poderes presidenciales.

Por el PRD, Julio César García, Jorge Calderón y Alejandro Luévano, criticaron la iniciativa por considerar que está subordinada al Tratado de Libre Comercio y señalaron que no se podrá combatir con eficacia a los monopolios.

### Objeciones y propuestas

Las dudas que se manifestaron durante la comparecencia de Serra, fueron reiteradas en la discusión en el pleno el 14 de diciembre. El dictamen de las

comisiones unidas de Patrimonio y Fomento Industrial y Comercio introdujo 80 modificaciones de forma y de fondo a la iniciativa. Además, en el debate se propusieron decenas de cambios, de los cuales fueron aceptados 24.

Entre las enmiendas realizadas a la nueva ley reglamentaria del artículo 28 constitucional destacaron la eliminación del pago doble por daños y perjuicios a personas físicas o morales que hubieren sufrido las prácticas monopólicas (artículo 38) y el establecimiento de un plazo perentorio para resolver el recurso “de consideración” y de no revocación. También se estableció la posibilidad de que, de no resolverse el recurso en ese plazo, el demandante recurra al juicio de amparo.

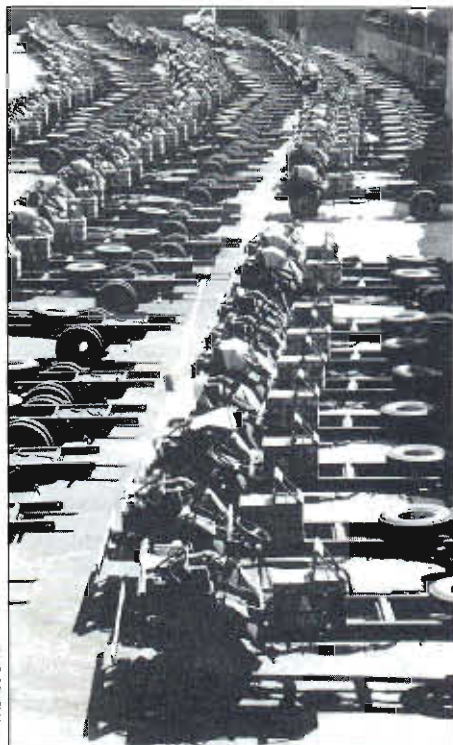
El debate, en el que participaron 18 oradores, se inició con la intervención

del legislador priista Enrique Sada Fernández, secretario de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, quien fundamentó el dictamen. Manifestó que el objeto de la iniciativa era “proteger el proceso de competencia y libre concurrencia mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, aceptando las imperfecciones de los mismos y buscando como fines últimos la protección al consumidor y la eficiencia de la planta productiva nacional en el contexto nacional e internacional”. Sada Fernández consideró que en el contexto internacional actual “no han desaparecido los monopolios sino, por el contrario, han modificado sus formas de operación y de penetración en los mercados”.

En su turno, el pepesista Juan Campos Vega fundamentó la oposición de su partido a la nueva ley. Consideró que la norma llegaba tarde para frenar el proceso de concentración monopólica y criticó que la iniciativa no incluyera una definición de monopolio. Similar cuestionamiento hizo Roberto García Aceves, del PARM, quien si bien apoyó el dictamen, advirtió el riesgo de que “la ambigüedad e indefinición” de lo que es una práctica monopólica absoluta derive en una “violación flagrante a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución”. El frentista José de Jesús Berrospe Díaz, por su parte, fundamentó el apoyo de su fracción al dictamen, aunque criticó algunos aspectos de la ley.

Por el PRD, Julio César García Hernández, otro de los secretarios de la Comisión de Patrimonio y Fomento





ANDRÉS GARAY

Industrial, destacó también la inexistencia de una definición de monopolio, consideró excesivo el periodo de diez años que durarán en funciones los miembros de la nueva Comisión Federal de Competencia y señaló que su

grupo parlamentario votaría en contra por no encontrar "ningún elemento real para combatir, ya no digamos los monopolios, ni siquiera las prácticas monopólicas".

En una posición divergente con la de los perredistas, el panista Fauzi Hamdan Amad celebró el hecho de que la ley actualice el marco legal en materia antimonopólica, pero pidió que tres de los cinco miembros de la Comisión Federal de Competencia fueran aprobados por el Congreso y ennumeró doce modificaciones que su fracción propondría en la discusión en lo particular.

El otro secretario de la Comisión de Patrimonio, el priista Juan Millán Lizárraga, indicó que la iniciativa va acorde con la nueva regulación estatal y la promoción de la competencia y la libre concurrencia. Enseguida, los perredistas Jorge Calderón y Gilberto Rincón Gallardo abundaron en la oposición de su partido al dictamen.



ANDRÉS GARAY

## *El dictamen introdujo 80 modificaciones de forma y de fondo a la iniciativa*

Más adelante, el poblano Marco Antonio Haddad Yunes, representante del Revolucionario Institucional, mantuvo un intercambio de preguntas y respuestas con el legislador perredista Julio César García Hernández, quien le rebatió la afirmación de que la ley no contradice lo estipulado en el artículo 28 constitucional.

Para presentar propuestas de modificaciones al dictamen por parte de sus respectivas fracciones, hicieron uso de la tribuna Lydia Madero, Gilberto Zapata Fraile y Alejandro Gutiérrez de Velasco, del PAN; José Ramos González, del PFCRN; Enrique Ramos Flores, Fernando Navarrete Magdaleno y Mauricio W. Clark, del PRI; Juan Hernández Mercado, del PRD; y Roberto García Acevedo, del PARM.

Veinticuatro de las propuestas de modificación fueron aceptadas en la votación en lo particular para que al cabo de una sesión que duró cerca de 12 horas, la Ley Federal de Competencia Económica se aprobara con 316 votos a favor y 32 en contra. **LV**

# Los mecanismos antimonopolio

**L**a nueva Ley Federal de Competencia Económica consta de 39 artículos distribuidos en siete capítulos y tres artículos transitorios. Los capítulos abordan los siguientes aspectos:

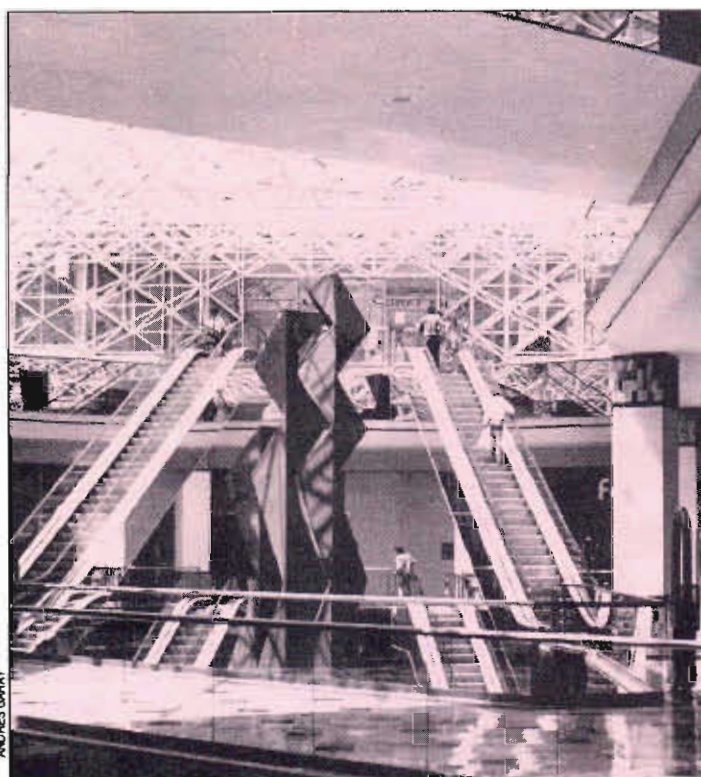
## Disposiciones generales

En sus siete artículos destacan los siguientes puntos:

a) La ley es reglamentaria del artículo 28 constitucional (artículo 1o.) y tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, "mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios" (artículo 2o.).

b) Están sujetos a esta ley "todos los agentes económicos" que puedan caer en prácticas monopólicas (artículo 3o.), a excepción de las funciones que ejerza el Estado en las áreas estratégicas reservadas por la Constitución (artículo 4o.), las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación (artículo 5o.) y las asociaciones o sociedades cooperativas que cumplan con los requisitos estipulados en el artículo 6o.

c) La fijación de precios máximos será función exclusiva del Ejecutivo Federal (artículo 7o. fracción I), y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial será la encargada de determinarlos mediante acuerdos (artículo 7o. fracción II).



## De los monopolios y las prácticas monopólicas

El capítulo II, que consta de ocho artículos, introduce una innovación al distinguir entre prácticas monopólicas absolutas y relativas (artículos 9o. y 10o.).

a) Las prácticas monopólicas absolutas son los contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos que manipulen el precio de venta o compra de bienes o servicios (artículo 9 fracción I), que restrinjan y limiten la producción (artículo 9 fracción II) o que dividan un mercado actual o potencial y establezcan posturas en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas públicas (artículo 9 fracciones III y IV).

b) Las prácticas monopólicas relativas son aquellas "cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas" (artículo 10).

c) En los artículos 11 y 12 se establecen los requisitos para comprobar cómo se puede controlar un mercado relevante o se tiene poder sustancial en él (artículo 13).

d) Se exime de los efectos jurídicos a "los actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías" de origen nacional o extranjero (artículo 14).

e) Se otorga a la nueva Comisión Federal de Competencia las atribuciones para investigar y declarar la existencia de prácticas monopólicas (artículo 15).

## De las concentraciones

El capítulo III está constituido por siete artículos que se ocupan de las concentraciones, entendidas éstas como "la fusión, adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general que se realicen entre competidores" (artículo 16).

a) Se definen los fenómenos específicos que la Comisión investigará para determinar la existencia de concentra-



ciones (artículos 17 y 18). Si la comisión detecta concentraciones, puede "ordenar la desconcentración total o parcial de lo que se hubiera concentrado indebidamente, la terminación del control o la supresión de los actos, según corresponda" (artículo 19).

b) Se establecen los parámetros para que la Comisión considere la existencia de concentraciones (artículos 20 y 21).

***L**a ley es  
reglamentaria del  
artículo 28  
constitucional y  
tiene por objeto  
proteger el proceso  
de competencia y  
libre concurrencia*

c) Se exime de la impugnación legal a las concentraciones "que hayan obtenido resolución favorable" y "concentraciones que no requieran ser previamente notificadas" (artículo 22 fracciones I y II).

#### **Comisión Federal de Competencia**

El capítulo IV desglosa en siete artículos la composición y las funciones de esta nueva comisión.



a) Será un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (artículo 23).

b) Tendrá las funciones de investigar la existencia de monopolios, establecer los mecanismos para combatirlos, resolver los casos de su competencia, opinar sobre programas y políticas que afecten a la competencia, elaborar manuales de organización y de procedimientos y participar con las dependencias competentes en la celebración de acuerdos de libre concurrencia (artículo 24).

c) Tendrá cinco miembros, incluyendo un presidente (artículo 25), los cuales serán designados por el titular del Ejecutivo Federal (artículo 26) y durarán diez años en el cargo (artículo 27).

d) El presidente de la Comisión tendrá amplias facultades de coordinación, vigilancia y representación (artículo 28).

#### **Procedimiento**

En materia procesal, los cinco artículos del capítulo V estipulan que:

a) La Comisión puede requerir informes y documentos necesarios para cumplir su tarea (artículo 31) y ante ella puede ser denunciada cualquier práctica monopólica (artículo 32).

b) Se establecen los requisitos para que la Comisión pueda emplazar (artículo 33). La Comisión puede usar como medios de apremio el apercibimiento o la multa (artículo 34).

#### **Sanciones**

El capítulo VI tiene cuatro artículos. En ellos se establecen los diferentes tipos de sanción para quienes infrinjan esta ley:

a) Suspensión, corrección o supresión (artículo 35 fracción I), orden de desconcentración parcial o total (artículo 35 fracción II) y varios tipos de multas que van desde siete mil quinientas hasta 225 mil veces el salario mínimo general vigente (artículo 35 fracciones III-VII).

b) En la asignación de la multa, la Comisión deberá tomar en cuenta desde la gravedad de la infracción hasta los antecedentes y la condición económica del infractor (artículo 36).

#### **Recursos de revocación**

El único artículo de este capítulo permite que se interponga el recurso de revocación dentro de un plazo de 15 días hábiles. Los términos para ello se establecerán en el reglamento de la propia ley (artículo 39).

# Avances en la protección al consumidor

**C**on el consenso de varias fuerzas partidistas y 77 modificaciones de forma y fondo a la iniciativa original del Ejecutivo, se aprobó el 14 de diciembre de 1992 una nueva Ley Federal del Consumidor. Esta ley fusiona a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto Nacional del Consumidor en una nueva procuraduría con facultades jurídicas amplias para retirar licencias y dictar multas, que se elevan hasta dos mil 500 veces el salario mínimo a los comerciantes o proveedores que den una mala prestación de servicio, incrementen subrepticamente los precios o emitan publicidad engañosa.

La nueva ley fue aprobada en lo general y en lo particular por 327 votos a favor emitidos por los diputados de PRI, PAN, PARM, PPS y PFCRN; cinco votos en contra de legisladores del PRD y una abstención.

## De tarjetahabientes y consumidores intermedios

La mayoría de los legisladores que intervinieron en el debate, que se extendió por seis horas, consideraron que la nueva norma contiene avances sustanciales en la protección al consumidor y de cara a los retos que implicará la apertura del mercado nacional con el Tratado de Libre Comercio.

Las principales objeciones a la ley fueron hechas por diputados de los partidos Acción Nacional, Popular Socialista y de la Revolución Democrática, quienes criticaron que no se regulen las operaciones con tarjetas de crédito -con lo cual el consumidor, dijeron, "queda totalmente desprotegido"-, así como el "trato de privilegio" que mantendrán los vendedores ambulantes. Sobre el primer asunto, se aprobó un punto de acuerdo con una recomendación a la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros para que busque los medios adecuados que permitan dar mejor atención a las inconformidades de los tarjetahabientes, que en la actualidad ascienden a 15.8 millones.

En el dictamen presentado por las comisiones unidas de Comercio y de Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicios, destaca que la norma refuerza los derechos del consumidor, propone regular a quienes se dediquen a la investigación de las prácticas crediticias, permite un procedimiento claro y preciso en beneficio de la certeza jurídica, diferencia las atribuciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de las correspondientes a la nueva Profeco y propone la creación de un consejo consultivo en materia de protección al consumidor.

## Las posiciones

El debate fue abierto por Francisco Hernández Juárez, del PPS, quien consideró positiva la iniciativa porque "tiende a proteger los





derechos del consumidor, procurando establecer los principios de equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”.

El subcoordinador de la diputación del PARM, Adolfo Kunz Bolaños, manifestó su apoyo a la ley y desglosó las principales propuestas de modificación por parte de su partido, la mayoría precisiones procesales.

José de Jesús Berrospe Díaz fundamentó la posición del PFCRN y destacó la necesidad de darle más autonomía a la Procuraduría de Defensa del Consumidor.

En su turno, el perredista Francisco Javier Saucedo, presidente de la Comisión de Bienes de Consumo y Servicios, advirtió que su fracción votaría en contra por considerar que no se respetó el trabajo en comisiones. Reconoció que en la comisión de dictamen hubo cordialidad y trabajo coordinado, pero —se quejó— pese a que hubo acuerdos a los que se llegó por consenso, en el dictamen se excluyeron algunas propuestas esenciales que “ya habíamos consensado todos los de la comisión”. Entre ellas, incluir dentro de la competencia de la Profeco a las quejas por el servicio de tarjetas de crédito y mantener la protección a los consumidores intermedios, que quedaron fuera de la definición de consumidor en la nueva ley. También manifestó inconformidad por la ausencia de un capítulo referente a la organización de los consumidores.

El panista Adrián Arenal Pérez indicó que su partido votaría a favor; rechazó los juicios de Saucedo en torno al trabajo en comisiones, pero concordó con él en la necesidad de incluir entre las atribuciones de la nueva Profeco la vigilancia de los sistemas de tarjetas de crédito, así como regular la actividad del comercio informal que “generalmente no cumple con los requisitos de calidad que los consumidores esperan”.

Por su parte, el diputado priista Claudio Guerra López expresó que su partido votaría



en favor de la ley ya que responde a los nuevos retos que plantea la globalización económica y “garantiza justicia a los ciudadanos en su carácter de consumidores, no permitiendo abusos y libertinajes en el mercado”.

Luego de la discusión en el pleno, se aprobaron 35 modificaciones, que se sumaron a las 44 que había registrado la iniciativa original en comisiones. Los legisladores subrayaron que resulta adecuado el tratamiento para las promociones y ofertas, ya que su tipificación es objetiva, destaca las obligaciones para el proveedor y prohíbe anunciar los bienes o servicios con valores superiores a los ordinarios en el mercado.

Para proponer modificaciones al dictamen, hicieron uso de la tribuna Alfonso Rivera Domínguez y Víctor Joaquín Cánovas, del PRI; Francisco Dorantes Gutiérrez, del PARM; Arturo Núñez Pardo, Miguel Ángel Martínez Mireles y Víctor Martínez Fourcans, del PAN; Miguel Ángel León Corrales y Alejandro Luévano, del PRD; Silvestre Fernández Barajas, Jaime Olivares y Alfredo Villegas Arreola, del PRI.

Al final de la votación, el pleno de la Cámara aceptó un punto de acuerdo por el cual se hace una recomendación a la Comisión Nacional Bancaria para que busque contar con los mecanismos e instrumentos adecuados para mejorar y dar mayor celeridad a la atención de las quejas de los usuarios de tarjetas de crédito.

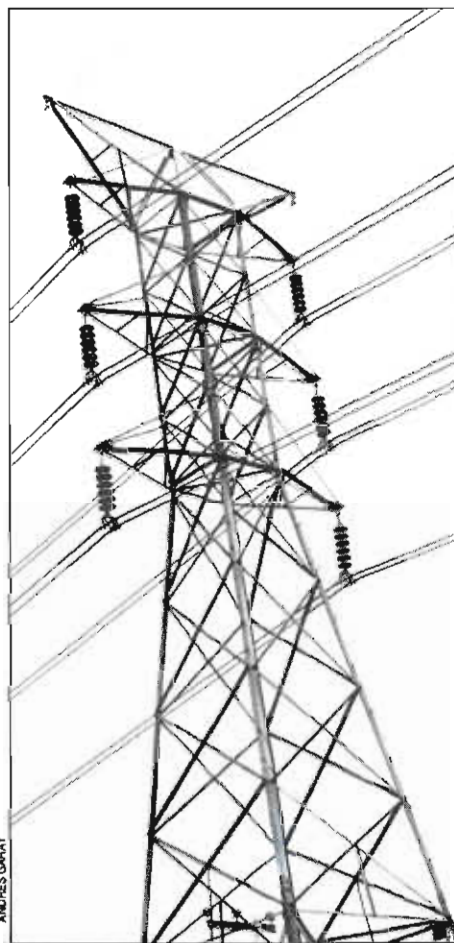




# Cambios a la ley de Energía Eléctrica

**S**egún la exposición de motivos del Ejecutivo, el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reglamentaria del artículo 27 constitucional, tiene la finalidad de crear las condiciones necesarias para garantizar la suficiencia energética del país mediante la expansión de la oferta y la diversificación de las fuentes de energía. Para ello propone la creación de las figuras de: producción independiente de energía eléctrica, pequeños productores, autoabastecimiento, cogeneración -aprovechamiento de la energía desperdiciada en los procesos industriales- y exportación e importación de electricidad.

La iniciativa, que llegó a la Cámara como minuta del Senado, establece que las nuevas figuras no entrarán en el ámbito de lo que se considera servicio público y que la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) será la responsable de otorgar los permisos necesarios para desempeñar las actividades contempladas en el decreto. Se formará además, una



Comisión Reguladora, órgano independiente de la SEMIP, con la finalidad de mejorar el quehacer de dicha Secretaría en este rubro.

## Las posiciones

A lo largo del debate se establecieron las diversas posiciones partidistas en torno al concepto constitucional de servicio público. De acuerdo con el PRD, el PARM y el PPS, las nuevas figuras resultan violatorias de la Constitución debido a que, en materia energética, la nación tiene la exclusividad para generar y abastecer a la comunidad de energía eléctrica, además de que la iniciativa -dijeron- es consecuencia del Tratado de Libre Comercio, y en congruencia con él busca permitir la participación de capitales privados y extranjeros en la generación de electricidad.

Por su parte, el Partido Acción Nacional subrayó la imposibilidad de que una ley secundaria modifique los preceptos constitucionales.

El PRI y el PFCRN se manifestaron, en cambio, a favor del dictamen, pues

**L**as modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que con vistas a la modernización de ese servicio prevén formas adicionales de producción que complementen a las actuales, fueron aprobadas el 18 de diciembre de 1992 luego de siete horas de discusión -y con la ausencia de la diputación del PRD- con 251 votos a favor, 11 votos en contra y 44 abstenciones.



consideraron dentro del marco constitucional a las nuevas figuras. Sostuvieron, en ese sentido, que una ley secundaria tiene la capacidad de asegurar y especificar el cumplimiento de los artículos de la Constitución. Y afirmaron, en consecuencia, que las propuestas de la iniciativa no eran violatorias de la Carta Magna.

### Los pros y los contras

La fundamentación del dictamen corrió a cargo del diputado priista José Antonio Ruiz de la Herrán, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Delineó las señaladas bases de la iniciativa presidencial, así como la necesidad del país de tener una mayor eficiencia en el otorgamiento del servicio de energía eléctrica, sobre todo por tratarse de un pilar del desarrollo nacional.

El diputado Servando Hernández Camacho, del PARM, calificó a la iniciativa de inconstitucional, porque contraría el precepto instaurado en la Carta Magna en 1960 a propuesta del presidente López Mateos, de que la nación posee la exclusividad en la generación, la conducción, la transformación, la distribución y el abastecimiento de la energía eléctrica. Acusó también que la iniciativa obedece a la "pésima planeación en materia energética", y cuestionó al Programa Nacional de Modernización Energética de 1989-1994, así como a la intención de crear un marco jurídico favorable al TLC.

El secretario de la Comisión de Energéticos, Juan Manuel Húez Pelayo, del PFCRN, defendió la iniciativa, que en su opinión se sustenta en la necesidad del país de experimentar

una modernización en materia energética. Recalcó las modificaciones al artículo 36 de la ley, en las que se destaca el papel de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como único y obligado comprador de la producción de energía eléctrica. Dijo asimismo que las nuevas figuras para generar electricidad incrustadas en la ley no podían ser consideradas como servicio público. Posteriormente, Abundio Ramírez Vázquez ratificó la posición del PFCRN. Argumentó que los permisos para la generación de energía eléctrica y el concepto de servicio público contenidos en la iniciativa cumplían con las normas constitucionales.

Por el PRD, Raúl Álvarez Garín señaló la importancia que tiene la cogeneración en la producción de electricidad y los beneficios económicos y ecológicos que su aprovechamiento puede deparar, en un país en el que más de 90 mil poblados, habitados por nueve millones de habitantes, carecen de este importante servicio. Además,

**E** I PAN  
consideró  
que una ley  
secundaria no  
puede modificar los  
preceptos  
constitucionales

apuntó que la oportunidad de construir una infraestructura nacional capaz de crear el equipo necesario para la generación y abastecimiento de energía eléctrica no debía ser desaprovechada. Criticó la postura del gobierno, que a su juicio tiende a dejar en manos de la inversión privada este aspecto.

En coincidencia con la postura del PPS, establecida previamente por Gabriela Guerrero, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Álvarez Garín señaló la inconstitucionalidad de las figuras de la iniciativa. Consideró que cualquier tipo de generación de energía eléctrica tiene por finalidad el servicio público, y que la actividad de proporcionar electricidad es indivisible debido a la imposibilidad de almacenar este tipo de energía.



CUARTOSURO

## El centro del debate

Por parte del PAN, Fauzi Hamdan Amad calificó de antijurídico que una ley secundaria determine si se trata o no de un servicio público. Dijo que esta ley va más allá del texto constitucional, debido a la modificación del concepto de servicio público y a la creación de las nuevas figuras.

Miguel Osorio Marbán, del PRI, contrargumentó. El secretario de la Comisión de Energéticos recordó que en la discusión del proyecto de dictamen de la iniciativa de López Mateos, en 1960, se estableció que la ley reglamentaria tiene la capacidad legal de especificar lo contenido en la Constitución, por lo que en esta ocasión la ley puede expresar qué se entiende por servicio público. Subrayó la importancia de que en la ley se estipule que los productores independientes deban vender a la CFE la totalidad de su producción, asegurando con ello la exclusividad de esta empresa en la materia, así como el hecho de que las figuras sólo puedan actuar con permiso del mismo órgano.

En su primera intervención, Cuauhtémoc Amezcuea Dromundo, coordinador del grupo parlamentario del PPS, formuló seis preguntas a los diputados del PRI. Sus cuestionamientos giraron básicamente en torno al destino de la energía eléctrica generada por pequeños productores, a la posibilidad de que una ley pueda establecer lo que es el servicio público, a si el permiso sustituye a la concesión y a si los diputados pueden votar una ley anticonstitucional. Pablo Casas Jaime y Juan José Rodríguez Prats, del PRI, contestaron a las preguntas. Rodríguez Prats señaló que el artículo 28 consti-

*Una ley  
secundaria tiene  
la capacidad  
de asegurar y  
especificar el  
cumplimiento  
de la  
Constitución,  
sostuvieron PRI  
y PFCRN*

tucional menciona la capacidad de las leyes secundarias para fijar "las modalidades y condiciones que aseguren la eficiencia de la prestación de los servicios...", y advirtió que la electricidad no constituye un recurso natural, como sí sucede en el caso de los hidrocarburos.



Ante la inconformidad de Amezcuea Dromundo por las respuestas de ambos diputados, subió a la tribuna el también priísta Guillermo González Díaz. Explicó que la CFE captaría el total de la energía producida por los particulares, que el permiso no sustituye a la concesión ya que a diferencia de ésta presupone un derecho previo para realizar determinadas actividades y, por último, que "el servicio público tiene por objeto satisfacer en forma continua, regular, uniforme, general, permanente y obligatoria, necesidades de carácter general".

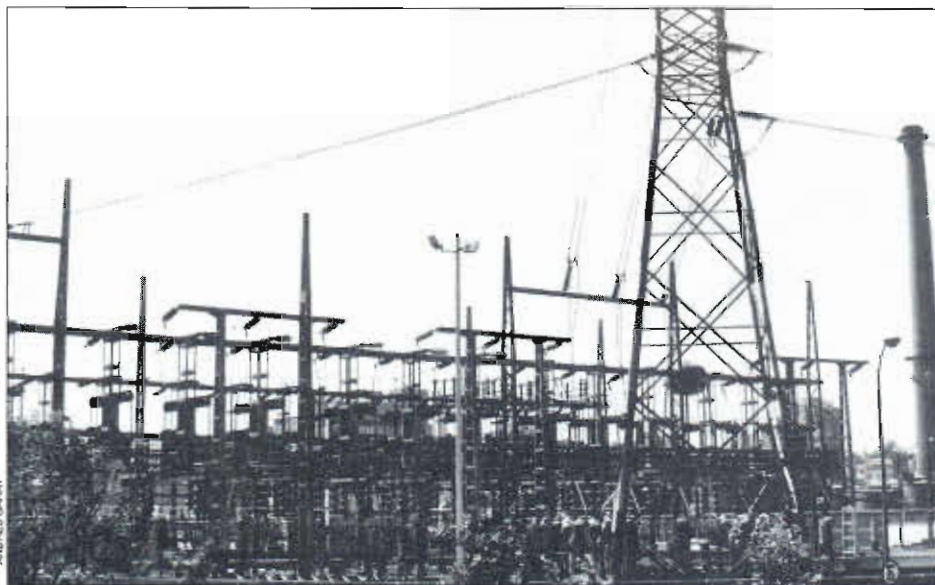
Jorge Calderón Salazar y Guillermo Flores Velasco reiteraron la oposición del PRD ante la iniciativa. Mencionaron la relación de ésta con el texto del TLC y la anticonstitucionalidad, en él, del anexo 602.3 del capítulo titulado "Energía y petroquímica básica", así como el peligro de poner a discreción de potencias extranjeras zonas estratégicas de la economía del país.

## Las razones del PRD

Gilberto Rincón Gallardo, vicecoordinador de la fracción del PRD, reiteró la oposición de su partido, y anunció, a nombre de todos los diputados de su grupo parlamentario: "hemos resuelto abandonar el salón de sesiones como protesta por esta iniciativa anticonstitucional y contraria a los intereses nacionales". A continuación los perredistas se retiraron. Cuauhtémoc Amezcuea Dromundo hizo un reconocimiento a los diputados del PRD por la resolución tomada.

También del PPS, Jorge Tovar Montañez remarcó que "...primero se actúa y luego se quieren hacer los cambios constitucionales -aludiendo a





ANDRÉS GARAY

la relación de la iniciativa con el texto del TLC-, y esto efectivamente nos está llevando a una situación de ficción (...) y es una burla para este Poder Legislativo". La posición del partido solferino frente a la iniciativa fue fortalecida por Martín Tavira Urióstegui, quien mencionó que a pesar de que la petroquímica básica es área estratégica de la economía nacional, se ha permitido la entrada de capital privado en esa rama, por lo que la iniciativa supone una vía para crear condiciones inconstitucionales en las leyes secundarias sin que se tenga que modificar la Constitución.

De acuerdo con lo expuesto por Cecilia Soto González, del PARM, a partir de la iniciativa no es posible solucionar el problema de generación de energía eléctrica en el país ni superar el rezago en que se vive en relación con otros países. Retomando cifras que Rodríguez Prats había dado en su intervención -27 mil megavatios de capacidad eléctrica instalada y siete mil más a instalarse-, señaló que se observa un crecimiento de sólo el cuatro por ciento anual. En un análisis comparativo, Cecilia Soto señaló que el avance en la generación de energía eléctrica se ha debido a la concentración y densi-

ficación de la fuente energética por unidad de área, por lo que el aprovechamiento de energía solar o eólica y la utilización de plantas termoeléctricas no representa un avance en dicho terreno.

En respuesta a la intervención de Tavira Urióstegui, Pedro Ojeda Paullada, presidente de la Comisión de Energéticos, concilió posturas al indicar que la solución del problema de abastecimiento de energía eléctrica está en crear las condiciones necesarias para que el Estado pueda prestar el servicio

público de generación y suministro, aun cuando tengan que ser los particulares los que le ayuden en la tarea.

En la última intervención del debate, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo volvió a la tribuna y con fundamento en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Congreso, solicitó le fuera expedida a la fracción del PPS una copia certificada de la relación de los diputados que votarían a favor de la iniciativa. Enseguida anunció la decisión de su partido: no votaría la iniciativa ya que representaba una violación a la Constitución y un diputado no puede votar por el cumplimiento o por el incumplimiento de la misma. "No es una abstención. No votaremos. El voto en la práctica puede ser en pro, puede ser en contra, puede ser de abstención. No actuamos en ninguno de esos sentidos. No aprobamos, ni siquiera votamos en contra porque no se puede votar en pro o en contra si la Constitución ha de cumplirse o no; pero tampoco es una abstención", aclaró.

Fueron 23 los legisladores que intervinieron en el debate: siete del PRI, dos del PARM, dos del PFCRN, cuatro del PRD, dos del PAN, cinco del PPS y un diputado independiente. A favor de la iniciativa votaron el PRI y el PFCRN, mientras que la votación en contra corrió a cargo del PARM y de algunos diputados pertenecientes al PAN. La mayor parte de la bancada panista se abstuvo, en tanto que el PRD y el PPS no votaron en rechazo a la iniciativa. La sesión culminó con la aprobación con 251 votos a favor, del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, a la una y media de la madrugada del 19 de diciembre de 1992. **LV**

*Los diputados  
del PRD  
abandonaron  
el salón  
de sesiones como  
protesta contra  
la iniciativa*

# Por la senda de los parlamentos supranacionales

**L**a idea de crear parlamentos supranacionales no es nueva. Varios de los que hoy existen pueden reclamar remotos antecedentes en los que se procuró el reforzamiento de lazos, en principio sólo planteados por azares de la geografía o de la historia.

Casi siempre, empero, esta aspiración quedó frustrada por impedimentos sin posibilidad de solución en su momento. Tal fue el caso del sueño de Simón Bolívar para América Latina, aunque seguramente también de otros caudillos con ilusiones y desencantos similares en otras latitudes del planeta.

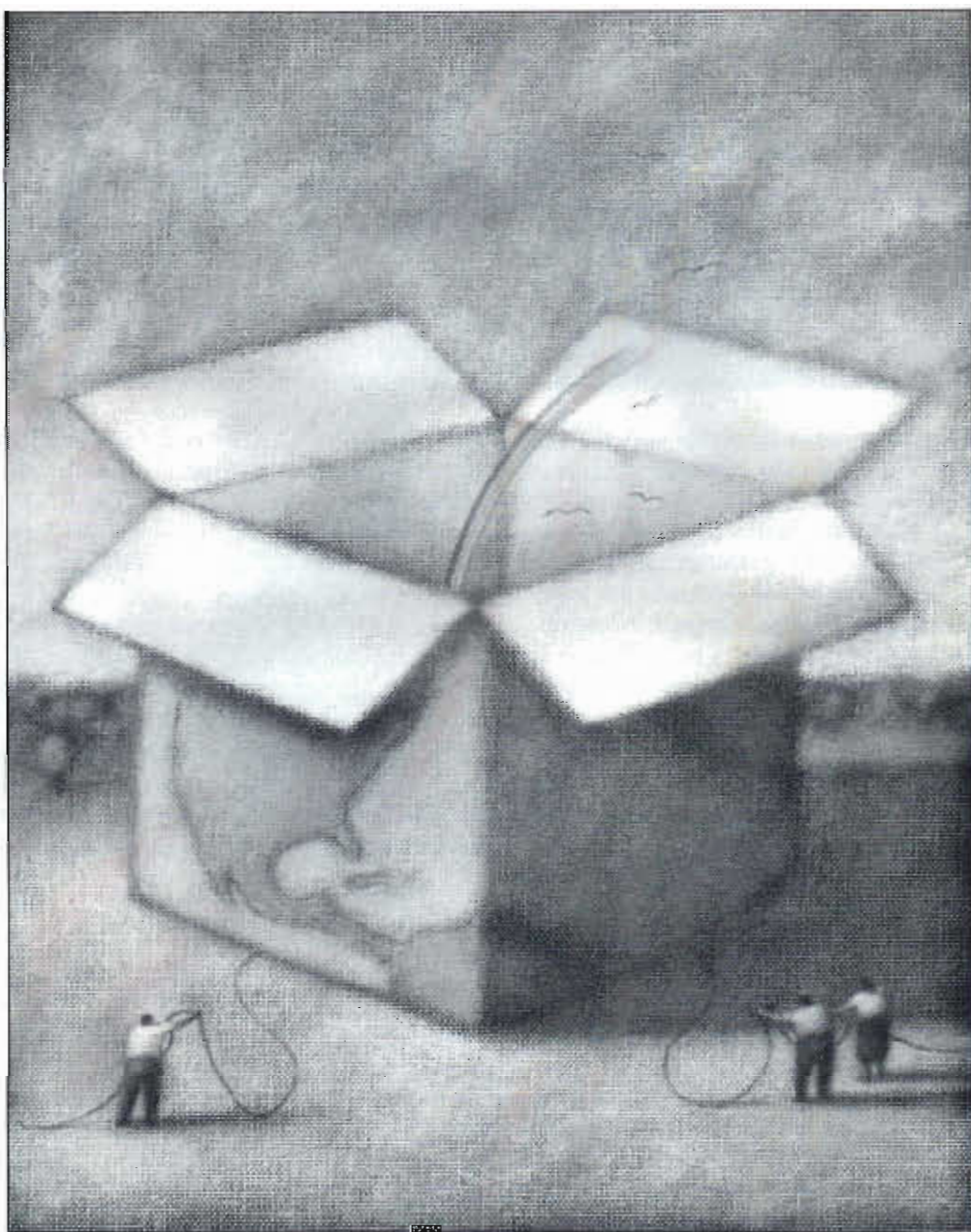
Lo cierto es que, salvo raras excepciones como la de la Unión Interparlamentaria, con un siglo de vida e influencia en tareas tan importantes como la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, la creación de organismos de esta naturaleza apenas comenzó a abrirse paso hace unas cuantas décadas. Y es más reciente todavía la etapa en que estos cuerpos han comenzado a cobrar real presencia como instancias capaces de lidiar con los problemas políticos del futuro.

Los caminos por los que hasta ahora ha transitado la experiencia de construir cuerpos parlamentarios comunes a varios países han sido muy variados. Tanto, como la multiplicidad de realidades y obstáculos que han de ser despejados antes de lograr su cabal consolidación. Existe, sin embargo, una coincidencia clara en todo proyecto de esta envergadura: el deseo compartido

entre los involucrados de obtener con la acción conjunta lo que de manera aislada no se ha podido alcanzar.

En este sentido, uno de los desafíos más importantes de los parlamentos

supranacionales es sin duda la construcción de respuestas unitarias frente a las tendencias globalizadoras de la actualidad. Bajo la influencia generada por el acelerado desarrollo de esta ten-





dencia, los contactos entre los países parecen incrementarse en todos los campos.

Agotado el esquema económico anterior, la integración de los mercados en grandes bloques comerciales pasa a constituirse virtualmente en la única salida para una producción masiva de bienes, superior a cualquier demanda nacional. A su vez, la intensificación del comercio a nivel mundial estimula como nunca antes el desarrollo de nuevos patrones de interrelación, con consecuencias escasamente previsibles en la vida cotidiana de los pueblos.

Los parámetros tradicionales de la cultura nacional son puestos en serios aprietos ante la explosiva expansión de los medios de comunicación, mientras viejas creencias se funden para dar lugar a expresiones apenas identificables con espacio territorial alguno.

En lo político, también antiguas y sólidas prácticas resienten los efectos de la creciente internacionalización. A la vanguardia en este fenómeno por su privilegiada posición en esta esfera, los jefes de Estado buscan de manera afanosa el establecimiento de acuerdos multilaterales en distintas materias, mediante la diversificación de los canales diplomáticos.

Así, las legislaturas se ven compelidas a desplazarse de su ámbito nacional hacia el exterior, al tiempo que, a diferentes ritmos, proyectos de integración antes imposibles comienzan a tomar cuerpo para dar cabida a experiencias inéditas.

En este fenómeno también influye el creciente auge del tema de la democracia en distintos foros y circunstancias. Tal situación se ha convertido en un estímulo adicional para el desarrollo de asambleas representativas de

esta naturaleza, al figurar como instancias capaces de corregir los impulsos autoritarios siempre presentes en la política moderna.

Bajo esta luz, el estudio de los parlamentos supranacionales se plantea como una tarea que demanda atención inmediata. La escasa información disponible, sin embargo, dificulta esta labor. Por lo mismo, aquí únicamente se señalan algunas líneas generales de investigación con el deseo de sumar el esfuerzo de otros a esta urgente e importante reflexión.

### Se hace camino al andar

La compleja problemática de los tiempos actuales demanda respuestas prontas, acordes con la celeridad de los cambios operados a todo nivel en épocas recientes. Empero, entrar en el campo de lo indeterminado implica riesgos no del todo previsibles. Así lo han comprendido buena parte de los países que participan ya en algún parlamento supranacional. De ahí que en todos los casos se haya optado por un avance lento, fundado en decisiones sobre la base de la experiencia, hacia la unidad.

En la consecución de esta condición, por tanto, no existe ruta prefijada. Cada organismo ha de determinar su propio rumbo y ritmo de acuerdo con las circunstancias y con los recursos disponibles por parte de sus miembros para apoyar su marcha. A esta lógica responde el origen, conformación y funcionamiento de cada parlamento supranacional.

Razones económicas al inicio de la década de los cincuenta, por ejemplo, sientan las bases para la confección del Parlamento Europeo. En un escenario

mundial marcado por la bipolaridad y el impulso de nuevas fuentes energéticas, el establecimiento de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) se percibe como un instrumento de coordinación capaz de hacer más sólida la interlocución de los países del continente más afectados por la crisis del sector.

En su creación, en 1964, el Parlamento Latinoamericano (Parlatino) parece movido más por consideraciones de orden político. En él se percibe el estímulo de la Revolución Cubana y los propósitos perseguidos por la Alianza para el Progreso. Pensado como un mecanismo contra la amenaza de inestabilidad política de la región, con el tiempo se perfila además como un frente de defensa ante embestidas de signo hegemónico.

Caso similar reviste el Parlamento Centroamericano que, no obstante su corta existencia -fue creado en 1986-, exhibe añejos antecedentes en el proceso de integración y desintegración de los países del área durante las primeras décadas del siglo XIX.

*Las  
legislaturas  
se ven compelidas  
a desplazarse  
de su ámbito  
nacional hacia  
el exterior*

## SEMBLANZA DEL PARLATINO

El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) se creó el 10 de diciembre de 1964 en la ciudad de Lima con la representación de 14 congresos nacionales.

Durante la época de las dictaduras militares, el Parlatino mantuvo un bajo perfil que fue renovado con la suscripción del Tratado de Institucionalización el 17 de noviembre de 1987, también en la ciudad de Lima. Este tratado le otorgó personalidad jurídica al organismo y lo reconoció como una instancia regional de legisladores. Dieciocho naciones firmaron este tratado: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Posteriormente, se incorporarían Haití, Surinam, Antillas Holandesas y Aruba para sumar un total de 22 países.

Este tratado de institucionalización será objeto de una reforma sustancial tras los trabajos realizados en México los días 28 y 29 de enero y el acuerdo de estudiar la posibilidad de elección directa de sus miembros.

En el seno del Parlatino conviven todas las tendencias políticas y partidistas del espectro latinoamericano y, de acuerdo con sus documentos oficiales, la promoción de la democracia, la defensa de la soberanía y el impulso a la integración y cooperación económicas de la región son sus principales objetivos.

Los órganos del Parlamento Latinoamericano son, en orden de creciente de importancia:

a) La Asamblea, órgano supremo integrado por las delegaciones de todos los países miembros.

*En la  
experiencia de la  
Comunidad  
Europea, la  
unificación no está  
sujeta a una idea  
prefijada*

### Dos modelos

Pese a contar con expedientes tan diversos en su origen, todos los parlamentos supranacionales se inscriben, en su desarrollo, en uno de dos posibles patrones básicos. Más que opuestos en sus procedimientos, conviene aclarar, sus diferencias responden al hecho de ubicarse en etapas distintas de un sólo ideal: el de la unificación de esfuerzos para el logro de objetivos comunes.

El primero de esos patrones, no en jerarquía sino en orden de presentación, corresponde al proceso de desarrollo seguido por el Parlamento Europeo. En él se observa la existencia de un intenso intercambio comercial y cultural entre sus miembros, desde el momento mismo de su fundación. Y aun antes. Por ello, sólo seis años después de producido este paso (1958), los acuerdos de la CEEA pueden extenderse a todos los campos de la economía para dar lugar a la creación de la Comunidad Económica Eu-

ropea (CEE) y de la Comisión Europea para la Energía Atómica (Euratom).

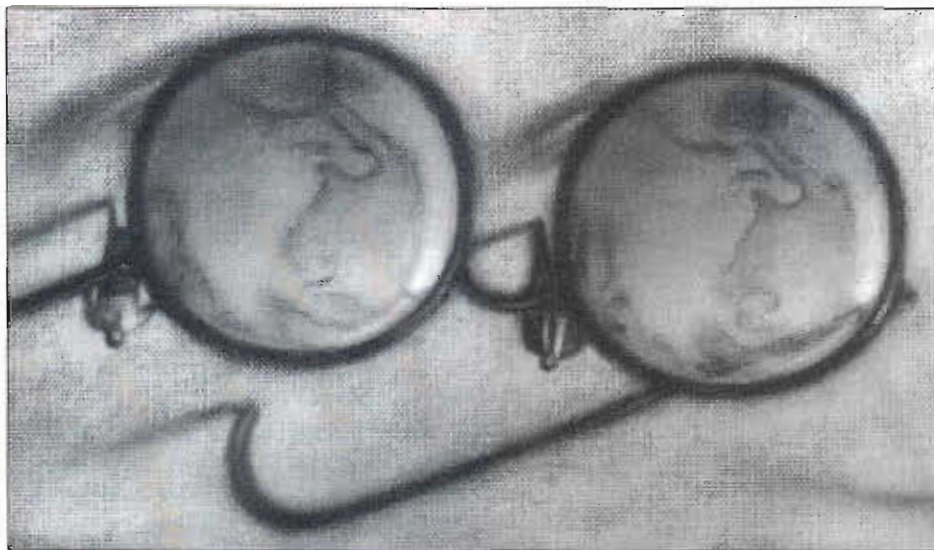
En el segundo esquema, la constitución del cuerpo parlamentario supranacional se adelanta a la existencia de un vigoroso volumen de intercambios de todo tipo y nivel entre los países firmantes. Condición en apariencia indispensable para un reforzamiento efectivo de sus lazos. En consecuencia, sus actividades han de ser orientadas en forma predominante al logro de tal objetivo, antes de poder extenderse a otros aspectos.

De esta distinción se desprende también una diferencia importante entre la naturaleza y la amplitud de las acciones desplegadas por las experiencias parlamentarias supranacionales ligadas a una u otra opción. En el primer caso, la institución estaría en situación más adecuada para asumir las responsabilidades clásicas de cualquier parlamento nacional. No ocurriría así en el segundo.

Si bien el Parlamento Europeo no realiza una labor legislativa de primer orden, su intervención en esta actividad ha ido creciendo en forma permanente. Recuértese que en su origen no tenía ningún poder de decisión en esta materia al fungir meramente como órgano deliberativo, mientras que hoy el Consejo le solicita su opinión en todos los proyectos de la ley importantes, lo que le ha permitido cubrir en parte su "déficit democrático" en este renglón.

En 1975 la Comunidad Europea (CE) introdujo el procedimiento de "concertación" para toda la legislación comunitaria que supusiera gastos o ingresos considerables. Ello colocó al Parlamento en posibilidad de intervenir en la elaboración, discusión y apro-





bación de su presupuesto, al igual que cualquier legislatura de corte nacional.

Por último, sus derechos de control frente a la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la CE) le permiten exigir su dimisión mediante una moción de censura apoyada por la mayoría del pleno, como ocurre en toda asamblea de esta naturaleza en un régimen parlamentario.

En contraste, el modelo adoptado por los demás parlamentos supranacionales no goza de ninguna de esas prerrogativas. Su precario desarrollo los limita a operar como foros de pronunciamientos, denuncias o propuestas a gobiernos, parlamentos locales o regionales, o quizás a otros organismos supranacionales como la Organización de las Naciones Unidas.

Su desempeño corresponde así al de un órgano puramente deliberativo, lo que en esencia significa que no tiene capacidad para tomar decisiones sobre la vida de los países que lo integran. No obstante, al facilitar la actuación coordinada de un conjunto de naciones, permite el aumento del poder de

negociación de sus suscriptores frente a otros países o núcleos regionales, en comparación con el que gozarían de manera aislada.

En el primer modelo, la integración, entendida como la fusión de diversos estados —lo que supone una renuncia

*R*azones  
económicas al  
inicio de los  
cincuenta  
sentaron las bases  
para la creación del  
Parlamento Europeo

b) La Junta Directiva, con funciones de representación permanente y coordinación. Se integra por un presidente, dos presidentes alternos, cinco secretarios, un director de la sede permanente, un presidente del Consejo Consultivo y vicepresidentes en número igual al de los parlamentos miembros.

c) El presidente, que representa jurídicamente al Parlantino, convoca y dirige los trabajos de la Asamblea. Actualmente es el diputado uruguayo Humberto Celli.

d) Los vicepresidentes, presidentes de cada uno de los congresos miembros.

e) Consejo Consultivo de la Junta Directiva, con funciones de asesoría política y legislativa. Está compuesto por 11 parlamentarios o exparlamentarios.

f) La Secretaría General, órgano de articulación, coordinación y supervisión permanente del Parlantino. Prepara la agenda de la Asamblea, elabora documentos de trabajo y maneja el presupuesto.

g) Las comisiones permanentes, órganos de carácter específico. Actualmente son 13: Asuntos Políticos, presidida por México; Economía y Finanzas, por El Salvador; Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, por Brasil; Asuntos Jurídicos, por Paraguay; Derechos Humanos, por Costa Rica; Medio Ambiente, por Guatemala; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por Honduras; Servicios Públicos, por Aruba; Defensa y Lucha contra el Narcotráfico, por Perú; Salud, Trabajo y Seguridad Social, por Cuba; Asuntos Indígenas y Etnias, por Nicaragua; Energía y Minas, por Brasil; y Defensa del Usuario y el Consumidor, por Ecuador.

Adicionalmente, se constituyeron las comisiones especiales de Deuda Externa y de Supervisión de la Construcción de la Sede.



*Todos los  
parlamentos  
supranacionales se  
inscriben en dos  
posibles patrones  
básicos*

o restricción de sus derechos de soberanía para ser transferidos a instituciones de corte supranacional— poco a poco empieza a cobrar cuerpo. En el segundo, por el contrario, la cooperación es el eje principal de articulación de las acciones, por lo que ningún Estado sufre merma alguna en su soberanía nacional.

**Perfil de los parlamentos  
supranacionales**

El dilema entre “cooperación” o “integración” a nivel de los nuevos organismos supranacionales, ha puesto en el centro del debate la vigencia de la estructura nacional como base del Estado moderno.

Un modo, que si bien no soluciona la cuestión, por lo menos no la enfrenta sin antes contar con elementos suficientes para evitar inútiles desgastes, ha sido la respuesta de la Comunidad Europea. En su experiencia, la unificación no queda sujeta a ninguna idea prefijada. El avance es paulatino, al tiempo que sobre la marcha se introducen las correcciones necesarias.

**FORO PARLAMENTARIO ASIA-PACÍFICO**

A medida que el comercio se ha hecho más intenso en la región Asia-Pacífico —la que por cierto incluye algunas de las economías más dinámicas del mundo—, han comenzado a aparecer nuevos organismos de integración económica.

Tal es el caso del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), la Conferencia sobre Cooperación Económica del Pacífico (PECC) y el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC).

Empero, la idea de crear un Foro Parlamentario destinado al examen de los acontecimientos políticos, sociales y culturales, producto del crecimiento e integración económica de la región, apenas surge en 1990 a propuesta del Partido Liberal Democrático de Japón.

Reunidos por primera vez en agosto de 1991 en Singapur, los parlamentarios de los países miembros proceden a la redacción de un Memorandum de Entendimiento a fin de establecer la estructura básica de la nueva organización. Entre sus objetivos se señalan los siguientes:

1. Desarrollar las relaciones entre los parlamentos de la región a fin de

apoyar la libertad y la democracia en el área Asia-Pacífico.

2. Fortalecer los lazos de cooperación en aspectos no militares con instituciones tales como el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico y la Asociación de Naciones del Suroeste de Asia (ANSEA).

3. Promover la colaboración con otras regiones del mundo.

En esa ocasión, por cierto, la participación de México en el Foro Parlamentario Asia-Pacífico fue aprobada finalmente. Cabe resaltar que el nuestro es el único país latinoamericano con presencia en dicho organismo y su participación habrá de reforzarse aún más, una vez que México sea aceptado como miembro de pleno derecho, lo que ocurrirá en la próxima reunión ministerial del APEC.

Desde su creación hasta la fecha, el Foro Parlamentario Asia-Pacífico ha celebrado tres reuniones más. La primera en Canberra, Australia, los días 10 y 11 de diciembre de 1991; la segunda en Kona, Hawaii, del 23 al 25 de abril de 1992, y la tercera en Tokio, Japón, del 13 al 15 de enero de este año. En todas ellas México ha estado presente con distintas delegaciones.

Según sus cálculos, el formato nacional no tiene por qué desaparecer de la escena universal. Lo único que se requiere es su adaptación a las nuevas condiciones, por lo que algunos de sus asideros tradicionales deben ser modificados. Tal sería el caso, por ejemplo, de la unidad monetaria.

Otras instituciones conservarán su

mismo armazón básico. El valor de su permanencia queda comprobado al servir de inspiración a las nuevas instancias supranacionales en proceso de gestación. En este rubro se ubica al Parlamento Europeo, que copia, en no pocos aspectos, el entramado esencial de sus homólogos nacionales.

En otras cosas se observa, por ejem-



plo, que ambos cuerpos califican a la asamblea como máxima autoridad, operan con órganos directivos parecidos y su trabajo se desenvuelve igualmente por medio de comisiones especializadas. En la designación de sus miembros también ocurre algo similar. El PE, por ejemplo, ha incorporado la elección directa de sus integrantes y la representación se establece en torno a corrientes de opinión, y no de países.

Aunque en el Parlatino se busca ya la manera de implantar un procedimiento electoral de este tipo, tal experiencia es todavía apenas una aspiración. Hasta el momento, la representación en su seno se desenvuelve esencialmente bajo esquemas nacionales.

Este matiz, así como otros claramente advertidos en el desarrollo de los parlamentos supranacionales, sólo

son explicables a partir de distintos factores de orden político. En este renglón cabe destacar el grado de institucionalización, avance democrático y equilibrio de poderes en cada uno de los países que los integran.

Difícil es pensar que el Parlamento Africano, constituido apenas en la segunda mitad de los años ochenta, pueda mostrar los mismos rasgos que el Europeo, cuando la mayoría de sus países firmantes apenas da sus primeros pasos en el plano democrático, y continuamente tienen que enfrentar la persistencia de formas autoritarias con serios saldos de inestabilidad política.

Por otra parte, tampoco resalta lógico que en regiones donde la subordinación de las legislaturas al Ejecutivo es evidente, los parlamentos supranacionales pretendan erigirse en instancia definitiva en el proceso de toma

de decisiones sobre la vida de la comunidad.

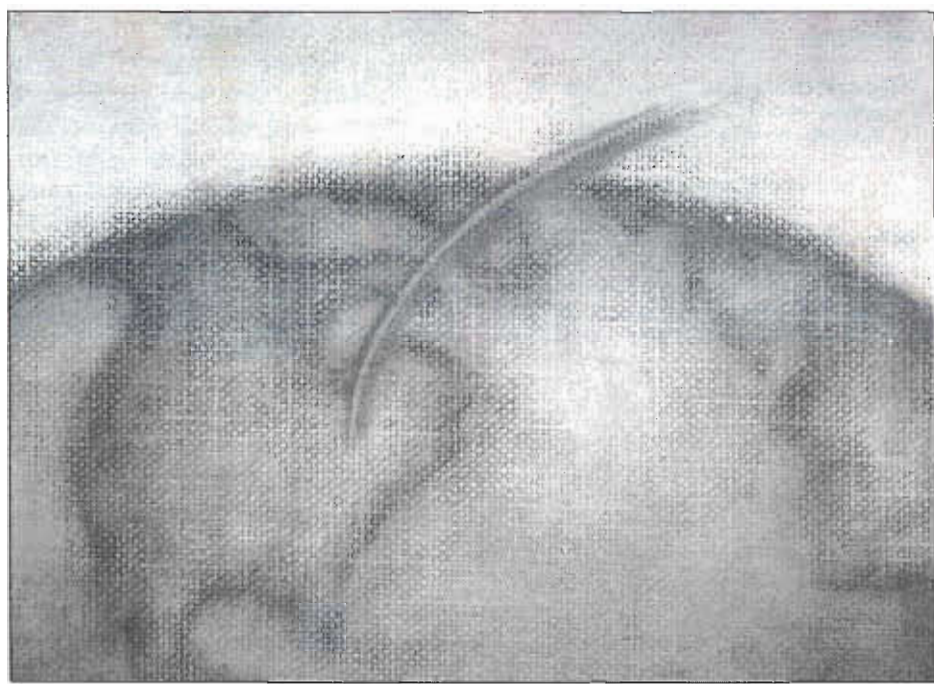
#### El TLC, posible acicate

Por ahora parece que las preguntas sobre los parlamentos supranacionales son todavía más abundantes que las respuestas disponibles. De ahí que emitir juicios definitivos sobre el porvenir de tales instituciones sea asunto altamente riesgoso.

No obstante, en un contexto marcado por la formación de bloques, las incógnitas se agudizan, especialmente en rubros de trascendencia para nuestro país como el Tratado de Libre Comercio (TLC) recientemente firmado con Estados Unidos y Canadá y en espera sólo de confirmación legislativa.

Si bien las autoridades ligadas a la negociación han dejado claro en distintos foros que el compromiso es puramente comercial, la posibilidad de

*El dilema  
entre cooperación  
o integración  
ha puesto en el  
centro del debate  
la vigencia  
de la estructura  
nacional*

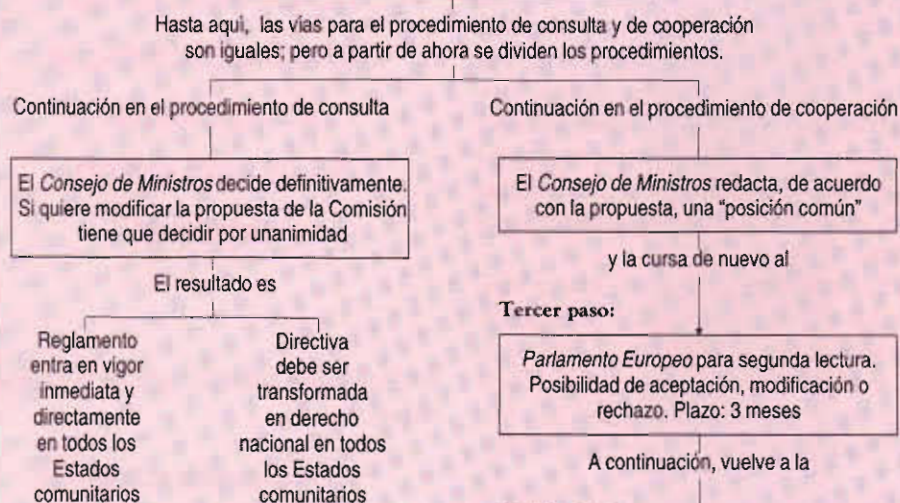


## PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO EN LA COMUNIDAD EUROPEA

### Primer paso:



### Segundo paso:



El resultado es

Reglamento entra en vigor inmediata y directamente en todos los Estados comunitarios

Directiva debe ser transformada en derecho nacional en todos los Estados comunitarios

### Tercer paso:

Parlamento Europeo para segunda lectura. Posibilidad de aceptación, modificación o rechazo. Plazo: 3 meses

A continuación, vuelve a la

### Cuarto paso:

Comisión; las modificaciones del Parlamento se tienen en cuenta o, indicando de forma motivada, son rechazadas. Plazo: 1 mes

Nueva presentación ante el

### Quinto paso:

Consejo de Ministros, que decide definitivamente en segunda lectura, sin modificaciones propias, con mayoría cualificada. De lo contrario, por unanimidad. Plazo: 3 meses

El resultado es

Reglamento entra en vigor inmediata y directamente en todos los Estados comunitarios

Directiva debe ser transformada en derecho nacional en todos los Estados comunitarios

*No debe descartarse la posibilidad de que con el tiempo el TLC sienta las bases para un proceso de Integración como el de la CE*

que con el tiempo éste pudiera crear las bases para un proceso de integración como el que ya experimenta la CE no puede ser descartada.

Tal previsión no parece del todo descabellada, sobre todo si se piensa que como resultado de su funcionamiento, los tres países habrán de reforzar sus relaciones. Ello seguramente creará a su vez las condiciones para un ensayo de este tipo, que incluso con el tiempo, según se ha especulado, pudiera incluir a todo el continente.

Así, por el momento no queda más alternativa que seguir de cerca las experiencias parlamentarias de carácter supranacional, independientemente de que México participe o no en ellas. Sólo así se podrá iniciar una reflexión más seria y sistemática sobre el desarrollo de estos organismos en la actualidad y acerca del importante papel que están llamados a jugar en un no muy largo plazo.



# Nuevos pasos para la integración latinoamericana



**C**onformar la Comunidad Latinoamericana de Naciones, crear la Universidad Latinoamericana y del Caribe y discutir en cada país la propuesta de elección directa de sus miembros fueron algunas de las principales resoluciones adoptadas después de dos días de trabajo por organismos directivos del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), reunidos en la ciudad de México el 28 y 29 de enero.

Fundado en Lima, Perú, el 10 de diciembre de 1964 con la representación de congresos de 14 países, el Parlatino ha ido creciendo hasta reunir en la actualidad a legislaturas de 22 naciones de América Latina.

La reunión en la capital mexicana de la Junta Directiva y las comisiones de Asuntos Políticos y Asuntos Jurídicos del Parlatino, tuvo como objetivos esenciales: discutir un nuevo regla-

mento que le dé mayor personalidad jurídica a este incipiente Parlamento, adoptar una agenda política para el funcionamiento del organismo y emitir pronunciamientos sobre asuntos de interés general para la región.

Al final de la reunión y ante legisladores de 17 de los países miembros del Parlatino, el diputado uruguayo Juan Adolfo Singer, presidente alterno de este organismo, hizo un llamado vehemente para trabajar por la integración de la región. "Reconozcamos con coraje que somos la historia de sucesivos fracasos y que la verdadera respuesta está en nuestra unidad", dijo elocuente.

Durante los dos días de trabajo, los miembros del Parlatino discutieron las posibilidades y necesidades de la integración latinoamericana. Se vertieron asimismo condenas a la Ley Torricelli, que pretende acrecentar el bloqueo

contra Cuba. De hecho, en la declaración final se hace una clara condena a la extraterritorialidad de leyes como la Torricelli. También se alude al necesario apoyo a las naciones amenazadas por la violencia del narcotráfico.

Los llamados a la unidad regional fueron abundantes. El presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, dijo en la inauguración del evento que "hoy, cuando se agudiza la competencia por los mercados y se acentúa la disminución del crecimiento económico en el mundo, en América Latina deben fortalecerse los mecanismos propios que afiancen la soberanía, promuevan el intercambio y generen empleo y bienestar en la región".

La Comisión de Asuntos Jurídicos, presidida por el legislador paraguayo Ricardo Lugo Rodríguez, discutió la propuesta de elección directa de los miembros del Parlatino y presentó un Proyecto de Reglamento Interno que consta de 92 artículos, así como un Proyecto de Protocolo Adicional al que se firmó en Lima el 17 de noviembre de 1987, para institucionalizar los órganos del Parlamento y darle una mayor personalidad jurídica.

Por su parte, la Comisión de Asuntos Políticos, a cargo del senador mexicano Humberto Lugo Gil, deliberó acerca de las diversas propuestas sobre integración del Parlamento Latinoamericano y decidió crear una comisión *ad hoc* que resuelva en un plazo máximo de dos meses las implicaciones jurídicas en cada país de la elección directa de los miembros.

La decisión final estará a cargo de la Junta Directiva, instancia que tiene como funciones principales la representación permanente y la coordinación de los trabajos del Parlamento.



## DECLARACIÓN POLÍTICA DEL PARLATINO

Los puntos acordados por los países participantes en la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos del Parlamento Latinoamericano a fines de enero, se enlistan en el siguiente resumen:

1. En América Latina existen principios, propuestas y acciones que tienen como objetivo lograr una convivencia pacífica, armónica y justa entre los hombres. Esta es una de nuestras normas de actuación.

2. En ninguna nación de América Latina se encierran ambiciones hegemónicas para la región.

3. No esperaremos que otros bloques se consoliden sino que actuaremos conforme a nuestras circunstancias.

4. América Latina se enfrenta ahora a cuatro cuestiones de orden político: el fortalecimiento de la democracia, la promoción de la paz y la seguridad internacionales, el establecimiento de condiciones duraderas para el crecimiento económico, y el acceso a niveles óptimos de justicia y bienestar social para nuestros pueblos.

5. Frente al fin de la bipolaridad Este-Oeste, persisten y se agudizan las contradicciones Norte-Sur.

6. El nuevo panorama internacional confirma la tendencia hacia la interdependencia, internacionalización de la economía e intensa competencia por los mercados.

7. El Parlamento Latinoamericano debe afirmarse como órgano público de promoción permanente para la reflexión cotidiana y para la adopción de acciones a favor de la integración.



8. La prioridad regional inaplazable es el desarrollo de mecanismos de planeación y seguimiento para acometer de manera gradual y continua los procesos que conllevan al fortalecimiento de nuestra unidad.

9. Es irreductible el principio de libre determinación de nuestros pueblos para darse el sistema político, económico y social que mejor responda a sus aspiraciones.

10. Es inadmisibles la tendencia actual que pretende darle extraterritorialidad a las leyes, porque atenta contra la soberanía de cada Estado.

11. La solidaridad y la acción conjunta de la región son indispensables para superar actuaciones aisladas o desvinculadas.

12. La integración es una estrategia propia de la región con el fin de vincularnos provechosamente a la internacionalización de la economía.

13. Saludamos con beneplácito los esfuerzos de integración llevados a cabo en el Mercosur, en Centroamérica y en el Grupo de los Tres.

14. Crear y mantener las condiciones que le den viabilidad a las instituciones demo-

cráticas, necesaria no sólo como la participación del pueblo en la conformación de los órganos de poder sino también desde la perspectiva de la democracia real que conlleva a la generación de crecimiento económico y distribución equitativa de la riqueza.

15. Pugar porque los gobiernos impulsen sus esfuerzos de cooperación para contar con adecuados fondos de financiamiento para el desarrollo.

16. Revisar la agenda política de la región para impulsar la atención a las necesidades de alimentación y de educación. Asimismo, revisar las estrategias en materia de drogas, protección del medio ambiente, desarrollo de las comunicaciones y acceso a las tecnologías modernas.

17. Se manifiesta satisfacción por los acuerdos de paz firmados en El Salvador.

18. Fortalecer el Parlamento Latinoamericano, particularmente a través de los principios de democracia e integración.

19. Intensificar los nexos de colaboración solidaria con los diversos parlamentos subregionales y con los organismos y foros regionales y mundiales.

20. Consolidar los vínculos del Parlamento Latinoamericano con el Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política para contribuir al avance legislativo de los compromisos adoptados por los países miembros del Grupo de Río.

21. La unidad logrará la vinculación positiva; por ello, América Latina debe dar un renovado impulso a su esfuerzo y acciones prácticas de integración regional con el fin de conformar la Comunidad Latinoamericana de Naciones.

### Un organismo que se consolida

En breve entrevista, el senador Lugo Gil comentó que los trabajos de la Comisión de Asuntos Políticos fueron intensos y dijo que el Parlamento Latinoamericano "ha ido tomando mayor representatividad, y las recomendaciones que hemos emitido han sido acogidas por todos los parlamentos".

Indicó que hay consenso para que cada nación revise sus constituciones y resuelva la propuesta de elección directa de sus miembros.

Por su parte, el legislador paraguayo Ricardo Lugo Rodríguez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, hizo un paralelismo entre el Parlatino y el Parlamento Europeo. Consideró que, sin duda, el avance del Parlatino

responde al nuevo papel que juegan los cuerpos legislativos en la región, pero señaló que difícilmente puede compararse al Parlamento Europeo, ya que "la realidad política, social y económica de Europa y América Latina son distintas". Abundó al respecto: "en América Latina es muy difícil que puedan sustentarse políticas puramente parlamentarias. Se necesita del con-



curso del Ejecutivo, ya que existen todavía problemas económicos y políticos profundos que no se resolverán con el solo parlamentarismo”.

### Deliberaciones

Cuestiones ideológicas, económicas y diplomáticas fueron ampliamente debatidas por los parlamentarios latinoamericanos. El tema de la democracia fue uno de los ejes de las discusiones de las dos comisiones y de la Junta Directiva.

La integración económica de América Latina fue otro punto central. En la ceremonia de inauguración, el presidente mexicano Carlos Salinas y diversos parlamentarios se refirieron a los recientes acuerdos de integración firmados entre México y Centroamérica, el Mercosur formado por Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay; el tratado de libre comercio bilateral México-Chile y las pláticas entre nuestro país, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay para suscribir acuerdos similares.

En la discusión de la mesa de Junta Directiva se resolvió impulsar la creación de la Universidad Latinoamericana y se estudiaron las diversas propuestas para un nuevo reglamento del organismo.

Los trabajos previos realizados en la reunión de Sao Paulo sirvieron como punto de partida para revisar el proyecto de reglamento. De los 122 artículos originales, el reglamento se quedó finalmente con 92. La mayor parte de las disposiciones que desaparecieron tenían que ver con las funciones de la Asamblea General, máximo organismo del Parlatino que se reúne cada dos años con la participación de todas las delegaciones nacionales. De aprobarse



la propuesta de elección directa de sus miembros, la integración de la Asamblea se modificaría sustancialmente.

Con respecto a la Universidad Latinoamericana, la Junta Directiva resolvió designar por concurso al rector, crear un consejo consultivo que le dará fundamento jurídico a esta institución académica y asignar un presupuesto de 42 mil dólares durante este año. La universidad será una institución de estudios de posgrado que tendrá como principal objetivo investigar las posibilidades de integración regional y responder a las tendencias y retos que trae consigo la globalización económica.

En torno a la discusión de la elección de los miembros y la conformación del Parlatino, el senador mexicano Porfirio Muñoz Ledo propuso que

la representación de cada país sea proporcional y varíe, de acuerdo con el tamaño de su población, de cuatro a 12 miembros. Otros legisladores sugirieron una representación paritaria. Se discutió si la elección se restringía al ámbito de los parlamentos o se ampliaba a sufragio universal. La delegación panameña objetó este punto.

Muñoz Ledo recalcó que es necesario determinar la naturaleza jurídica del Parlatino. La disyuntiva se plantea entre ser sólo un foro político o bien un organismo que legisle. Propuso una tercera vía provisional que tome como modelo un mandato semejante al del Parlamento de Estrasburgo.

Las propuestas se canalizaron a la Junta Directiva para que sea ésta la que decida finalmente.

LV



# Hacia una diplomacia parlamentaria

¿Turismo o diplomacia parlamentaria?, ¿producto de la globalización económica o hecho aislado?, ¿alcances limitados o permanentes?

Estas y otras preguntas sobre el mayor y mejor volumen de intercambio entre parlamentarios del mundo fueron hechas a tres diputados: Francisco Paoli Bolio (PAN), Rodolfo Becerril Traffon (PRI) y Julio César García Hernández (PRD). Desde ángulos distintos, los tres coincidieron en destacar el nuevo peso que tienen los parlamentos a nivel supranacional y la necesidad de intensificar los contactos entre ellos.

Becerril Traffon, coordinador encargado de la Comisión de Relaciones Exteriores, opinó que la diplomacia parlamentaria "tiende a estar enmarcada en la globalización económica: los actores diplomáticos tradicionales han cedido su lugar a los actores políticos".

Paoli Bolio, presidente del Comité de Biblioteca, destacó que si bien hay tanto turismo como diplomacia en los viajes y reuniones de los parlamentarios, ambos son necesarios porque impulsan los contactos. Para él, el mayor intercambio parlamentario no tiene una relación directa con la globalización económica. Cree, eso sí, que los organismos interparlamentarios "ahora tendrán que dinamizarse, adaptarse y cambiar algunas estructuras para facilitar la toma de decisiones".

García Hernández, integrante del Parlamento Latinoamericano, consideró que, hasta el momento, la globalización económica va por delante de los cambios políticos y que el mayor intercambio parlamentario es un reflejo también de la importancia que ha tomado el tema de la democracia.

Los tres legisladores coincidieron en que la mayor o menor efectividad de instancias como el Parlamento Latinoamericano se dará en la medida que los órganos legislativos de cada país tengan un nuevo papel dentro de sus ámbitos nacionales.

El legislador perredista resaltó que en el caso de América Latina, la tradición de presidencialismo en casi toda el área ha impedido hasta ahora que los parlamentos de la región estén a la altura de los cambios. "La pérdida de importancia de los legisladores frente a la opinión pública" es motivo de preocupación en la región. Sin embargo, añadió, "el caso brasileño revela que el parlamento puede adquirir un nuevo protagonismo".

Por su parte, Paoli Bolio, diputado por el PAN y exrector de la UAM Xochimilco, apuntó que si bien los

poderes ejecutivos van en la delantera de la discusión y de la toma de acuerdos, en el área latinoamericana existe un interés cada vez mayor por "ir reduciendo esta caricaturesca y a veces extremosa actividad de los ejecutivos que controlan todo. Yo diría que en varios países (Chile, Brasil y Argentina) la fuerza de los parlamentos ha ido creciendo. Y aquí mismo, en México, donde hay una revitalización del trabajo legislativo".

## Integración y diplomacia parlamentaria

Rodolfo Becerril Traffon indicó que, "sin duda, la conformación de los bloques mundiales ha transformado el tradicional papel de los parlamentos. Hoy en día participan de este estrechamiento de relaciones económicas entre las naciones. Está el ejemplo del Parlamento Europeo, sin duda está marcando la señal de lo que puede ser un organismo supranacional parlamentario".

-¿Representa esta intensificación de los flujos parlamentarios un agotamiento de la idea de unidad nacional?

-Digamos que revoluciona los asideros tradicionales, no los cancela o elimina. Muchas veces las áreas jurisdiccionales de los parlamentos supranacionales no resuelven todos los problemas internos, como en el caso del Parlamento Europeo.

El legislador priista, consultor en asuntos culturales de la OEA y la ONU, hizo notar que hasta el momento en América del Norte y América Latina se está pensando en fortalecer los nexos económico-comerciales y no en una integración total al estilo europeo. Indicó que, en teoría, hay varias

### La diplomacia parlamentaria en la LV Legislatura

- Número de viajes al extranjero en el primer año de la LV Legislatura: 37.
- Visitas de embajadores acreditados en México: 17.
- Delegaciones extranjeras recibidas por la Comisión de Relaciones Exteriores: 19.
- Reuniones interparlamentarias en el extranjero: dos (Estados Unidos y Chile).
- Reuniones interparlamentarias en México: dos (Belize y España).

Fuente: Comisión de Relaciones Exteriores.



*Los*

*actores*

*diplomáticos*

*tradicionales*

*han cedido su lugar*

*a los actores*

*políticos*

etapas previas que se dan antes de la integración total: la faja fronteriza, el acuerdo comercial al estilo del Tratado de Libre Comercio y finalmente, el mercado común.

"Lo primero y más importante para pensar en una integración futura es que América Latina consolide su democracia", apuntó Becerril.

Entrevistado aparte, el yucateco Francisco José Paoli Bolio dijo que por naturaleza los parlamentos avanzan a un paso mucho más lento que la intensificación de las relaciones entre los actores económicos, porque su trabajo es de carácter más plural "y más duradero, pues su fin más ortodoxo es crear normas, leyes".

En el caso de los parlamentos supranacionales en América Latina, consideró el legislador panista, primero es necesario que la integración económica se dé en la realidad y no sólo en el papel o en el discurso.

"Tendría que haber un volumen de comercio muy intenso, un intercambio cultural muy amplio, para que después se llegara a la fórmula de tener un legislador común. Si no existen las bases, forzar esto en América Latina sería voluntarismo", afirmó Paoli.

Julio César García Hernández sostuvo, por su lado, que la integración latinoamericana se tiene que dar como una necesidad defensiva no sólo en términos estratégicos sino económicos. Frente a la expansión de Estados Unidos, la unidad latinoamericana es una necesidad, dijo.

Para el diputado perredista, en América Latina existe una ventaja sobre la Comunidad Europea que podrá facilitar la integración: "una vinculación mayor en términos de lenguaje, origen étnico y tradiciones".

Entrevistado durante la reunión del Parlamento Latinoamericano que se realizó a fines de enero, García Hernández señaló que esta instancia puede ser un impulsor no sólo de la integración sino de la democracia regional. De ahí la importancia de que la comunidad latinoamericana comience a trabajar en la elección de sus representantes en el Parlamento Latinoamericano.

### **La participación mexicana**

¿Ha cambiado la actitud de los legisladores mexicanos en el intercambio con otros parlamentos? se cuestionó a los tres legisladores.

El hecho mismo de que se estudie el término diplomacia parlamentaria, señaló Becerril, "demuestra un interés", y el hecho de que en nuestro país se realicen varias reuniones interparlamentarias "indica que en México hay receptividad a estos encuentros y temas".

El diputado morelense señaló que es necesario empezar a pensar en proyectos legislativos que rebasen fronteras. Ejemplificando el mayor interés de los parlamentarios mexicanos por los contactos con otros legisladores del mundo, recordó que ya se han efectuado interparlamentarias México-Estados Unidos y México-Canadá y que en el seno del Congreso se están formando grupos parlamentarios por países.

Hay grupos Francia-México y Alemania-México que "son los responsables de hacer el lobby o cabildeo de todo lo que tiene que ver con esos países".

Becerril reconoció que en otras partes del mundo obviamente hay algunas fracciones parlamentarias que tienen un mayor interés por nuestro país. "En el caso de la representación de otros países en México, no hemos pensado más que en el interés y la buena voluntad", señaló.

Paoli Bolio, a su vez, sostuvo que el Congreso mexicano, como todos los parlamentos, se mueve mucho más lento que el Ejecutivo en la intensificación de sus relaciones con otros órganos legislativos. Sin embargo, dijo, la interacción legislativa y la participación de México "se está dando y se va a dar con mayor intensidad todavía".

Puso como ejemplo la relación que la Biblioteca de la Cámara de Diputados ha establecido con el Congreso estadounidense para intercambiar información sobre leyes de uno y otro lado.

Desde otro ángulo, el perredista Julio César García Hernández apuntó que si bien la participación en los organismos interparlamentarios es limitada, sin duda ha ido creciendo en los últimos años el interés por llegar a acuerdos concretos con parlamentarios de otros países.

Puntos de vista de tres legisladores -pertenecientes a tres diferentes grupos parlamentarios- miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, que coinciden en reconocer la creciente importancia del parlamentarismo supranacional y en percibirlo como una modalidad en la que hay aún muchas posibilidades por explorar.

LV





### Los recintos legislativos

## Por los avatares del viejo Teatro Iturbide

La historia de los recintos de la Cámara de Diputados es vastísima. Se remonta al inicio de la época independiente y va de la mano con las diversas etapas de nuestra vida nacional. Desde la primera sede legislativa en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, en los albores de la independencia, hasta el conjunto de San Lázaro, han sido por lo menos 14 las casas camarales.

Antes de la inauguración del actual Palacio Legislativo en 1981, la Cámara de Diputados ocupó el recinto más duradero que hasta la fecha ha tenido y en el que se aloja hoy la Asamblea de Representantes del Distrito Federal: el edificio ubicado en la esquina de Allende y Donceles en el Centro Histórico de la ciudad de México, originalmente destinado al Teatro de Iturbide.

Ese teatro fue construido hacia la mitad del siglo XIX por iniciativa del empresario Francisco Abreu, exactamente en la esquina las calles que entonces llevaban los nombres de Canoa y Factor. Las obras estuvieron a cargo del arquitecto Santiago Méndez, y la decoración corrió por cuenta del pintor Manuel Serrano y el escultor Santiago Evans. Fue, por cierto, el primer teatro en la ciudad de México que contó con una instalación de luz de gas.

El Teatro de Iturbide se estrenó con bombo y platillo el 3 de enero de 1856, con un baile de máscaras. La entrada por persona costó dos pesos que incluían derecho al baile. Quienes no estaban en condiciones de erogar tan elevada suma pudieron optar por ver el espectáculo desde las galerías -sin opción a bailar, claro está-, para lo cual debían pagar dos reales.





Este teatro, que celebraba sus funciones y la contratación de artistas de acuerdo con el Teatro Nacional, vivió 16 años entre zarzuelas y conciertos, hasta que en 1872 un siniestro -que no ocurrió ahí sino en otro edificio a cuadras de distancia- desplazó la vida artística para dar lugar a las actividades legislativas.

Fue un incendio ocurrido el 22 de agosto de 1872 en la Cámara de Diputados que por entonces se ubicaba en el patio central del Palacio Nacional, lo que llevó a mudar la sede legislativa al edificio del Teatro Iturbide, luego de un par de intentos temporales en otros albergues.

Ahí, sin necesidad de grandes adaptaciones y aprovechando el escenario como presidium, se instalaron los diputados federales para efectuar su trabajo cotidiano. Así lo hicieron durante más de tres décadas -incluida casi toda la etapa porfirista- hasta que otro voraz incendio, que devastó el propio recinto de Donceles el 23 de marzo de 1909, los obligó a trasladarse por un tiempo al Palacio de Minería en la calle de Tacuba.

Después de la reconstrucción del edificio de Donceles, que ya entonces se acondicionó especialmente para hacer más confortable y eficiente el trabajo de los legisladores, en 1911 el inmueble del otrora Teatro de Iturbide volvería a ser la sede del Congreso.

La remodelación fue encargada al arquitecto Mauricio de Maria y Campos en 1910, quien dio origen a uno de los primeros edificios de dos plantas con estructura de hierro que se construyeron en el país.

Esto sucedió en los últimos meses del porfiriato. De hecho, Porfirio Díaz sólo asistió en dos ocasiones a ese recinto: cuando lo inauguró y unas semanas después, el 25 de mayo de 1911, para presentar su renuncia.

Así pues, del 11 de abril de 1911 al 28 de agosto de 1981, días antes de que se estrenara el Palacio Legislativo en San Lázaro, los legisladores federales sesionaron entre los palcos, columnas y escalinatas del bello recinto de Donceles.

Aunque hubo algunas excepciones.

Pero eso es asunto de otro capítulo de esta historia, que abordaremos en una próxima ocasión.

LV



# Actualización legal en el Congreso

**L**a ley de la casa que hace las leyes de la Nación fue objeto de una amplia reforma luego de un debate de más de siete horas en el que hubo desde celebradas coincidencias hasta enconados enfrentamientos, incluido un altercado entre miembros y exmiembros del PFCRN.

**L**a discusión de una ley largamente esperada y que despertó el interés de todos los grupos parlamentarios, concluyó el 9 de diciembre con una votación en lo general de 312 votos a favor y sólo cuatro votos en contra.

Con esta enmienda a la Ley Orgánica del Congreso General, se cumple con un deber elemental de congruencia jurídica y se satisface una añeja demanda de diputados de ésta y ante-



riores legislaturas. Para nadie es un secreto que hace largo tiempo existía coincidencia en la necesidad de adecuar el ordenamiento que rige los trabajos del parlamento mexicano con lo dispuesto por otras leyes vigentes como el Código Federal de Instituciones

y Procedimientos Electorales -Cofipey, desde luego, la Constitución de la República.

Antes de dar forma cabal a esta nueva ley, que ha cubierto su primera etapa con la aprobación de la Cámara de Diputados y está pendiente de dis-



cusión en el Senado, hubo de recorrer largo camino. Decenas de iniciativas para reformar esta ley así como el reglamento interno, se habían presentado tan sólo en las cuatro legislaturas anteriores. De ahí la trascendencia del acuerdo que en mayo pasado tomaron los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de la LV Legislatura, con el fin de dar los pasos necesarios para actualizar tanto la Ley Orgánica como el Reglamento de Gobierno Interior del Congreso (ver *Crónica Legislativa* No. 2, mayo de 1992).

El proyecto de reforma fue preparado por la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, que preside Miguel González Avelar, donde se realizó un sensible trabajo de concertación entre todas las fracciones partidistas para arribar con una propuesta viable y adecuada a los tiempos y necesidades de un Poder Legislativo cada día más dinámico y plural. La tarea era ya ineludible, si se aprecia lo poco que concordaba con este moderno perfil del legislativo, una añeja Ley Orgánica nacida en 1979, cuando era otra la realidad política mexicana, especialmente en el Congreso nacional.

### De forma y de fondo

Las aportaciones de la nueva Ley Orgánica -más de 40 artículos fueron objeto de modificaciones- se pueden clasificar en dos apartados.

Las primeras se ocupan de adaptar el texto a las disposiciones contenidas en ordenamientos como el citado Cofipe y la Constitución. Así, queda especificado que los diputados federales serán 500 -300 electos bajo el principio de mayoría relativa y 200 de representación proporcional-, y no 400 co-



mo decía la Ley anterior. Que serán dos los periodos de sesiones y que el primero de ellos se iniciará con el mes de noviembre de cada año, ocasión en la que el Presidente de la República presentará un informe general sobre el estado que guarda la administración del país, tal como lo establece el artículo 69 de la Constitución. Antes, como se recordará -y así lo indicaba la Ley Orgánica de 1979-, el periodo de sesiones, que era uno solo, se abría en septiembre y culminaba con el último día del año.

Asimismo, en el nuevo ordenamiento se recogen algunas innovacio-

nes de procedimiento puestas en práctica por la actual legislatura, pero que no habían sido formalizadas. Es el caso de la simplificación del pase de lista para la verificación de *quórum*, que antes era nominal y ahora se establece -como ya ocurre en los hechos- que se hará mediante un registro previo de firmas. Se estipula también la rotación de la presidencia de la mesa directiva para la conducción de las sesiones del pleno, procedimiento que permite a los vicepresidentes ir asumiendo la máxima autoridad de la asamblea. Disposiciones de procedimiento relacionadas con el uso de la tribuna y la duración de las intervenciones fueron también materia de la reforma.

De manera simultánea, se hicieron modificaciones que podrían denominarse de fondo, y que constituyen un notable avance en el gobierno camarl y en las relaciones con el Poder Ejecutivo. De esta forma, la ya existente -en la práctica, mas no en el texto legal- Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, instituida desde los inicios de la LV Legislatura como un órgano plural integrado por los coordinadores de todas las fracciones, obtuvo carta de naturalización parlamentaria como un cuerpo de gobierno, dirección política y administración de jerarquía superior. Entre sus funciones se encuentran la de proponer el presupuesto anual de la Cámara así como a los diputados responsables de presidir las comisiones de dictamen

**S**e recogen  
algunas  
innovaciones de  
procedimiento  
puestas en práctica  
por la actual  
legislatura, que no  
habían sido  
formalizadas



legislativo y los diversos comités. También propondrá a las personas que deberán ocupar cargos de funcionarios administrativos, como el oficial mayor y el tesorero.

En tanto, la Gran Comisión, otrora máximo órgano de gobierno de la Cámara, se mantiene como una estructura de organización y dirección para los diputados del partido que obtenga la mayoría parlamentaria.

### No más interpelaciones

Una de las innovaciones que sin duda tendrá mayor trascendencia, es la que dispone que los secretarios de Gobernación, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social, comparezcan ante la representación nacional para ampliar y detallar los temas de política interior, hacendaria, exterior y social que el Presidente de la República refiera en su informe anual. Con esta disposi-



CÁMARA DE DIPUTADOS

ción se busca que el diálogo entre el Legislativo y el Ejecutivo sea más eficaz y sólido y se contribuya al avance político y la democracia nacional.

Otro rubro que destaca en el texto de la nueva Ley Orgánica del Congreso es la prohibición, en el artículo octavo, de interpelar al Presidente de la República durante su informe anual. Fue este punto, sin duda, el que motivó mayor polémica en la discusión en el pleno.

En el debate, que se prolongó por horas, los representantes del PAN, el PRD, el PARM y el PPS, cuestionaron la reforma al artículo octavo e insistieron en la pertinencia de la interpelación, aduciendo la igualdad de los poderes Legislativo y Ejecutivo. En oposición, el PRI defendió la improcedencia de tal demanda, argumentando el carácter protocolario del acto del informe de gobierno, las diferencias de forma y fondo que distinguen a los regímenes parlamentarios de los presidenciales y el espíritu de la disposición constitucional. Al final prevaleció la opinión del Revolucionario Institucional, por lo que el artículo octavo de la nueva Ley prohíbe la interrupción o interpelación al jefe del Ejecutivo durante su presencia en la apertura de sesiones del Congreso para rendir su informe de labores. A causa de la

inconformidad de varios partidos con esta disposición, la votación en lo particular tuvo 99 votos en contra.

Fue en el contexto de esta polémica que la priista Blanca Ruth Esponda propuso, para equilibrar los intereses, que la iniciativa se modificara con el fin de establecer que luego del informe presidencial y durante la glosa del mismo en las sesiones plenarias de la Cámara de Diputados, exista la opción de solicitar la presencia de los secretarios de Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores. Las seis fracciones parlamentarias aceptaron la propuesta de la diputada Esponda, por lo que se incluyó también en el citado artículo octavo.

Sumaron más de 30 los diputados de todas las fracciones que participaron en este debate de particular trascendencia para la vida interna del Congreso. Entre ellos estuvieron los priistas Miguel González Avelar, Alejandro Ontiveros Gómez y Blanca Ruth Esponda; los panistas Héctor Pérez Plazola y César Jáuregui; y los perredistas Raymundo Cárdenas Hernández, Carlos González Durán y Emilio Becerra González. También intervinieron Manuel Terrazas Guerrero y Octaviano Alaniz Alaniz, del PFCRN; Adolfo Kunz Bolaños, del PARM y Juan Campos Vega por el PPS, más otros 18 legisladores que pidieron la palabra para hechos.

Cabe recordar que la Ley Orgánica del Congreso General no requiere de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que sólo queda esperar la resolución de la Cámara de Senadores para que entre en vigor. Se espera que el Senado se ocupe de la discusión de este ordenamiento en el segundo periodo de sesiones, que inicia el 15 de abril.

LV

**E**n el texto de  
la nueva Ley  
destaca la  
prohibición de  
interpelar al  
Presidente de la  
República durante  
su informe anual



# Segundo año de ejercicio: resumen del primer periodo ordinario



labor legislativa fue diciembre, como se puede ver enseguida:

Mes	Leyes	Decretos	Total
Noviembre	2	1	3
Diciembre	8	16	24
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>27</b>

Trece de las 27 iniciativas aprobadas fueron presentadas durante noviembre y nueve en diciembre. Se aprobaron también cinco iniciativas presentadas en el anterior periodo ordinario de sesiones: tres de junio y dos de julio.

**D**iez fueron las leyes y 17 los decretos aprobados durante el periodo de sesiones que abarcó los meses de noviembre y diciembre de 1992 en la Cámara de Diputados. De esos 27 ordenamientos legales, 23 fueron iniciativa del Poder Ejecutivo —ocho de ellos se recibieron como minuta del Senado—, una ley fue iniciativa conjunta de los grupos parlamentarios y tres decretos fueron propuestos por sendas fracciones: la del Partido Revolucionario Institucional, la del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y la del Partido Popular Socialista.

El mes de mayor intensidad en esta

## Iniciativas

El Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados 19 iniciativas de leyes y decretos a lo largo de este primer periodo. Ocho tuvieron al Senado como cámara de origen.

Por su parte, los grupos parlamentarios presentaron 13 iniciativas. El PRI presentó tres; el PAN cinco; el PRD dos y el PPS dos. Hubo además una iniciativa conjunta de los grupos parlamentarios.

De estas iniciativas, se dictaminaron y aprobaron las 19 del Ejecutivo, una del PRI, una del PPS y la iniciativa conjunta. Las demás iniciativas de los grupos parlamentarios están aún pendientes de dictamen. Cabe señalar que el resto de las leyes y los decretos aprobados en este periodo, corresponden a iniciativas que se habían presentado en el anterior periodo de sesiones.

## Sesiones realizadas y horas de trabajo

Octubre	1 sesión	1 hora
Noviembre	10 sesiones	73 horas
Diciembre	15 sesiones	138 horas
<b>Total</b>	<b>26 sesiones</b>	<b>212 horas</b>

## Comisiones y comités

De manera simultánea a las sesiones del pleno, durante los dos meses de ejercicio del primer periodo ordinario del segundo año de la LV Legislatura, en la Cámara de Diputados se efectuaron 230 reuniones de comisiones y



## Principales asuntos tratados en el pleno

Denuncias	25
Dictámenes	66
Informes	6
Iniciativas	36
Pronunciamientos	8
Proposiciones	11
Puntos de acuerdo	22



comités. Estas se agrupan, por sus características, en:

Reuniones ordinarias	162	Energéticos	5	Comité de Biblioteca	1
Reuniones con invitados especiales	10	Fomento Cooperativo	3	Instituto de Investigaciones Legislativas	1
Reuniones conjuntas	58	Ganadería	5		
<b>Total</b>	<b>230</b>	Gobernación y Puntos Constitucionales	15		
<b>Reuniones por comisión</b>		Hacienda y Crédito Público	9		
Comisión	Reuniones	Información, Gestoría y Quejas	2		
Agricultura	1	Justicia	2		
Artesanías	1	Marina	1		
Asentamientos Humanos y Obras Públicas	4	Patrimonio y Fomento Industrial	5		
Asuntos Fronterizos	1	Población y Desarrollo	1		
Asuntos Hidráulicos	1	Programación, Presupuesto y Cuenta Pública	17		
Asuntos Indígenas	1	Radio, Televisión y Cinematografía	6		
Bosques y Selvas	9	Reconstrucción del Palacio Legislativo	7		
Comercio	9	Régimen Interno y Concertación Política	28		
Comunicaciones y Transportes	2	Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias	7		
Cultura	4	Relaciones Exteriores	8		
Defensa Nacional	1	Salud	5		
Deporte	3	Seguridad Social	2		
Derechos Humanos	4	Trabajo y Previsión Social	3		
Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicio	8	Turismo	10		
Distrito Federal	22	Vivienda	1		
Ecología y Medio Ambiente	8	Comité de Administración	2		
Educación	4	Comité de Asuntos Editoriales	1		

## Asuntos turnados por el pleno a comisiones y comités

Iniciativas	35
Propuestas	5
Denuncias	7
Puntos de acuerdo	7
Permisos constitucionales	40
<b>Total</b>	<b>94</b>

## Participación en tribuna por mes

Mes	Oradores
Noviembre	257
Diciembre	625
<b>Total</b>	<b>882</b>

## Diputados que hicieron uso de la tribuna con más frecuencia

DIPUTADO	INTERVENCIONES	DIPUTADO	INTERVENCIONES
<b>Partido Revolucionario Institucional</b>			
Amador Rodríguez Lozano	7	Enrique Rico Arzate	7
Blanca Ruth Esponda Espinosa	6	Salomón Jara Cruz	6
Juan José Rodríguez Prats	6	Alejandro Luévano Pérez	6
Agustín Basave Benítez	5	Raymundo Cárdenas Hernández	5
Eloy Cantú Segovia	5	Juan Hernández Mercado	5
Joaquín Ernesto Hendricks Díaz	5	Josafat Arquímides García Castro	5
Juan Antonio Nemi Dib	5	Manuel Huerta Ladrón de Guevara	5
Juan José Castillo Mota	4	Gilberto Rincón Gallardo y Meltis	5
Jorge René Flores Solano	4	Martha Patricia Ruiz Anchondo	5
Laura Alicia Garza Galindo	4	<b>Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional</b>	
Miguel González Avelar	4	Demetrio Hernández Pérez	8
Enrique Edgardo Jacob Rocha	4	Abundio Ramírez Vázquez	8
Enrique Sada Fernández	4	José de Jesús Berrospe Díaz	7
Alfredo Villegas Arreola	4	Odilón Cantú Domínguez	7
Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas	4	Eberto Croda Rodríguez	7
Efraín Zúñiga Galeana	4	Manuel Terrazas Guerrero	7
<b>Partido Acción Nacional</b>		Tomás Correa Ayala	6
Esteban Zamora Camacho	10	José Octaviano Alaniz Alaniz	5
Lucas Adrián Del Arenal Pérez	8	Luisa Álvarez Cervantes	5
Víctor Martín Orduña Muñoz	8	<b>Partido Auténtico de la Revolución Mexicana</b>	
Gonzalo Altamirano Dimas	7	Cecilia Guadalupe Soto González	18
Salvador Abascal Carranza	6	Adolfo Alfonso Kunz Bolaños	15
Alfredo Lujambio Rafols	6	Yolanda Elizondo Maltos	6
Juan de Dios Castro Lozano	5	Servando Hernández Camacho	6
Fauzi Hamdan Amad	5	Leonides Samuel Moreno Santillán	6
Lydia Madero García	5	Francisco Dorantes Gutiérrez	5
Daniel De la Garza Gutiérrez	4	<b>Partido Popular Socialista</b>	
Marco Antonio García Toro	4	Juan Gualberto Campos Vega	10
Patricia Alina Terrazas Allen	4	Martín Távira Urióstegui	10
Arturo Torres Del Valle	4	Cuauhtémoc Amezcua Dromundo	9
<b>Partido de la Revolución Democrática</b>		Héctor Ramírez Cuéllar	9
Jorge Alfonso Calderón Salazar	26	Juan Jacinto Cárdenas García	8
Miguel León Corrales	14	Hildebrando Gaytán Márquez	8
Emilio Becerra González	11	Francisco Hernández Juárez	6
Alejandro Encinas Rodríguez	10	Jorge Tovar Montañez	6
Guillermo Flores Velasco	10	Héctor Morquecho Rivera	5
René Juvenal Bejarano Martínez	9	<b>Independientes</b>	
Carlos González Durán	9	José María Téllez Rincón	11
José Martín del Campo Castañeda	9	Javier Centeno Ávila	7
Elpidio Tovar de la Cruz	9	Nicolás Olivos Cuéllar	5
Liliana Flores Benavides	8		
Francisco Javier Saucedo Pérez	8		
Eloi Vázquez López	8		





### Participación en tribuna por grupo parlamentario

Fueron en total 293 los diputados que ocuparon la tribuna en 882 ocasiones durante las 26 sesiones del primer periodo ordinario.

Partido	Intervenciones	Diputados
PRI	275	152
PAN	152	62
PRD	219	38
PFCRN	71	14
PARM	67	13
PPS	73	10
Independientes	25	4
<b>Total</b>	<b>882</b>	<b>293</b>

### Diputados que se incorporaron al trabajo legislativo

Nombre	Entidad	Distrito	Partido	Fecha
Víctor Díaz Palacios	Puebla	II	PRI	3/XI/92
Benjamín López Aguirre	Tamaulipas	III	PRI	3/XI/92
Elisa Meza Rochin	Sinaloa	V	PRI	3/XI/92
Rubén Miranda Villalba	Tamaulipas	I	PRI	3/XI/92
Alicia Montaña Villalobos	Sinaloa	III	PRI	3/XI/92
Yolanda Robinson Manríquez	Baja California Sur	I	PRI	3/XI/92
Ramiro Rojo López	Sinaloa	II	PRI	3/XI/92
Gabino Rutiaga Fierro	Durango	III	PRI	3/XI/92
Servando Hernández Camacho		3a. Circunscripción	PARM	12/XI/92
Carmen Bolado del Real	Tamaulipas	V	PAN	24/XI/92
Romeo Flores Leal		3a. Circunscripción	PARM	24/XI/92
Marlene Herrera Díaz	Chiapas	VI	PRI	1/XII/92
Ma. Clara Mejía Guajardo		3a. Circunscripción	PPS	1/XII/92
Enrique Pichardo Ramírez		2a. Circunscripción	PAN	15/XII/92
Manuel Medellín Milán	San Luis Potosí	VI	PRI	21/XII/92

Fuentes: *Sumario de actividades legislativas*. Primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, y "LV Legislatura: Proceso legislativo del 1er. periodo ordinario de sesiones, año II, nov-dic, 1992", en *Cuadernos de Apoyo* No. 15, Sistema Integral de Información y Documentación, Comité de Biblioteca, febrero de 1993.

## La educación a debate

**C**on uno de los índices de votación a favor más altos del segundo periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó el 16 de diciembre las reformas al artículo tercero constitucional que consagran la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, modifican el régimen de excepción jurídica de las escuelas particulares, garantizan que el Estado impartirá los niveles de enseñanza preescolar, primaria y secundaria, abogan por la descentralización de la educación y, a través de las enmiendas al artículo 31 de la Constitución, aclaran la corresponsabilidad de los padres de familia en la enseñanza básica.

Las modificaciones a los artículos tercero y 31 de la Carta Magna estuvieron precedidas de un intenso trabajo legislativo en las comisiones de Educación y de Gobernación y Puntos Constitucionales, en donde se modificó sustancialmente la iniciativa original enviada por el Ejecutivo, al tiempo que se dictaminaron siete iniciativas presentadas anteriormente por el PAN, el PRD y el PPS, que permanecían rezagadas.

A través de estas reformas se eleva a rango de garantía individual el derecho a la educación, se busca mejorar el nivel educativo de los mexicanos y se estipula que el Estado no abandonará su papel como principal responsable de proporcionar educación básica.

En la exposición de motivos del dictamen aprobado por 427

votos, se señala que "en el tránsito de México al siglo XXI, la fortaleza de la soberanía, las libertades más amplias, la justicia social, una mejor democracia y la competitividad económica, reclaman, de acuerdo al espíritu del artículo tercero, un nuevo aliento a la política educativa para que se mantenga el papel decisivo que la educación ha desempeñado en el desarrollo social del país".

El trabajo en comisiones reunió a un amplio y plural grupo de diputados involucrados con el sistema educativo, entre los que se contaban varios dirigentes sindicales del magisterio, así como especialistas en el tema. También se creó una subcomisión para dialogar con otra similar nombrada en el Senado, con el fin de realizar intercambios de opiniones.

### Cuatro palabras

La etapa de consultas previa a la elaboración del dictamen, incluyó una comparecencia del secretario de Educación, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien explicó que la reforma tenía como objetivos "consagrar el derecho de los mexicanos a recibir educación, precisar la obligación del Estado de impartir educación preescolar y secundaria -sumándolas a la primaria-, establecer la obligatoriedad de la secundaria, garantizar la vigencia del carácter nacional que debe tener la educación" y, en

referencia a la situación de los planteles particulares, terminar con "la indefensión jurídica que afecta a los miembros de la sociedad civil dedicados a ofrecer servicios educativos".

Durante esa comparecencia, Zedillo





afirmó que las reformas consignan como garantía individual el derecho a la educación, lo que antes no estaba estipulado en el artículo 3o. y, por lo tanto, formaliza la obligatoriedad de proporcionar enseñanza a todo el pueblo.

En esa ocasión, la polémica más enconada giró en torno a una frase del texto original de la iniciativa, que señalaba que “el Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria a todo el que la solicite”. Diputados de las fracciones de partidos opositores, especialmente del PPS y el PRD, argumentaron que estas últimas cuatro palabras condicionaban la obligatoriedad del Estado y se prestaban a confusión, pues se entendía que el Estado no tenía obligación de dar educación a quien no la solicitara. Duran-



te la discusión en comisiones se acordó suprimir esta frase, de modo que el texto del primer párrafo del artículo tercero, quedó así: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”.

Otro tema de debate fue la obligación del Estado con respecto a la educación superior. En las enmiendas a la iniciativa se dejó sentada –a través del añadido de una fracción al texto del artículo tercero– la obligatoriedad del Estado de proporcionar educación básica y promover y atender las demás modalidades de enseñanza –incluida la educación superior–, así como apoyar la investigación científica y tecnológica y alentar el fortalecimiento y la difusión de nuestra cultura.

Asimismo, en respuesta a una de las demandas más sentidas del PAN, se estipula la obligación y el derecho de los padres de familia de enviar a sus hijos a la primaria y la secundaria; además, se exime a los particulares del régimen de excepción al que estuvieron sujetos desde la reforma constitucional de 1934, considerada como inoperante y objeto de la indefensión jurídica de éstos frente a las decisiones de las autoridades.

#### Desvelados por la escuela

Alrededor del mediodía del miércoles 16 de diciembre, el pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión del

dictamen, que duró más de 13 horas y se prolongó hasta las tres de la madrugada del día siguiente.

En lo general, el dictamen se aprobó con 427 votos a favor, de los grupos parlamentario del PRI, el PRD, el PAN, el PARM y el PFCRN, y 12 en contra, provenientes de la diputación del PPS, que durante el debate insistió en que se trataba de una reforma “contrarrevolucionaria” y manifestó su oposición a la modificación del régimen jurídico de las escuelas particulares.

En lo particular, el artículo tercero recibió 283 votos a favor y 87 en contra. Una decena de cambios propuestos por los partidos opositores durante el debate, fueron desechados a lo largo de la votación. Entre ellos destacó uno de amplio consenso entre las fuerzas opositoras, que reclamaban una participación responsable de los medios de comunicación masiva.

Otros puntos polémicos del debate fueron el carácter laico de la educación pública, criticado en algunos aspectos por los diputados panistas; la preocupación por la indefensión económica de la educación superior, expresada por la bancada perredista, y el derecho de los padres de familia a participar en la educación de sus hijos.

Entre más de una docena de legisladores, intervinieron tres miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE): Jesús Martín del Campo, del PRD; Hildebrando Gaytán Márquez, del PPS, y Jesús Saravia Ordóñez, del PRI. También participaron el exrector de la UAM Xochimilco y diputado por el PAN, Francisco José Paoli Bolio y el líder del Sindicato de Trabajadores Universitarios, Nicolás Olivos Cuéllar, de la fracción independiente.

**Los objetivos de las reformas: establecer de manera explícita el derecho a la educación, incluir a la secundaria obligatoria y terminar con la indefensión de las escuelas particulares**

# *E* I PPS manifestó su oposición a la modificación del régimen jurídico de las escuelas particulares

El diputado Agustín Basave, del PRI, fundamentó el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación. Destacó la relevancia del trabajo legislativo y afirmó que la meta principal de la reforma es aumentar el nivel de escolaridad de los mexicanos.

Basave reseñó los objetivos de los cambios: establecer de manera explícita el derecho a la educación, incluir a la secundaria obligatoria y terminar con la indefensión de las escuelas particulares.

En su turno, el diputado pepesista Hildebrando Gaytán expuso el voto en contra por su partido, al considerar

de la Comisión de Educación— se opuso a la modificación del régimen jurídico de las escuelas particulares. A lo largo del debate, esta posición sería reiterada por otros diputados de la misma fracción.

Por el PARM, Yolanda Elizondo Maltos señaló que los cambios propuestos son trascendentes e informó que en el dictamen se introdujo una propuesta parmista para la redacción del párrafo tercero del artículo constitucional, donde se estipula que el Ejecutivo Federal, para determinar los programas de estudio de la enseñanza básica, “considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas

y aboga por un sistema de enseñanza que promueva la democracia. Terrazas manifestó su preocupación porque una reforma de tanto alcance no se ubique expresamente en la reforma del Estado ni en una estrategia general “para el cambio de épocas que vivimos”.

El dirigente magisterial y legislador del PRD, José Jesús Martín del Campo, indicó que la bancada perredista votaría a favor del dictamen en lo general, pero alertó que hacer obligatoria la educación secundaria “no garantiza por sí mismo que los mexicanos tengan acceso inmediato a ese nivel, ni mucho menos que se logre la calidad educativa que se merecen”.

Del Campo hizo un recuento histórico de los principales cambios realizados en el sistema educativo mexicano, para finalizar con la afirmación de que se debe regular mejor el papel de los medios masivos de educación e insistir que el gasto estatal destinado a la educación debe corresponder al porcentaje señalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco): ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. El diputado perredista puso especial énfasis en la necesidad de duplicar el gasto estatal en la enseñanza secundaria y la educación superior.

Por el Partido Acción Nacional, el diputado Francisco Javier Salazar



que las reformas trastocan la participación del Estado en la educación y “se continúa por un camino que va en la tendencia opuesta a considerar como una función de servicio público a la educación”. En especial, el legislador pepesocialista —uno de los secretarios

y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale”.

A nombre del PFCRN, el diputado Manuel Terrazas argumentó a favor, resaltando que la reforma mantiene el carácter laico de la educación pública



Sáenz recordó con preocupación "el grave fracaso de todos los programas, planes y proyectos educativos"; hizo un diagnóstico de la situación de la enseñanza mexicana y afirmó que "el fracaso educativo bien puede llamarse desastre educativo". Salazar Sáenz consideró importantes las reformas, en especial la modificación del régimen jurídico de las escuelas privadas, así como los reconocimientos a la necesidad de descentralizar el sistema educativo y al derecho de toda persona a recibir educación.



ANDRÉS GARAY

## *El carácter laico de la educación pública y la preocupación por la indefensión económica de la educación superior, fueron temas de debate*

Al fijar la posición del PRI, Jesús Saravia Ordóñez, también secretario de la Comisión de Educación, hizo una defensa de la educación pública, combinada con una mayor participación de la sociedad civil. Opinó que "la falta de acceso a la educación pri-

maria o secundaria no debe servir de pretexto para que se establezcan medidas de discriminación laboral". En su exposición, el priista hizo un largo recuento de los principales ideólogos e impulsores de la educación pública en México, desde Valentín Gómez Farías, Justo Sierra y José Vasconcelos hasta Jaime Torres Bodet, acotando que esta obra "simplemente no se habría realizado sin la participación de miles de maestros anónimos".

Por la fracción independiente, el exfrentista Javier Centeno Avila manifestó su coincidencia con el dictamen en lo general, aunque criticó la iniciativa por abrir la puerta "al fortalecimiento de la educación privada".

### **El derecho paterno**

La discusión del dictamen en lo general se extendería por cerca de seis horas. Destacó, entre otras, la controversia entre los panistas Juan de Dios Castro y José Francisco Paoli con los pepesistas Hildebrando Gaytán, Jacin-

to Cárdenas García y Cuauhtémoc Amezcua sobre el tema del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos de acuerdo con sus creencias.

Los diputados del PPS alertaron sobre "los intentos de privatizarlo todo" y criticaron la manipulación de las escuelas confesionales. En respuesta, Juan de Dios Castro hizo una extensa argumentación que suscitó aplausos de su bancada e interrupciones por abucheos de priistas y pepesistas.

Castro Lozano aclaró, desde su punto de vista, las dos posturas que prevalecían en la discusión: por un lado, la que defendía el derecho "del Estado a educar, con todo lo cambiante que sea la ideología de quien dirige los destinos del Estado, socialista en una época, capitalista en otra, liberalista social en otra época", y por otro, la opinión de "quienes decimos, afirmamos y defendemos que el derecho a educar corresponde preferentemente por prioridad de naturaleza, a los padres".

El abogado panista se manifestó en contra de la exposición que hiciera el

legislador por el PRI Agustín Basave sobre el principio de la educación laica. Comparó lo dicho por Basave con un concepto hitleriano sobre la educación. Citó una frase del dictador alemán: "si aún quedan hombres aislados, pertenecientes a nuestra generación, que creen no poder cambiar su mentalidad, les tomaremos los hijos y los educaremos para lo que sea necesario: Adolfo Hitler en Erfurt en 1933", refirió. La comparación provocó los abucheos de la bancada priísta, pero Castro Lozano continuó documentando el esfuerzo que históricamente ha desempeñado su partido para defender el derecho de los padres de familia a elegir el tipo de educación para sus hijos.

Enseguida, el diputado del PPS,

Juan Cárdenas García, aseveró que sólo el Estado puede garantizar el derecho a la educación para todos. En ese momento fue interpelado por el panista Francisco Javier Salazar Sáenz, quien le preguntó si estaba de acuerdo con la afirmación de Hitler. Cárdenas respondió que no estaba de acuerdo con las ideas panistas, para luego rematar: "es falso que el laicismo se interprete como una condición sectaria. El laicismo en México es sinónimo de educación científica".

La cita hitleriana despertó aún más polémica. El frentista Octaviano Alaniz dijo que Hitler mintió y "así le está pasando ahora al compañero Juan de Dios Castro". Remató con la afirmación de que "el Estado tiene toda la obligación y el derecho de impartir la educación, si no, nos puede pasar lo que sufrimos después de la Independencia en que nos convertimos en dos grandes bloques en la República para pelearnos, sangrar al país, hacer que impere la verdad". Enseguida, exhortó a que se centrara la discusión en los conceptos de la iniciativa.

Más adelante se discutió la participación de los sectores sociales en la planeación y elaboración de los programas de estudio, "aportación relevante de la Comisión", según opinó el diputado del PFCRN, Demetrio Hernández Pérez.

El legislador por el PAN José Francisco Paoli, introdujo un concepto más al debate: la solidaridad como principio fundamental del proyecto educativo. Asimismo, reiteró la defensa de sus correligionarios al derecho de los padres de familia a elegir el tipo de educación para sus hijos, e indicó que en el fondo de la resistencia a esta propuesta "está la idea de algunos de que

*Destacó la controversia entre los panistas y los pepesistas en torno al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos de acuerdo con sus creencias*

el Estado es quien tiene el derecho preeminente, lo cual resulta inadmisibles para nuestro grupo parlamentario". Sostuvo también que los medios de comunicación deberían tener una responsabilidad clara en la tarea educativa.

A su vez, el priísta Cesáreo Morales, tomando posición en el debate, indicó que su grupo parlamentario defiende un artículo tercero "que consagra de manera prioritaria el derecho del individuo a la educación", y afirmó que este artículo "no establece un modelo de formación de almas" ni permite que el Estado le arranque libertades a nadie. Por ello -señaló- es el Estado el que tiene el derecho y la obligación de impartir educación. Y convino en que las citas de Hitler fueron "malvenidas". Añadió que "la escuela pública por su carácter laico es asiento de la pluralidad y no del enfrentamiento a causa de las creencias".



ANDRÉS GATAY



En respuesta a la larga intervención de Morales, Paoli pidió la palabra para alusiones personales, con el fin de señalar que su fracción defiende "la libertad para establecer opciones serias que los padres de familia tengan para mandar a sus hijos a la escuela, en congruencia con lo que se les enseña en su casa".

En una nueva intervención, Hildebrando Gaytán, del PPS, también aludió a las palabras de Morales. Apuntó que para su grupo parlamentario "solamente la verdad científica es la que puede servirle al hombre para prepararse y para convivir dentro de la sociedad".

#### Asignaturas pendientes

En otros temas, el exfrentista y dirigente sindical universitario, Nicolás Olivós Cuéllar -ahora diputado independiente-, adelantó tres puntos de la discusión en lo particular: el reconoci-

***El dictamen  
fue aprobado  
en lo general por  
cinco grupos  
parlamentarios, con  
427 votos a favor y  
12 en contra***

miento al carácter pluriétnico de la educación básica, la obligación de los medios de comunicación para concurrir en la educación y la cuantificación del presupuesto estatal para este rubro, de acuerdo con lo estipulado por la Unesco.

A nombre del PRD, René Bejarano,

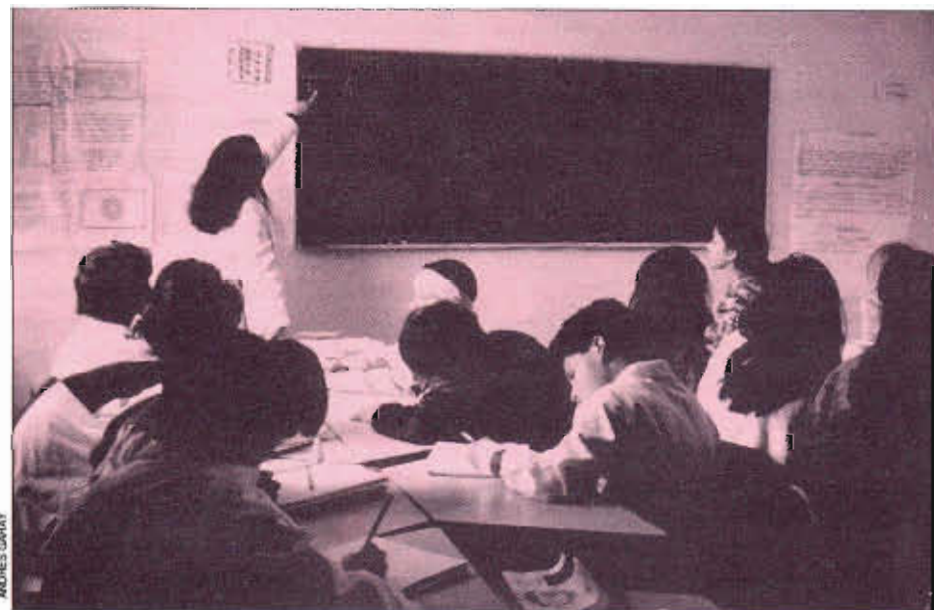
otro de los secretarios de la Comisión de Educación, entregó un documento con las consideraciones sobre los puntos de la Ley Federal de Educación que su partido juzga obsoletos y que, por ende, deberían ser modificados. En su intervención, el perredista manifestó su creencia en el derecho familiar a educar a los hijos, pero también en la educación laica.

En ese tono transcurrió la discusión en lo particular sobre el dictamen. El concepto de solidaridad, el papel del Estado en la educación, el laicismo, la necesidad de mayores recursos para la educación superior y el consenso general de que se abordaba un tema vital para la nación, fueron conceptos reiterados en el debate.

En tribuna, el legislador perredista Alejandro Encinas leyó una propuesta de punto de acuerdo respaldada por las fracciones del PAN, el PARM y el PFCRN para que se estipulara en el texto de la ley que "los medios de comunicación coadyuvarán al logro de los fines educativos". La propuesta fue rechazada por la mayoría priísta.

El dictamen finalmente fue aprobado en lo general por cinco grupos parlamentarios, con 427 votos a favor y 12 en contra. En lo particular, la votación fue de 283 sufragios a favor y 87 en contra. En su turno, el Senado también aprobó, durante diciembre, las reformas y adiciones al artículo tercero constitucional, cuyo nuevo texto entró en vigor el seis de marzo de 1993, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Queda pendiente la discusión sobre las leyes reglamentarias, en las cuales previsiblemente se incluirán varios aspectos de la discusión en lo particular que fueron desechados.



# Fijando posiciones

**René Bejarano Martínez  
(PRD)**

Secretario de la Comisión de Educación

La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo si bien no abarca todos los temas que deben contemplarse en este artículo, sí recupera por lo menos uno de los que en el pasado veníamos planteando no sólo el PRD sino otros grupos sociales y políticos, que es el establecimiento de la secundaria obligatoria. Sin embargo, algunos aspectos que deberían analizarse y clarificarse adecuadamente, son los siguientes:

Tendrá que precisarse un mecanismo para que la secundaria obligatoria sea una realidad y no nada más un deseo, y para ello deberá haber un programa muy concreto que contribuya a garantizar que se abata el rezago en educación primaria, que se abata el analfabetismo, que es del 12.4 por

Un raudal de propuestas relacionadas con la educación surgieron a partir de la iniciativa del Ejecutivo para reformar el artículo 3o. de la Constitución. Además de las modificaciones que en comisiones se hicieron a la propuesta presidencial, y que enriquecieron sustancialmente el dictamen, hay otra serie de puntos de vista, aún pendientes de acuerdo, que aflorarán en la próxima discusión de la ley reglamentaria correspondiente: la Ley Federal de Educación. Aquí, algunos puntos de vista de miembros de los seis grupos parlamentarios sobre lo ya aprobado y también acerca de lo que todavía está por definirse con respecto a ese tema central para el desarrollo de toda nación.

ciento, y que permita una cobertura del 100 por ciento a todos los estudiantes que demanden educación secundaria. Este programa deberá tener un proyecto de formación de docentes, un proyecto presupuestal mucho muy ambicioso y al mismo tiempo un proyecto de reorganización administrativa, para que las escuelas y los maestros estén donde se necesita.

Otro aspecto es que si bien coincidimos en que no puede mantenerse el régimen de excepción en un Estado de derecho, consideramos que debe precisarse en la Carta Magna que la educación es un servicio social y no un acto de lucro o que tenga fines de lucro; que no se eduque para el negocio y que la educación no sea un negocio, sino que se entienda como la prioridad de un Estado que ve en ella un proyecto de

desarrollo social y político del país. También consideramos que en la Constitución deberá establecerse que los medios masivos de comunicación tengan la obligación de contribuir al esfuerzo educativo y que los mensajes que transmitan sean acordes con el texto y la filosofía del artículo 3o. constitucional.

Asimismo, creemos que en el texto de la Carta Magna debería incluirse que el Estado debe asignar cuando menos el ocho por ciento del Producto Interno Bruto a la educación, como lo recomienda la Unesco (organización de las Naciones Unidas para la educación y la cultura), para evitar que la política educativa y sobre todo el financiamiento de la educación estén sujetos, como en el pasado, a los vaivenes de las políticas sexenales o al cambio de funcionarios, que han signi-

ficado verdaderos desastres para la educación. Actualmente se destina el 5.2 por ciento del PIB a este rubro.

A la vez, consideramos que el texto del artículo tercero debe conservar la gratuidad de toda la educación que imparta el Estado. Además, planteamos que no se entendería por qué un nivel de educación obligatorio que es la primaria tenga libro de texto gratuito, y otro que también es obligatorio no lo tenga. Porque entonces sería muy demagógico decir que es obligatorio para los padres enviar a sus hijos a la educación secundaria. ¿Y si no tienen para comprar los 15 libros que necesita el niño cada año, cómo van a cumplir con esa obligación? Hay factores socioeconómicos exógenos a las escuelas que deben atenderse, y uno de ellos son los libros de texto. En ese sentido, estamos reclamando que también haya libros de texto gratuitos para todas las materias en la educación secundaria. Y que se avance hacia la construcción de un concepto que se llama ciclo básico unificado, es decir que todos los niños tengan por lo menos un año de educación preescolar, los seis de primaria y los tres de secundaria. Un ciclo básico de cuando menos diez grados. Y por ello también tendrá que haber un programa de educación para adultos porque hay muchos jóvenes que no han estudiado ni están estudiando la secundaria, y mu-





chos adultos que ni la primaria terminaron, además de muchos analfabetos.

Si no es así, pues los cambios van a ser solamente de imagen. No se trata nada más de que el texto diga eso, sino de que se cumpla: de que haya condiciones y programas para ello.



**Hildebrando Gaytán  
Márquez  
(PPS)**

Secretario de la Comisión de Educación

Para el PPS no es aceptable la iniciativa que envió el Ejecutivo a la Cámara para reformar el artículo tercero constitucional. La rechazamos porque es limitativa respecto de la obligación que tiene el Estado en relación con los demás niveles, tipos y modalidades de la educación. Es un retroceso en la tendencia que había venido observando hasta el presente en la extensión y la cobertura edu-

cativa. Marca una tendencia regresiva a la participación del Estado en la educación.

Los aspectos que se suprimen y que versan sobre la facultad del Estado con relación a las escuelas particulares y la educación de los obreros y campesinos, sumados a la redacción limitativa que viene en la fracción primera, son los que no aceptamos. Se aprovecha esta iniciativa para establecer retrocesos en otros aspectos, y la misma obligación de la escuela secundaria se pone en tales términos que constituye una limitante para el Estado, un abandono a los demás niveles de la educación. Podría decirse que no hay claridad respecto de la obligación del Estado en la escuela normal, en la escuela media superior, en las escuelas técnicas, en el politécnico, a los que no se hace referencia alguna y por lo tanto en esos términos queda en el aire esta obligación y responsabilidad del Estado.

Queremos que se esclarezca perfectamente la obligación que tiene el Estado en la tarea educativa y lo mismo sobre la educación normal. Esta materia es fundamental para el Partido Popular Socialista y de ella somos muy celosos y no podemos hacer transacciones, no podemos callar nuestra opinión ante retrocesos que se den en la educación, que acarreen más perjuicio a la nación que los que se den inclusive en otras materias, porque en éstos

se trata de la mentalidad que deben tener los jóvenes, las nuevas generaciones, sobre la vida, sobre la nación y sobre cómo deben ver y desarrollar la vida en todos los aspectos.



**Fernando Estrada  
Sámano  
(PAN)**

Secretario de la Comisión de Educación

El Partido Acción Nacional y sus sucesivas diputaciones históricamente han manifestado un interés responsable y prioritario en el tema de la educación. De manera tal que algunos de los aspectos que hemos considerado violatorios de las libertades de la sociedad, de las personas, fueron siempre objeto de propuestas de cambio por el PAN desde sus inicios, y en la historia legislativa del país se presentaron una serie de iniciativas de reforma. En este sentido hay una rica, larga, variada historia.

Un aspecto central en torno a la iniciativa del Ejecutivo es la concepción democrática de la educación. Se trata por una parte de una distribución igualitaria de oportunidades educativas, que por desgracia en México no solamente han sido insuficientes sino han mostrado una clara falta de equilibrio en tres niveles: entre la ciudad y el campo, entre las diversas clases sociales con favorecimiento de las más altas, y entre las regiones de desarrollo socioeconómico desigual, con favorecimiento también de las más desarrolladas, en términos de financiamiento de la educación, de inversión, de recursos humanos, de recursos pedagógicos. Esta tendencia tiene que cambiar.

Por otra parte, se trata de una educación para la democracia, y no hay cosa más deseducativa, por ejemplo, que la negación de esa educación para la democracia, en el fraude electoral. Es lo más antipedagógico y son los desvalores más claros en la educación de una sociedad en la convivencia democrática. Yo creo que este reto y esta contradicción tenemos que enfrentarlas cara a cara.

Estos son algunos de los puntos que reflejan la posición histórica y la propuesta de futuro en materia educativa del Partido Acción Nacional. Por una parte el propósito de justicia en el funcionamiento de las estructuras educativas y por la

otra, la afirmación de valores fundamentales de la convivencia social en un ambiente democrático. Y este es un reto que tenemos frente a nosotros, de cara al año 2000.

La obligatoriedad de la secundaria por ejemplo, tendría que tomar en cuenta capacidad y posibilidad reales de financiamiento para ese propósito por parte de la nación; en segundo término, el hecho de que sólo 55 de cada 100 niños que comienzan la primaria la terminan; tercero, que menos del 80 por ciento de quienes terminan la primaria, ingresan a la secundaria, de modo que así como en 1917 se inscribió constitucionalmente el ideal de la educación primaria universal y obligatoria, así también vamos a tardar muchos años en que la secundaria obligato-

ria sea una realidad actuante en México. Estos aspectos de financiamiento de la educación, de distribución de oportunidades educativas, de eficiencia interna terminal del sistema, de estructura educativa, de contenidos y métodos de la educación por una parte, y por otra, los valores y las finalidades, los objetivos que la educación tendría en nuestro país, son parte fundamental del debate.

Es evidente que en el artículo 3o. y en otras materias relativas a la educación, ha habido cambios, algunos de los cuales me parece que van orientados en la dirección correcta. En la medida en que creamos que estas orientaciones son serviciales para México, naturalmente Acción Nacional las apoyará. Y, por el contrario, estaremos no solamente en de-

sacuerdo sino de manera responsable en una actitud propositiva para mejorar aquellos aspectos que no nos satisfagan.

Doy el ejemplo de la obligatoriedad de la secundaria, que desde diversos puntos de vista es cuestionable en este momento de México, lo cual no quiere decir que se renuncie necesariamente a ese objetivo o a ese ideal, sino que es preciso señalar muy puntual y rigurosamente las posibilidades realistas de que ello se lleve a cabo.

### Yolanda Elizondo Maltos (PARM)

Integrante de la Comisión de Educación

Hemos propuesto que se especifique en términos constitucionales lo pluriétnico de nuestra cultura, de nuestra identidad nacional. Así como lo marcó en su momento la reforma al artículo cuarto constitucional, donde hay el pleno reconocimiento de la extensa gama de culturas que hay en el país.

También hemos hecho hincapié en la cuestión de la educación para adultos dado que se elimina en el texto de la iniciativa la referencia a la educación para obreros y campesinos.

Cuestionamos también que se estipule que es el Ejecutivo el que determinará los planes de estudio. La propuesta de nosotros es que en planes y



SERGIO MENDOZA

programas se tome en cuenta a la base magisterial, a los padres de familia y a los grupos de investigadores y científicos especializados en esta materia.

En lo general aprobamos la propuesta del Ejecutivo. Más adelante, cuando se discuta la Ley Federal de Educación, pondremos que desde la educación preescolar se imprima un sentido ecológico en la materia de ciencias naturales: una formación y una concientización desde la edad preescolar para que cuando el niño llegue a adulto tenga el pleno sentido de la protección de la naturaleza. Pero que eso quede establecido como una materia, que se le dé una atención especial a la cuestión ecológica en todos los programas de estudio desde preescolar. También proponemos la impartición obligatoria del inglés en todos los grados, desde el preescolar, dadas las necesidades que impondrá el Tratado de Libre Comercio. La mayoría de las escuelas particulares imparten ese idio-



SERGIO MENDOZA



ma, pero las escuelas oficiales no, y entonces va a haber una desventaja para los mexicanos que reciben la educación de parte del Estado.

También consideramos necesario que se atienda la educación para minusválidos. Están totalmente rezagados los niños, jóvenes y adultos que necesitan de la atención educativa especializada. Cuando se elabore la ley reglamentaria, haremos hincapié en la atención a esos grupos olvidados, que si bien constituyen una minoría, creemos que el Estado tiene la obligación de atenderla.

Otro punto es destinar mayor inversión en la educación, a nivel estado y municipio. La educación es parte del desarrollo y del progreso de un país y por lo tanto es necesario que se le destine mayor porcentaje del Producto Interno Bruto.

Hay otra inquietud que ya se manifiesta en muchos medios: que en la educación secundaria que imparta el Estado, también sea gratuito el libro de texto. Nosotros apoyamos esa idea.

### José de Jesús Berrospe Díaz (PFCRN)

Integrante de la Comisión de Educación

El PFCRN ha recibido con buena aceptación la propuesta de reformas al artículo tercero, puesto que consideramos que

debido a la modernización que el país ha tenido en estos últimos tiempos, una reforma a la educación se hace necesaria. Nosotros en lo general la hemos aceptado porque va en beneficio del pueblo mexicano, que es el principal objetivo de nuestro partido: ver por el bienestar de la clase más desprotegida. Y desde el momento que se contempla que la secundaria sea obligatoria y que será el Estado quien imparta este tipo de educación de una manera completamente gratuita, hemos aceptado la propuesta. Algunos de los señalamientos de nuestro partido son que los libros de texto, que son gratuitos en la primaria, también lo sean en la secundaria, para ayudar a la clase pobre, a la clase humilde. Estamos pidiendo también que en la redacción quede más clara la obligación del Estado para impartir la educación. No solamente precolar, primaria y secundaria, sino en más grados y niveles.

En algunas otras legislatu-

ras hemos hecho propuestas, precisamente una de ellas era que la secundaria fuera obligatoria y gratuita y la iniciativa del Ejecutivo responde precisamente a nuestra solicitud, por eso ha sido recibida con beneplácito por nuestro partido. Aprobada la ley, lucharemos con bastante entusiasmo para que se cumpla, para que esta gratuidad de que habla la ley sea un hecho, que no solamente quede estampada en el papel.

### Roberto Madrazo Pintado (PRI)

Presidente de la Comisión de Educación

Considero que las presentes reformas han logrado acercar y corresponder el orden fáctico con el orden jurídico, porque adecuan el ser al deber ser, es decir adecuan el derecho positivo a la evolución progresista de nuestro país. Dichas reformas además, sintetizan el sentir de los múltiples sectores sociales representados por las distintas fracciones parlamentarias, ya que junto con la iniciativa presidencial, fueron dictaminadas siete iniciativas más sobre educación provenientes de diferentes partidos políticos, lo que contribuyó a enriquecer, con la pluralidad de perspectivas y opiniones, el dictamen aprobado por el pleno.

Por lo anterior, puedo afirmar que durante el pasado



debate se evidenció una convicción común tendente a encontrar una normatividad realista, susceptible de auspiciar en el sector educativo resultados graduales pero tangibles que coadyuven a la universalidad, democratización y perfeccionamiento de la educación.

Cabe recordar que el derecho a la educación, consignado como la primera garantía individual de los mexicanos, significó la primera enmienda en nuestro pacto federal. Sin embargo, este derecho ciudadano y la consecuente obligatoriedad por parte del Estado eran un enunciado tácito que con la presente reforma ha quedado claramente expresado.

Por último, cabe señalar que la normatividad vigente en materia educativa al tiempo de ser fiel reflejo de una sociedad plural y en movimiento, como lo es la sociedad mexicana, responde con veracidad a la circunstancia del México contemporáneo.




LV



ANDRÉS GARAY

## Cuadro comparativo

# Artículo 3o. constitucional

TEXTO ANTERIOR	OBSERVACIONES	TEXTO INICIATIVA	OBSERVACIONES	TEXTO VIGENTE
<p>La educación que imparta el Estado -federación, estados, municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia;</p>  <p>I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;</p>  <p>II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:</p> <p>a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;</p> <p>b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al</p>	<p>Pasa a ser segundo párrafo.</p> 	<p>Todo mexicano tiene derecho a recibir educación. El estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria a quien la solicite. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.</p> <p>La educación que imparta el Estado -federación, estados, municipios- tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia;</p>  <p>I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;</p>  <p>II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:</p> <p>a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;</p> <p>b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al</p>	<p>Se cambia la palabra "mexicano" por "individuo".</p> <p>Se suprime la expresión "a quien la solicite".</p> <p>Se ubica el concepto Estado-federación, estados y municipios en el primer párrafo.</p> 	<p>Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados y municipios- impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias.</p> <p>La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia;</p>  <p>I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;</p>  <p>II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además:</p> <p>a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;</p> <p>b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al</p>



**TEXTO ANTERIOR**

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

**OBSERVACIONES****TEXTO INICIATIVA**

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. Para asegurar el pleno cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República;

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

**OBSERVACIONES**

Se establece que se considerará la opinión de las entidades federativas y los sectores sociales en la determinación de los planes de estudio.

Se establece que se considerará la opinión de las entidades federativas y los sectores sociales en la determinación de los planes de estudio.

Se añade esta fracción para estipular el compromiso del Estado con todos los tipos de educación y con la investigación científica y tecnológica.

**TEXTO VIGENTE**

aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale;

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

**TEXTO ANTERIOR**

III. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y grados. Pero por lo que concierne a la educación primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos) deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. Dicha autorización podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno;

IV. Los planteles particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que especifica la fracción anterior, deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el primer párrafo y la fracción II del presente artículo; además cumplirán los planes y programas oficiales y se ajustarán a lo dispuesto en la fracción anterior;

V. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares;

VI. La educación primaria será obligatoria;

VII. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

VIII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar o difundir la cultura de acuerdo con los principios

**OBSERVACIONES**

Pasa a ser fracción V. Se habla de modalidades en lugar de grados. Se unifica al régimen general el aplicable a la educación destinada a obreros y campesinos. La autorización expresa a particulares queda como inciso b). Se suprime la improcedencia de juicio o recurso contra la negativa o revocación de autorización.

Pasa a ser inciso a) de la fracción V.

Pasa al primer párrafo de la fracción V. Se suprime la discrecionalidad para retirar el reconocimiento de validez oficial. La ley señalará los casos en los que procede su otorgamiento o retiro.

Se adiciona la secundaria y pasa al primer párrafo del artículo.

Pasa a ser fracción IV, sin modificación alguna.

Pasa a ser fracción VI, sin modificación alguna.

**TEXTO INICIATIVA**

V. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;

VI. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar o difundir la cultura de acuerdo con los principios

**OBSERVACIONES**

Pasa a ser fracción VI.

Pasa a ser fracción VII.

**TEXTO VIGENTE**

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley;

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios



TEXTO ANTERIOR	OBSERVACIONES	TEXTO INICIATIVA	OBSERVACIONES	TEXTO VIGENTE
<p>de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;</p> <p>IX. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquéllos que las infrinjan.</p>		<p>de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y</p> <p>VII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas, correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquéllos que las infrinjan.</p>		<p>de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y</p> <p>VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la federación, los estados y los municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquéllos que las infrinjan.</p>
<b>Artículo 31 constitucional</b>				
<p>Son obligaciones de los mexicanos:</p> <p>I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince años, concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria elemental y militar, durante el tiempo que marque la ley de instrucción pública en cada estado;</p> <p>II a IV...</p>	<p>Se habla de "primaria" en lugar de "primaria elemental". Se adiciona la educación secundaria. Se elimina la referencia a la ley de instrucción pública en cada estado.</p>	<p>Son obligaciones de los mexicanos:</p> <p>I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince años, concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley;</p> <p>II a IV...</p>	<p>Se suprime el límite de edad.</p>	<p>Son obligaciones de los mexicanos:</p> <p>I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley;</p> <p>II a IV...</p>

# rregistro

• **NOMBRAMIENTOS.** Dos diputados de la LV Legislatura se incorporaron en enero a importantes cargos en la Secretaría de Gobernación. El chiapaneco César Augusto Santiago Ramírez, quien ocupaba la presidencia de la Comisión de Gobernación es ahora subsecretario de Desarrollo Político. En tanto, el regiomontano Eloy Cantú Segovia, presidente hasta enero de la Comisión de Asuntos Fronterizos, pasó a ser oficial mayor de la misma secretaría. Ante las licencias solicitadas por ambos legisladores, hubo nuevas designaciones en las presidencias de varias comisiones, las cuales deberán ser confirmadas por el pleno en el próximo periodo de sesiones que inicia el 15 de abril.

En la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales funge ahora como coordinador encargado el diputado José Antonio González Fernández



González Fernández

dez, quien era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Como presidente de esta última fue nombrado Rodolfo Becerril Straffon, coordinador de la diputación priista del estado de Morelos y hasta ese momento secretario de la misma Comisión de Relaciones Exteriores.



Becerril Straffon

En sustitución de Eloy Cantú en la presidencia de la Comisión de Asuntos Fronterizos es ahora coordinador encargado su coterráneo Agustín Basave Benítez, quien para estar en posibilidad de ocuparse de sus nuevas responsabilidades, dejará la dirección de la revista *Quorum* del Instituto de Investigaciones Legislativas, de la que se ocupó a lo largo de un año.

• **COMISIONES.** Aunque ocurrieron hace semanas y en diferentes momentos, no queremos dejar de consignar

los cambios en las presidencias de tres comisiones. En Agricultura y Recursos Hidráulicos, el sonorensé Julián Luzanilla Contreras suple al jalisciense Rafael González Pimentía quien, por cierto, fue sustituido en su diputación correspondiente al distrito V de su estado por Alfredo Gómez Gómez, quien tomó protesta en julio.

En la Comisión de Salud el bajacaliforniano José Ramírez Román, antes secretario de tal Comisión, ahora ocupa la presidencia. A su vez, Alicia Montañón Villalobos ocupa el lugar del diputado Gómez Campaña en su curul por el III distrito de Sinaloa.

Ante la licencia solicitada por el veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, su joven paisano Juan Antonio Nemi Dib funge desde meses atrás como presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. En tanto, Nohemí Guzmán Lagunes suple desde mayo a Miguel Ángel Yunes en la diputación del VIII distrito de Veracruz, correspondiente a Huatusco.

• **TABASQUEÑOS.** De la LIV Legislatura del estado de Tabasco nos llega su órgano de difusión, *Foro legislativo*, que en su edición correspondiente a diciembre de 1992 informa sobre los trabajos del primer año de ejercicio constitucional de esa legislatura. Los debates sobre la Ley de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Ley de Hacienda Municipal del estado de Tabasco y diversas leyes fiscales ocupan artículos especiales. Asimismo, en este boletín se comenta la nueva relación Estado-iglesias, así como comparecencias de diversos funcionarios ante ese congreso estatal, compuesto por 29 legisladores, donde hay representación de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.



• **LICENCIA.** Para estar en posibilidad de contender por la gubernatura de San Luis Potosí, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado por el sexto distrito de San Luis, Horacio Sánchez Unzueta, solicitó licencia en diciembre pasado. Lo sustituye Manuel Medellín Milán.

LIV



# PERFILES Parlamentarios

## Liliana FLORES BENAVIDES



SEGOVIA/NOZZA

Nació en Torreón, Coahuila, el 2 de marzo de 1955. Estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Regiomontana, así como diplomados en estadística y en formulación y evaluación de proyectos de inversión. Fundadora del PRD, es Consejera Nacional de su partido, miembro del Consejo Estatal en Nuevo León, integrante de la directiva del grupo parlamentario del PRD y tesorera del mismo. Ha sido asesora de movimientos ciudadanos de mujeres, colonos y ecologistas; dirigente del Movimiento Ciudadano Binacional en Defensa del Ambiente, y del Movimiento Por el Voto de los Mexicanos en el Exterior. También ha laborado como asesora de empresas y cooperativas en formulación y evaluación de proyectos de inversión y finanzas. Diputada federal por la tercera circunscripción, pertenece a las comisiones de Asuntos Fronterizos, Ecología y Medio Ambiente, Hacienda y Crédito Público y Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, así como al Comité de Administración.

## Agustín BASAVE BENÍTEZ



CAMARIN DE DIPUTADOS

De Monterrey, Nuevo León, y nacido el 21 de septiembre de 1958, es licenciado en Administración e Informática por el Tecnológico de Monterrey. Maestro en Administración Pública y Política Pública por la Purdue University, de Estados Unidos, así como doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, de Inglaterra. Es editorialista del diario *Excélsior* y autor de numerosos artículos publicados en diversos periódicos y revistas nacionales, así como del libro *México mestizo* de reciente aparición. Ha sido profesor de diversas asignaturas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, e investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma institución. Fue coordinador de asesores de la Dirección General de Programación, Organización y Sistemas de la Secretaría de Gobernación y gerente de Planeación e Informática de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. En el Partido Revolucionario Institucional, en el que milita desde 1982, ha sido subsecretario de Divulgación Ideológica del CEN, miembro de la Comi-

sión Nacional de Ideología de la CNOP, comisionado suplente ante la Comisión Federal Electoral y miembro del Consejo Consultivo del Movimiento Ciudadano de UNE, entre otros cargos. Es miembro fundador de Cambio XXI Fundación Mexicana y presidente de la misma en Nuevo León. Actualmente, diputado federal por el IX distrito de su estado, es coordinador encargado de la Comisión Asuntos Fronterizos, así como director de la revista *Quórum*, del Instituto de Investigaciones Legislativas.

## Angel ACEVES SAUCEDO

Nacido en 1940 en Izúcar de Matamoros, Puebla, es licenciado en Economía por la UNAM. Estudió la maestría y el doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de Nueva York. Se ha desempeñado como economista en la Dirección General de Estudios Hacendarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asesor en jefe del secretario de Industria y Comercio, coordinador general de la Oficialía Mayor del DDF, gerente general de Industrial de Abastos, subdirector comercial y director general de Productos Pesqueros Mexicanos, coordinador general de Abasto y Distribución del DDF y director adjunto de Fomento a Empresas Solidaridad de Nacional Financiera, entre otros cargos en la administración pública. Ha realizado diversas actividades académicas en la UNAM, entre ellas coordinador del área de economía en la Facultad de Comercio y Administración. Autor de tres libros sobre materia económica, ha sido articulista en los diarios *La Jornada* y *Excélsior*. Fue electo presidente del Colegio Nacional de Economistas en 1987. Miembro del PRI desde 1964, ha militado en la Liga de Economistas Revolucionarios, de la que fue su máximo dirigente nacional en el periodo 1980-1982. Fue subdirector de Estudios Económicos y director general del IEPES. Diputado federal en la LI Legislatura y senador de la República en el periodo 1982-1988, durante el que presidió la Comisión de Planeación Económica y Social y la segunda de Hacienda y Crédito Público. Como diputado federal por la primera circunscripción, es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y miembro de las comisiones de Comercio y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.



CAMARIN DE DIPUTADOS

# PERFILES Parlamentarios

## Israel GONZÁLEZ ARREGUÍN



Nació el 6 de junio de 1948 en Santa María del Refugio, municipio de Celaya, Guanajuato. Estudió en la Normal Rural de Celaya y posteriormente cursó la especialidad en Historia en la Escuela Normal Superior de la misma ciudad. También hizo estudios de Derecho en la Universidad Lasallista Benavente. Desde 1969 se ocupó como profesor de primaria y secundaria en diversas escuelas de su estado natal. En 1969 fue secretario de prensa y propaganda del Comité Nacional de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, y de manera indistinta ha sido presidente estatal y comisionado nacional del PFCRN en los estados de Guanajuato, Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Veracruz y Baja California, entre otros. Fue diputado local en Guanajuato, postulado por el Partido Socialista de los Trabajadores, de 1985 a 1988. Actualmente, diputado federal por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, funge como presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.

## Lydia MADERO GARCÍA



Nació en Monterrey, Nuevo León, el 21 de julio de 1950 y estudió la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como la maestría en Sociología Rural en la Universidad de Texas. Fue profesora de historia contemporánea de México a nivel preparatoria, así como investigadora en el Instituto de Ecología y Alimentos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y maestra de sociología rural en la misma institución. Perteneció al Partido Acción Nacional desde 1986, donde ha sido integrante del Consejo Estatal de Tamaulipas desde 1987 y del Consejo Nacional del mismo partido desde 1988; es también coordinadora de Promoción Política de la Mujer en Tamaulipas y secretaria de Comunicación en Ciudad Victoria. Es miembro activo de la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia desde 1979. Diputada federal por la tercera circunscripción, funge como secretaria de la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara.

## Raúl JUÁREZ VALENCIA



Nació el 5 de septiembre de 1949 en Guadalajara, Jalisco, y es licenciado en Turismo. Ingresó al PRI en 1968, donde ha realizado diversas actividades, tales como promotor juvenil de la IX zona con cabecera en Jocotepec, Jalisco; representante de la dirección estatal juvenil de su partido en la ciudad de México; director estatal juvenil; secretario general fundador del Movimiento Nacional de la Juventud Revolucionaria (MNJR) en su estado; secretario de coordinación y ejecución del CEN del MNJR; presidente del Comité Municipal en Guadalajara; miembro del Consejo Político Nacional; oficial mayor y presidente del Comité Directivo Estatal en Jalisco, así como presidente del Consejo Político en esa entidad. Fue diputado local en la XLVIII Legislatura de Jalisco y presidente del Congreso. Asimismo, diputado federal suplente en las L y LII legislaturas. Actualmente diputado federal por el XV distrito de Jalisco, pertenece a las comisiones de Asuntos Hidráulicos, Ecología y Medio Ambiente, Radio, Televisión y Cinematografía, Salud y Turismo.

## Manuel Rafael HUERTA LADRÓN DE GUEVARA



Oriundo de Jalapa, Veracruz, nació el 12 de julio de 1960. Es licenciado en Derecho y en Sociología Urbana y Política por la Universidad Veracruzana. De 1989 a 1991 fue coordinador del Centro de Información, Educación y Apoyo a la Familia del DIF de su estado. Tuvo los cargos de comisionado político estatal de la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda de Veracruz en 1984, comisionado político nacional de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular en 1987 y comisionado ejecutivo del Frente Continental de Organizaciones Comunes en 1990. Perteneció al Partido de la Revolución Democrática desde 1989, y en él ha desempeñado los cargos de consejero estatal —en ese año— y consejero nacional de 1990 a la fecha. Diputado federal por la tercera circunscripción postulado por el PRD, es secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y pertenece también a las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Asuntos Hidráulicos y Vivienda.



# PERFILES Parlamentarios

## Leonides Samuel MORENO SANTILLÁN



CÁMARA DE DIPUTADOS

Nació en Pachuca, Hidalgo, el 18 de agosto de 1936. Se graduó como guardia marino en la H. Escuela Naval Militar en 1959 y en 1960 ascendió a teniente de corbeta, obteniendo el título de Ingeniero Geógrafo. Actualmente es contralmirante y en su carrera naval ha desempeñado numerosas comisiones en el país y el extranjero. Ha obtenido condecoraciones al mérito docente naval por haber servido a la Escuela Naval como instructor militar con actuación distinguida, y honores a la perseverancia por haber prestado sus servicios a la armada de México durante 30 años ininterrumpidos. Además ha sido asesor de municipios y estados, gerente general de Productos Pesqueros de Yucatán, director general de Boempra de C.V., director comercial de Manufacturas D' Poncy, perito valuador de Aseguradora Mexicana, presidente del Colegio Nacional de Ritos Masónicos de México y presidente del Consejo de Administración de la Compañía de Servicios Navieros Internacionales. Al interior del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ha fungido como coordinador en comicios federales, estatales y municipales y fue también candidato a diputado federal en Hidalgo en 1988. Diputado federal en la LV Legislatura por la segunda circunscripción, es secretario de la Comisión de Pesca.

## Benjamín GONZÁLEZ ROARO



CÁMARA DE DIPUTADOS

Nació en el Distrito Federal el 28 de diciembre de 1954. Se tituló como licenciado en Economía con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una maestría en Administración y una especialización en Administración Pública, Programación y Computación. Obtuvo el Premio Nacional de Economía Política en 1980. Desempeñó el cargo de investigador económico en la Secretaría de la Presidencia y el Banco de México. Fue gerente de Logística de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), director general de diagnóstico en la Contraloría del Departamento del Distrito Federal y contralor interno de la delegación Gustavo A. Madero. En 1989 se incorporó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), coordinando programas económicos y de servicios en materia de salarios, retiros y vivienda. Den-

tro de Partido Revolucionario Institucional, en el que milita desde 1974, ha sido presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios de la delegación Magdalena Contreras, subdelegado de la CNOP en Tlaxcala e integrante del Consejo Político, entre otros cargos. Como diputado por el XXX distrito electoral del DF, es secretario de la Comisión del Distrito Federal, coordinador de la diputación del SNTE e integrante de las comisiones de Programación y Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, Vivienda, Educación y del Comité de Administración de la Cámara.

## Jorge FLORES SOLANO



CÁMARA DE DIPUTADOS

Nació en el Distrito Federal el 12 de marzo de 1937. Licenciado en Economía con mención honorífica por el Instituto Politécnico Nacional, obtuvo con su tesis "El desarrollo económico de México y las finanzas locales", el Premio Anual de Economía Banamex 1967. Realizó diversas especializaciones en planeación del desarrollo en la CEPAL y en evaluación de proyectos de inversión pública en el Centro Nacional de Productividad y el Centro de Desarrollo Industrial de la ONU, así como cursos para abogados del fisco en la Secretaría de Hacienda. Docente en materias de economía y finanzas en diversas instituciones de educación superior. Ingresó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1958, donde fue jefe del Departamento de Estudios Económicos, subdirector de Finanzas Públicas de la Dirección General de Estudios Hacendarios, director general de Ingresos Mercantiles, director de Política Tributaria, director de Política de Impuestos Indirectos y coordinador de la Administración Fiscal Golfo-Peninsular, entre otros cargos. Miembro del PRI desde 1958, ha sido colaborador del IEPES a partir de 1966, instituto en el que fungió como presidente de la Comisión de Ingresos Públicos. En el Partido Revolucionario Institucional se ha ocupado también como secretario general de la Liga de Economistas Revolucionarios y consejero de la Coordinación de Estudios Económicos y Financieros del CEPES del Estado de México. Fue diputado federal en la LIII Legislatura, por el Estado de México. De nueva cuenta diputado federal por la misma entidad, es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

# PERFILES Parlamentarios

## Jorge ZERMEÑO INFANTE



Nació en el Distrito Federal el 23 de enero de 1949 y estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, recibiendo con la tesis "Integración democrática y profesional en el Congreso de la Unión". Ingresó al Partido Acción Nacional en 1968 y en él ha participado en múltiples campañas electorales como representante ante diferentes comités distritales y municipales. Fue candidato al síndico municipal en Tlalnepantla, Estado de México, en 1992 y ha sido también candidato a regidor y a diputado federal en Torreón, Coahuila. Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en dos ocasiones (82-83 y 88-91) y consejero estatal de su partido en los estados de México y de Coahuila. Es además miembro del Consejo Nacional del PAN desde 1984. Diputado federal por la segunda circunscripción, pertenece a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Justicia y es consejero del Poder Legislativo ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

## Jorge TOVAR MONTAÑEZ



Nació el 6 de mayo de 1939 en el Distrito Federal y radicó desde 1943 en el estado de Chihuahua. Estudió la normal básica en la Escuela Normal Nocturna de Chihuahua y la especialidad en Matemáticas, así como el posgrado en Matemáticas Modernas en la Escuela Normal Superior del mismo estado. Fue subjefe del Departamento de Correspondencia y Archivo del gobierno del estado de Chihuahua y ha sido profesor en escuelas primarias, secundarias y normales de su entidad adoptiva. Es profesor fundador del Colegio de Bachilleres de Chihuahua. Ingresó al Partido Popular Socialista en 1965 y en él ha sido miembro del Comité Directivo Estatal en Chihuahua, secretario general del Comité Municipal en dos ocasiones y candidato a presidente municipal de la ciudad de Chihuahua en 1968 y 1986. Ha sido también candidato a diputado federal cinco veces y fue diputado federal suplente en la LIII Legislatura. En

1989 fue comisionado como auxiliar de la Dirección Nacional del PPS en el estado de Nuevo León y miembro del Comité Estatal de su partido en esa entidad nortea. Integrante del Comité Central del PPS de 1976 a la fecha. Ha sido, además, dos veces secretario general de la delegación D-II-8 de la sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e integrante de comités delegacionales del mismo sindicato. Actualmente, diputado federal por la tercera circunscripción, pertenece a las comisiones de Asuntos Fronterizos, Ciencia y Tecnología, Cultura, Deporte y Educación.

## José Antonio GONZÁLEZ CURI

Nació en Campeche el 4 de mayo de 1952, es licenciado en Administración de Empresas por la UNAM y cuenta con una maestría en Administración Pública. Ha desempeñado diversos cargos en la Administración Fiscal Regional Peninsular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como jefe de la Unidad de Administración de Recursos, jefe de la Unidad de Control Interno y Evaluación, coordinador administrativo y administrador regional peninsular. Consejero fundador de la Comisión de Derechos Humanos de su estado, fue coordinador general del Comité de Planeación para el Desarrollo del estado de Campeche. En el ámbito académico ha sido catedrático de diversas materias en la Universidad del Sudeste. Ingresó al PRI en 1971, y en él realizó varias actividades de coordinación en las campañas electorales para la presidencia, de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Entre muchas otras responsabilidades en el seno de su partido, ha sido coordinador general del Consejo Consultivo del CEPES en Campeche, presidente del Comité Estatal de Estudios para el Fortalecimiento Municipal del PRI en su estado, diputado local suplente en la LIII Legislatura y miembro fundador de Cambio XXI, Fundación Mexicana. Como diputado federal por la tercera circunscripción, es secretario de la Comisión de Pesca e integrante de las comisiones de Programación y Presupuesto, Relaciones Exteriores, Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y Marina.





# ÍNDICE LEGISLATIVO

H. Cámara de Diputados  
Leyes y decretos aprobados por la LV Legislatura  
Primer Periodo Ordinario de Sesiones  
Segundo Año de Ejercicio  
noviembre-diciembre, 1992

NOMBRE DE LA INICIATIVA	PRESENTADA POR	FECHA DE PRESENTACIÓN	TURNADA A LA COMISIÓN DE
Ley de Aguas Nacionales	Ejecutivo	02/07/92	Asuntos Hidráulicos
Ley Forestal	Ejecutivo	02/07/92	Bosques y Selvas, Ecología y Medio Ambiente
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993	Ejecutivo	10/11/92	Hacienda y Crédito Público
Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1993	Ejecutivo	10/11/92	Hacienda y Crédito Público
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1993	Ejecutivo	10/11/92	Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y Hacienda y Crédito Público
Decreto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1993	Ejecutivo	10/11/92	Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto
Decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1991	Ejecutivo	09/06/92	Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; Programación, Presupuesto y Cuenta Pública
Decreto por el que se revisa la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal 1991	Ejecutivo	09/06/92	Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, Distrito Federal
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal	Ejecutivo	10/11/92	Hacienda y Crédito Público

PRIMERA LECTURA	SEGUNDA LECTURA	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	OBSERVACIONES
10/11/92	12/11/92	01/12/92	Nueva ley que deroga la publicada el 11 de enero de 1972. Aprobada en lo general por 377 votos
18/11/92	24/11/92	22/12/92	Nueva ley que abroga la publicada el 30 de mayo de 1986. Aprobada en lo general por 334 votos
03/12/92	08/12/92	18/12/92	Se aprueba por 291 votos
09/12/92	10/12/92	21/12/92	Se aprueba por 273 votos
14/12/92	15/12/92	18/12/92	Se aprueba por 283 votos
16/12/92	17/12/92	21/12/92	Se aprueba por 289 votos
01/12/92	02/12/92	09/12/92	Se aprueba por 285 votos
02/12/92	03/12/92	10/12/92	Se aprueba por 271 votos
09/12/92	10/12/92	21/12/92	Se aprueba por 282 votos



NOMBRE DE LA INICIATIVA	PRESENTADA POR	FECHA DE PRESENTACIÓN	TURNADA A LA COMISIÓN DE
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos	Ejecutivo	10/11/92	Hacienda y Crédito Público
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Ejecutivo	12/11/92	Trabajo y Previsión Social, Seguridad Social
Decreto por el que se reforma el inciso B del artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos y se señalan las características de la moneda de veinte pesos	Ejecutivo, origen Senado	18/11/92	Hacienda y Crédito Público
Decreto que reforma los artículos 3º y 31 fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.	Ejecutivo	18/11/92	Gobernación y Puntos Constitucionales, Educación
Decreto que reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la Corporación Financiera Internacional	Ejecutivo, origen Senado	24/11/92	Hacienda y Crédito Público
Ley Federal de Protección al Consumidor	Ejecutivo	26/11/92	Comercio, Distribución y Manejo de Bienes de Consumo y Servicio

PRIMERA LECTURA	SEGUNDA LECTURA	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	OBSERVACIONES
03/12/92	08/12/92	18/12/92	Se aprueba por 296 votos
09/12/92	10/12/92	04/01/93	Incorpora mecanismos para que se reasignen mayores recursos a los renglones de pensiones y servicios médicos, sin que se incrementen cuotas ni aportaciones. Se eleva a rango de ley el Sistema de Ahorro para el Retiro. Se aprueba por 238 votos
01/12/92	01/12/92	08/12/92	Se aprueba por 364 votos
14/12/92	16/12/92	05/03/93	Se aprueba en lo general y los artículos no impugnados, por 427 votos. Los artículos reservados se aprueban en lo particular por 283 votos
01/12/92	01/12/92	11/12/92	Reforma el artículo 2º del decreto publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1955, con tres reformas posteriores. Se aprueba por 354 votos
11/12/92	14/12/92	24/12/92	Nueva ley que abroga la del 22 de diciembre de 1975 y sus reformas. Se aprueba por 327 votos



NOMBRE DE LA INICIATIVA	PRESENTADA POR	FECHA DE PRESENTACIÓN	TURNADA A LA COMISIÓN DE
Ley Federal de Competencia Económica	Ejecutivo	26/11/92	Patrimonio y Fomento Industrial, Comercio
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal, así como la Ley de Normas Mínimas sobre readaptación social de los sentenciados	Ejecutivo	08/12/92	Justicia
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica	Ejecutivo, origen Senado	09/12/92	Energéticos
Ley Federal de Turismo	Ejecutivo, origen Senado	09/12/92	Turismo
Decreto que abroga el similar, que prorroga los contratos de arrendamiento o locales que se citan	Grupo parlamentario del PARM	30/06/92	Distrito Federal
Ley Federal de Correduría Pública	Ejecutivo, origen Senado	14/12/92	Comercio
Ley Federal de Cinematografía	Ejecutivo, origen Senado	14/12/92	Radio, Televisión y Cinematografía

PRIMERA LECTURA	SEGUNDA LECTURA	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	OBSERVACIONES
11/12/92	14/12/92	24/12/92	Nueva ley que abroga la Ley Orgánica del artículo 28 constitucional en materia de monopolios del 31 de agosto de 1934 y otras tres leyes. Se aprueba por 317 votos
15/12/92	16/12/92	28/12/92	Se aprueba por 387 votos
17/12/92	18/12/92	23/12/92	Prevé formas adicionales de producción de energía eléctrica para coadyuvar con las actuales. Aprobada por 251 votos
17/12/92	18/12/92	31/12/92	Nueva ley. Aprobada por 302 votos
16/12/92	17/12/92	30/12/92	Establece un procedimiento paulatino para la "descongelación" de rentas en el D.F., entre otros asuntos. Aprobado por 375 votos
17/12/92	19/12/92	29/12/92	Nueva ley que deroga el Título Tercero del Libro Primero del Código de Comercio. Se aprueba por 323 votos
19/12/92	20/12/92	29/12/92	Nueva ley que abroga la Ley de la Industria Cinematográfica del 31 de diciembre de 1949 y sus reformas. Se aprueba por 322 votos



NOMBRE DE LA INICIATIVA	PRESENTADA POR	FECHA DE PRESENTACIÓN	TURNADA A LA COMISIÓN DE
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Sociedades de Inversión	Ejecutivo, origen Senado	14/12/92	Hacienda y Crédito Público
Permiso para que el presidente Carlos Salinas de Gortari se ausente del territorio nacional a partir del 30 de noviembre a fin de participar en la VI Reunión Cumbre del Mecanismo de Consulta y Concertación Política en Argentina, y realice una visita de Estado a la República de Paraguay	Ejecutivo, origen Senado	17/11/92	Gobernación y Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Relaciones Exteriores
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos	Todos los grupos parlamentarios	01/12/92	Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias
Decreto para que se inscriba en letras de oro en el muro del salón de sesiones el nombre de José Servando Teresa de Mier	Grupo parlamentario del PRI	01/12/92	Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias
Decreto para que se inscriba en letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados el nombre de Ignacio Manuel Altamirano	Grupo parlamentario del PPS	03/12/92	Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias

PRIMERA LECTURA	SEGUNDA LECTURA	PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	OBSERVACIONES
20/12/92	21/12/92	28/12/92	Se aprueba por 288 votos
24/11/92	24/11/92	26/11/92	Se aprueba en votación económica
03/12/92	09/12/92		Se aprueba por 312 votos. Pendiente de aprobación en la Cámara de Senadores
15/12/92	18/12/92	29/12/92	Se aprueba por 321 votos
18/12/92	21/12/92	29/12/92	Se aprueba por 274 votos



# Bolívar en México

Valentín Gómez Farías

El médico y político mexicano Valentín Gómez Farías comprendió ampliamente la trascendencia del sueño de Bolívar para América Latina. Con este espíritu, promovió en 1831 el primer tratado de amistad, comercio y navegación entre México y la República de Chile. En el documento destacan varios artículos en los que se observa el claro deseo de estrechar los lazos de unión y apoyo entre ambas naciones y el interés en hacerlos extensivos a toda la región con la creación de una asamblea general americana.

**1.** *Será perpetua entre los Estados Unidos Mexicanos por una parte, y la República de Chile por la otra, aquella estrecha y franca amistad que ha existido siempre entre ambas, por la identidad de su origen, idioma, leyes y costumbres, y que tanto importa al interés común de su recíproca independencia y libertad.*

**2.** *Las partes contratantes declaran que los mexicanos y chilenos, respectivamente, desde su entrada al territorio de la una o de la otra república, gozarán de la consideración, derechos y garantías que por las leyes de uno y otro país gozaren en ellos respectivamente, los que han obtenido carta de naturaleza, con tan solo que acrediten que en el país a que pertenecen están en posesión y goce de naturalizados, nativos o ciudadanos de él. Podrán, en consecuencia, luego que acrediten cualquiera de las cualidades antedichas, solicitar y obtener carta de ciudadanía, observando sólo las demás condiciones que exigen para ello, a los ya naturalizados por las leyes respectivas de la una y la otra república.*

**3.** *Los naturales de ambas repúblicas gozarán de la más completa libertad para ir con sus buques y cargamentos a todos los lugares, puertos y ríos de la una y de la otra, en los que actualmente se permite, o en adelante se permitiere entrar a los súbditos y ciudadanos de la nación más favorecida. Podrán permanecer y residir en*

*cualquier de las mencionadas repúblicas, y ocuparse libre y seguramente en la industria, profesión, giro u oficio que más les convenga, arreglándose a las leyes de cada país para sus naturales respectivos. (...)*

**14.** *Con el fin de arreglar puntos sumamente importantes, y de un común interés a todas las nuevas repúblicas de América, antes española, las dos partes contratantes se comprometen a promover con ellas, el nombramiento de ministros o agentes bastante autorizados para la formación de una asamblea general americana, que podrá reunirse en México o en el punto que acordare la mayoría de los gobiernos de dichas nuevas repúblicas.*

**15.** *Las partes contratantes se comprometen solemnemente a que las negociaciones que puedan entablarse entre la corte de Madrid y cualquiera de ellas, con el objeto de asegurar la independencia y la paz, incluyan y comprendan igualmente los intereses a este respecto, tanto de México como de Chile. Y se comprometen también a influir con las otras repúblicas de América, antes sujetas a la dominación española, para que en su caso obren de la misma manera.*

*De los Clásicos*

Informes y disposiciones legislativas, México, Edición del Comité de Actos Conmemorativos del Bicentenario del Natalicio del Doctor Valentín Gómez Farías, Talleres Gráficos de la Nación, 1981, pp. 119-124. **V**